



cincuentenario

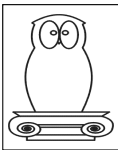
EL DERECHO

Diario de Doctrina y Jurisprudencia

Director:
Julio Conte-Grand

Consejo de Redacción:
Gabriel Fernando Limodio
Guillermo Peyrano
Luis Alfredo Anaya

Buenos Aires, martes 22 de noviembre de 2011 • ISSN 1666-8987 • Nº 12.882 • AÑO XLIX • ED 245



FILOSOFÍA DEL DERECHO

22

“La doctrina del derecho ha de ser tomada de las entrañas de la filosofía”
(CICERÓN, *Las Leyes*, 1, 5, 17)

SERIE ESPECIAL

Sampay, la Argentina de 2011 y el número 22

En los dolores de una Patria en la que se ataca sistemáticamente con su religión a lo mejor de su tradición fundadora y, por ende, a su moral; con el laicismo generalizado y cada vez más agresivo; donde la gran educadora masiva es la TV que Magdalena Ruiz Guiñazú calificó de “prostibularia”; en un Estado en que se disolvieron las fuerzas armadas y casi no existe el sistema penal por obra del garantoboliconismo; donde sigue existiendo la pobreza estructural y la deuda externa impagada e impagable, y cuando retrocedemos cada vez más en el concierto de las naciones, no está mal reconcentrarse desde la Universidad para recordar a un iusfilósofo y filósofo de la política, alguien que es connacional y contemporáneo de tres premios Nobel que supimos tener y cuya obra quizá principal, *La crisis del Estado de Derecho liberal-burgués*, “nació en función de la argentinidad” (pág. 11).

Desde vertientes socialistas se ha recordado el centenario de su nacimiento, y desde las católicas se compartió la idea, habiendo aquí diferencias. Unos con razonabilidad recordaban los malos pasos: “que no sea un homenaje *simpliciter*, pues no podemos olvidar sus incursiones socialistas con el peronismo marxista de los setenta y las injusticias cometidas entonces”, y otros que pundonorosamente preferían callar aquello y proponían que sólo hablásemos, en línea con Derisi, de que fue “uno de los más recios pensadores tomistas de América” o “un firme baluarte de la filosofía tomista del derecho en nuestro país”.

Si bien en este número no hay ningún estudio en sentido crítico negativo del pensador entrerriano, no nos olvidamos de aquella mala etapa, aunque no la tematizamos, y presentamos los juicios que sobre él emitió el fundador de nuestra Universidad; un artículo de quien tiene autoridad para ver en el jurista recordado la luz fundamental que animó la escuela de derecho político de la misma; una reflexión en torno de un trabajo del mejor SAMPAY sobre el

peor CARL SCHMITT, y otro, de joven pluma, que muestra cómo el autor entrerriano se preocupó de las condiciones del buen gobernante que –contra todo igualitarismo supersticioso– no son para cualquiera.

Arturo Enrique Sampay nació en Concordia el 28 de julio de 1911 y murió cristianamente en La Plata el 14 de febrero de 1977. Abogado en 1932 por la Universidad de La Plata, viajó a Europa y completó su formación alcanzando una erudición notable. Profesor de Derecho Político, fue Fiscal de Estado en la provincia de Buenos Aires durante la intervención *de facto*. Convencional constituyente, fue el principal doctrinario de la Constitución de 1949. Perseguido por el propio peronismo, se exilió en 1952 en Paraguay y Bolivia. Con la amnistía decretada por Arturo Frondizi volvió en 1958 a la Patria, y a la cátedra en Buenos Aires en 1973, hasta 1976. Perón no le perdonó ese art. 40 de la nacionalización de las fuentes de energía con el que, contradictoriamente, hacía tanto alarde y por eso no lo designó, como muchos esperaban, en la Corte Suprema de la Nación. Su obra más orgánica es la *Introducción a la teoría del Estado*.

Además del recuerdo del eximio pensador argentino, en este número tenemos como siempre las secciones Cristianidad, con la continuidad del diálogo sobre religión y Estado; Justicia y Economía, con usura y deuda externa; Correo de lectores; Notas, con la significativa premiación a tres jueces con el Premio Lejeune; Noticias, con el registro del último hasta ahora de una historia de 14 congresos de la Escuela Argentina del Derecho Natural; Otras latitudes y Bibliografía. La cosa empieza dialogando con un distinguido Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de los Estudios de Udine, Italia, y termina con un Boletín de Bioderecho, que reaparece lleno de buenas noticias de la última de las Jornadas de Derecho Civil (inconstitucionalidad del pseudo matrimonio homosexual,

AUTORIDADES

DIRECTOR:

HÉCTOR H. HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE REDACCIÓN

CARLOS GABRIEL ARNOSSI

CONSEJO ACADÉMICO

SERGIO RAÚL CASTAÑO - RICARDO DIP (Brasil)
DANIEL ALEJANDRO HERRERA - FÉLIX ADOLFO LAMAS
CARLOS IGNACIO MASSINI CORREAS
SILVIO PABLO PESTALARDO - JORGE GUILLERMO PORTELA
EDUARDO MARTÍN QUINTANA - CAMILO TALE
RICARDO VON BÜREN

“los chicos no pueden tener dos madres”, entre otras), y la amenaza herodiana de proyectos homicidas en el Congreso Nacional. Hasta el número 23, si Dios quiere.

H.H.H.

VOZ: FILOSOFÍA DEL DERECHO

Diálogos con Danilo Castellano

ver pág. 2 y sigs.



CONTENIDO

DIRECTORIAL

Sampay, la Argentina de 2011 y el número 22 1

DIÁLOGOS

Con Danilo Castellano, Decano de la Facultad de Jurisprudencia, Udine 2

DOCTRINA

FILOSOFÍA DEL DERECHO. Sampay según Derisi 4

FILOSOFÍA POLÍTICA. Arturo Enrique Sampay, filósofo político: la ciencia política y la justicia social, **por José María Medrano** 5

Sampay y Schmitt. Frente a la crisis de la ciencia jurídica, **por Sergio R. Castaño** 8

La fisonomía del político según Arturo Enrique Sampay, **por Germán Masserdotti** 10

NOTAS

JUSTICIA Y ECONOMÍA: i. Doctrina católica sobre la usura, **por Mario Meneghini** 11

ii. Justicia y deuda externa, **por Héctor L. Giuliano** 14

LA CRISTIANDAD: Los neomaritaneanos (Aproximación al nuevo liberalismo católico), **por Fernando Romero Moreno** 12

Premio Jerome Lejeune a tres jueces 16

Correo de lectores 16

¿Cometió genocidio el General Julio Argentino Roca? 16

Otras latitudes, **por Carlos Raúl Sanz** 21

NOTICIAS. CURSOS. JORNADAS. CONGRESOS 17

BIBLIOGRAFÍA

TALE, CAMILO, La equidad o epiqueya (concepto, criterios y aplicaciones), **por Carlos G. Arnossi** 22

TALE, CAMILO, La cuestión de las leyes injustas, **por Bruno Natiello** 22

BOLETÍN DE BIODERECHO (IX)

XXIII JORNADAS NACIONALES DE DERECHO CIVIL: 1) El pseudomatrimonio de personas de igual sexo es inconstitucional, **por Ángel L. Moia** 24

2) La autonomía del paciente es relativa, **por Silvia Marrama** 24

3) Propuestas legislativas en el Congreso de la Nación, **por Nicolás Lafferrière** 24

DIÁLOGOS

con Danilo Castellano

Las materias de fundamento en abogacía

La filosofía del derecho debería ayudar a los estudiantes a captar en las normas positivas la tentativa de dar reglas para una solución equitativa de los casos. La filosofía de la política debería ayudar al estudiante a comprender que el derecho público no es producto del poder, del poder brutal, no cualificado.

DFD: *Profesor Castellano, ¿qué importancia ha de darse a las materias filosofía política y filosofía del derecho en la currícula de la carrera de Derecho?*

DANILO CASTELLANO (DC): Pienso que las disciplinas filosóficas tienen un rol fundamental en la formación del jurista, a condición de que no sean enseñadas como una mera erudición. Ellas son particularmente útiles para la adquisición de un *habitus* mental (capacidades lógicas). Sobre todo, ellas son útiles para no permanecer prisioneros del nihilismo “jurídico” que considera al ordenamiento como condición del derecho, antes que individuar en el derecho la condición del ordenamiento. La filosofía del derecho debería ayudar a los estudiantes a captar en las normas positivas la tentativa de dar reglas para una solución equitativa de los casos, no a hacer de las reglas la fuente de la justicia. El derecho, hablando propiamente, no tiene fuentes de producción sino sólo fundamento. Por su parte, la filosofía de la política debería ayudar al estudiante a comprender que el derecho público no es producto del poder, del poder brutal, no cualificado. No es el producto de la sola voluntad, sea la del soberano, sea de las identidades colectivas. Su fundamento no está en el poder constituyente o en la soberanía, entendida como la definió BODIN, sino en la naturaleza y en el fin de la comunidad política que es una realidad natural, no convencional y que, por esto, tiene finalidades no sujetas al arbitrio de quien alcanza contingentemente a adueñarse del poder.

DFD: *Ud. es Preside (Decano) de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Udine. ¿Qué lugar asignan en ella al derecho romano (¿cuántos cursos?, ¿sólo privado o también público?), a la historia del derecho, a la filosofía, a la teología... En suma, a todas las materias que podrían calificarse de no pertenecientes a la “dogmática jurídica” (si Ud. nos acepta ese término, “dogmática jurídica”).*

DC: En la Facultad de Jurisprudencia, de la cual tengo el honor de ser *Preside pro tempore* desde 2007, se imparten tres cursos de Derecho Romano: dos (Instituciones de Derecho Romano y Derecho Romano, por lo tanto Derecho Romano Privado) en el curso de láurea en *giurisprudenza* en un ciclo único quinquenal, y el tercero Historia del Derecho Romano, esto es Derecho Romano Público, en el curso de láurea trienal en Ciencias de los Servicios jurídicos públicos y privados.

A mi criterio, la enseñanza del Derecho romano es altamente formativa y, por lo tanto, no se puede prescindir de ella. Es un error suprimir esta enseñanza, como han hecho algunas, incluso prestigiosas, facultades de Jurisprudencia en Italia, para dar lugar a la enseñanza de materias “operativas”, digamos más prácticas.

En la Facultad de Jurisprudencia de Udine se enseña también la Historia del derecho, sea medieval sea moderna, para poder ofrecer el conocimiento y dominio de la evolución de los ordenamientos e institutos jurídicos, y no sólo porque la cosa viene impuesta por la normativa vigente. No está prevista la enseñanza teológica. En compensación hay diversos cursos filosóficos: Filosofía del Derecho, Metodología de la Ciencia Jurídica, Filosofía de la Política, Filosofía moral y deontología, Teoría de los derechos humanos y, por último, Bioderecho que contempla, en parte, también la relación entre la moral y el derecho.

Un maestro habla de sus maestros

Del Noce, adoptado el método de su lectura transpolítica de la historia, tiene el mérito de haber demostrado que es imposible substraerse al juicio del tribunal de la praxis cuyas normas son aquellas impuestas por la realidad, esto es por la consideración metafísica de las “cosas”.

DFD: *Háblenos de sus maestros...*

DC: He tenido la posibilidad de ser discípulo de Augusto Del Noce, uno de los mayores filósofos de la política

del Novecento. Con Del Noce ha habido siempre una buena relación, en el sentido de que él no ha pretendido nunca que sus discípulos pensasen absolutamente como él, sino que ha estimulado su autonomía de pensamiento...

DFD: *El maestro Fabro decía que el (buen) maestro es “maestro de libertad”...*

DC: En mi libro dedicado a su pensamiento (de Del Noce), *La politica tra Scilla e Cariddi*, refiero a mi singular encuentro con él. Lo escribí para rendir testimonio de su respeto hacia sus discípulos. He sido el primer discípulo de Del Noce y reconozco ser un discípulo que interpreta el pensamiento del maestro de un modo particular: tengo motivos de disenso, a veces incluso radicales, respecto de otros discípulos suyos, y con otros estudiosos de su pensamiento.

DFD: *(Enseguida, DC menciona su frecuentación de Cornelio Fabro y Marino Gentile, de Giovanni Ambrosetti, Dario Composta y Francesco Gentile y, entre los que cultivan el derecho positivo, de Pedro Giuseppe Grasso, “el actual decano de los iuspublicistas italianos”, y nos habla de su padre...).*

DC: Ha sido para mí relevante la constante, gradual y sabia enseñanza paterna. Mi padre demostró responsabilidad y disponibilidad para la formación de los hijos, no sobre bases eruditas, sino sobre fundamentos sustanciales. En definitiva, él me ha educado en un aristotelismo esencial, sobre todo en moral y política, y me ha introducido en la filosofía de la historia de De Maistre.

DFD: *(DC vuelve a su maestro Del Noce).*

DC: Cuando en los años de mi formación universitaria, después de un breve paréntesis “liberal” en mi adolescencia, me topé con Del Noce, éste intuyó inmediatamente cuáles eran mis intereses intelectuales y mi orientación vocacional, y me propuso, después del primer encuentro, discutir mi tesis de láurea con él aconsejándome, y no por casualidad, estudiar el aristotelismo cristiano de Marcel De Corte, cosa que creo haber hecho con pasión y provecho.

DFD: *Le preguntamos por la principal aportación filosófica de Del Noce; le mencionamos su último libro dedicado a él en el centenario de su nacimiento e inquirimos en qué sentido se puede considerar que Del Noce fuera parcialmente liberal. Él responde y nosotros no podemos poner toda la riqueza de sus respuestas.*

DC: He querido dedicarle el volumen que Uds. citan, que no por causalidad indica en el subtítulo que se trata de un diálogo iniciado con él en 1964 y nunca interrumpido. Se trata de una tentativa de lectura del pensamiento y de la obra delnociana, que están abiertos a la consideración de la metafísica, lo que no consiente profesar coherentemente la doctrina liberal. Toda la literatura que yo conozco sobre él incluye a Del Noce en la Modernidad; pero yo, si bien no niego que él, cuyo itinerario intelectual fue muy articulado y atormentado, haya pensado con las categorías mo-

dernas; sobre todo en los años de la juventud y en la primera madurez, él fue sin dudas liberal. Sostengo, sin embargo, que él ha puesto las premisas fundamentales para refutar el pensamiento de la Modernidad y no, como muchos sostienen, para avalarla. Del Noce se mantiene liberal sobre todo en la praxis (lo que se evidencia en su adhesión constante a la democracia cristiana, de la cual fue senador); quedan en él aspectos doctrinales importantes de liberalismo (aunque él se oponía, por ejemplo, al liberal Hobhouse, cuyo vitalismo oponía a su liberalismo ético). Discutiendo en clases públicamente en 1964 afrontamos la cuestión, en la cual no encontramos nunca un punto de acuerdo en los decenios sucesivos. De todos modos, adoptado el método de su lectura transpolítica de la historia, tiene el mérito de haber indicado y demostrado que es imposible substraerse al juicio del tribunal de la praxis cuyas normas de referencia son aquellas impuestas por la realidad, esto es por la consideración metafísica de las “cosas” comenzando por el individuo humano.

Libertad y libertad negativa. Derechos humanos

La libertad negativa (concebida como ejercida con el solo criterio de la libertad) no es guiada por la racionalidad y expele toda referencia a la verdad. Sus consecuencias son la disolución de la moral propia tanto del totalitarismo “fuerte” como del totalitarismo “débil”, esto es de la democracia moderna.

DFD: *Ud. ha insistido en la noción de “libertad negativa” como clave de bóveda del pensamiento político moderno. ¿Cómo podría caracterizarla, en su esencia y en sus consecuencias?*

DC: Hegel, por ejemplo, la definió magistralmente cuando afirmó que la libertad del querer “es determinada en sí y por sí porque ella no es otra cosa que el autodeterminarse”. Dicha libertad negativa, que para toda doctrina gnóstica es la libertad a secas, excluye en su posición, o sea en su autodeterminación, todo criterio. Ella no es guiada por la racionalidad y expele toda referencia a la verdad. La filosofía moderna está caracterizada por la tentativa (fallida) de afirmación de esta libertad que lleva al nihilismo. Sus consecuencias son el escepticismo gnoseológico, la antimetafísica, la disolución de la moral y el relativismo político, propia tanto del totalitarismo “fuerte” como del totalitarismo “débil”, esto es de la democracia moderna.

DFD: *¿Qué relación establece Ud. entre libertad negativa y principio de soberanía, entendida en sentido “bodniano”?*

DC: Precisamente, dicho *principio di sovranità* representa la aplicación de la libertad negativa al sector político. Según ella, derecho y libertad son necesariamente conflictuales: donde hay reglas hay una limitación de la libertad. A la luz de esta *Weltanschauung* se ha podido afirmar coherentemente que Los Diez Mandamientos son los obs-


Lo que escribió Danilo Castellano (libros de autoría exclusiva)

- 1) *L'aristotelismo cristiano di Marcel De Corte*, Firenze, Pucci Cipriani editore, 1975.
- 2) *La “Contestazione”, una via cattolica al radicalismo?*, Udine, La Nuova Base, 1977.
- 3) *Pagine di filosofia dell'educazione*, Udine, Grillo editore, 1977.
- 4) *La libertà soggettiva. Cornelio Fabro oltre moderno e antimoderno*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984.
- 5) *La razionalità della politica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1993.
- 6) *L'ordine della politica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1997.
- 7) *La verità della politica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002.
- 8) *Razionalismo e diritti umani*, Torino, Giappichelli, 2003
- 9) *De Christiana Republica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2004
- 10) *L'ordine politico-giuridico “modulare” del personalismo contemporaneo*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007.

- 11) *La politica tra Scilla e Cariddi*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010.
- 12) *Ordine etico e diritto*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

Además, ha publicado contribuciones en 46 volúmenes, así como ha estado a cargo de la edición de 35 libros. Por otra parte, ha escrito 366 ensayos, además de artículos y recensiones, siendo traducido al francés, alemán y español. Ver “Trayectoria”.

DFD: *¿En qué temas o libros está trabajando ahora?*

DC: En este momento estoy tratando de llevar a término un breve manual de Filosofía de la política, destinado principalmente a los estudiantes de Jurisprudencia y de Ciencias Políticas y, más en general, a aquellos que se ocupan de las cuestiones políticas con intereses principalmente doctrinales o teóricos, no históricos. Estoy trabajando, también, sobre el problema “Constitución” bajo el perfil de los fundamentos y considerando algunas cuestiones que los “juristas positivos” generalmente omiten. 

táculos para la libertad; que la moral está toda ella en la sola intención subjetiva; que el silencio de la ley es *condictio sine qua non* de la libertad y que, porque este silencio es imposible, es necesario pensar y querer como piensa y como quiere el Estado (republicanismo) o bien como piensa o como quiere la mayoría contingente (orden de la democracia moderna). Todas formas de totalitarismo, aunque enmascaradas.

DFD: *¿En qué sentido podría ser lícito afirmar que las modernas declaraciones de derechos, lejos de fundar los derechos humanos, llevan a la violación de los auténticos derechos humanos?*

DC: Ante todo, como he intentado demostrar con *Razionalismo e diritti umani*, los derechos reivindicados y proclamados por las históricas Declaraciones (a partir de las americanas del siglo XVIII y de aquella de la Revolución Francesa de 1789) son, en último análisis, reivindicaciones del derecho al ejercicio de la “libertad negativa” (...) Un jurista italiano contemporáneo (Gustavo Zagrebelsky), favorable a la “libertad negativa”, ha sostenido fundadamente que la moderna visión de los derechos humanos se basa sobre la pretensión de poder instaurar el orden jurídico que se estima preferible, antes que el reconocimiento del orden jurídico natural, esto es el “dado” por el Creador y, de todos modos –también para el ateo–, necesariamente captable por la razón. Los derechos humanos “históricos”, por lo tanto, son afirmaciones del nihilismo jurídico y ni “defienden” ni reivindican el respeto del derecho como determinación de lo que es justo. Antes bien, a menudo representan su negación...

DFD: *En nombre de la persona se olvida la naturaleza de la persona y se la destruye... El profesor Castellano nos habla de una concepción errónea de la persona, según la cual ésta tendría derecho a satisfacer cualquier deseo...*

DC: Así se ha llevado a reconocer por ley, por ejemplo, el derecho subjetivo a la pornografía de Estado (cfr. *Legge della Repubblica italiana* n. 223/1990 [...]), y, por vía jurisprudencial, a que cada uno pueda disponer de su propio cuerpo para las finalidades que se le antojen.

DFD: *Así, el orden jurídico debe estar al servicio de cualquier disparate...*

DC: Un verdadero absurdo, porque en este caso el ordenamiento jurídico es absolutamente subordinado a la voluntad de las personas y cualquier deseo suyo, por lo tanto, está destinado a su disolución.

DFD: *Ud. tiene una visión negativa de las Declaraciones...*

DC: No obstante, las Declaraciones de derechos humanos nacen de la exigencia de ultrapasar el positivismo jurídico para dar al ordenamiento fundamento y criterios (aunque muchas veces se limiten a dar vuelta y contradecir sus fuentes) que no sean autorreferenciales.

D’Agostino, “el antidegásperi” y la realeza de Cristo

Si el Estado se empeñase en perseguir el fin de la neutralidad, debería suprimirse a sí mismo. El problema no es la “neutralidad”, sino qué doctrina asegura que el Estado, entendido como comunidad política, alcance el bien común. De Dios y del orden sobrenatural no sólo se puede sino que se debe hablar.

DFD: *Ud. ha dedicado un libro al gran político italiano Carlo Francesco D’Agostino. ¿Qué es lo más significativo, doctrinalmente, de su fundamentación de la necesidad del Estado confesional cristiano en Italia?*

DC: Efectivamente, he dedicado el libro *De Christiana Republica* a Carlo Francesco D’Agostino, que dedicó su vida entera a la tentativa de instaurar en Italia el Estado católico, esto es el Estado conforme a la ley natural. No, por lo tanto, un Estado ierocrático, sino un Estado “laico” que funda su ordenamiento jurídico sobre el derecho natural clásico. Carlo Francesco D’Agostino, que al fin de su larga vida terrena declaraba haber fracasado, fue un político italiano en verdad grande, porque consideró la política como un sector de la ética. Se contrapuso de ese modo teórica y prácticamente a toda forma de maquiavelismo político, también el teorizado y practicado por los católicos italianos (democracia cristiana). D’Agostino puede ser considerado, por lo tanto, como el anti De Gásperi, a quien él definió, objetivamente, como no católico. Su grandeza no está, por lo tanto, en el éxito sino en su fidelidad y en su testimonio demostrados con un largo empeño político y cultural prodigado esperando contra toda esperanza.

DFD: *Ud. ha defendido, siguiendo a D’Agostino, el Estado confesional cristiano...*

DC: La cuestión verdadera y central es que ni el Estado ni el ordenamiento jurídico pueden ser verdaderamente neutrales, esto es “indiferentes” de frente a las elecciones y a los valores. La neutralidad del Estado y del ordenamiento jurídico es una contradicción en los términos. Aun en el caso de que, como debería suceder según la doctrina política liberal, el Estado fuese llamado a garantizar la realización plena de la “libertad negativa” de la que ya hemos hablado, él tendría un fin positivo a alcanzar. Si el Estado se empeñase, conforme a cuanto sostiene esta doctrina, en perseguir este fin [de la neutralidad], el Estado debería (...) suprimirse a sí mismo. El problema, entonces, no es la cuestión de la “neutralidad”, sino el de qué doctrina asegura que el Estado, entendido como comunidad política, alcance su fin, esto es el bien común. El bien común siendo el bien propio de todo hombre en cuanto hombre y, por esto, común a todos los hombres, representa el fundamento y la regla de la política que se sirve del ordenamiento jurídico para alcanzar su objeto. El ordenamiento jurídico debe ser animado y guiado por el derecho natural (clásico), esto es aquel derecho esculpido lapidariamente en las Tablas de la Ley (los Diez Mandamientos).

DFD: *¿Qué piensa Ud. de la consigna de que los cristianos debemos predicar indeclinablemente el derecho natural pero no hablar de Dios ni del orden sobrenatural?*

DC: Pienso que la indicación es impropia, más bien errónea. Es verdadero por lo demás que el derecho natural (clásico) es válido también para el ateo y, por lo tanto, él debería estar en la base de todo ordenamiento jurídico. Bajo esta formalidad, la aplicación del derecho natural no representa una elección y una imposición dictada por la fe. Los hombres y las comunidades tienen deberes hacia Dios, que son de derecho natural. De Dios y del orden sobrenatural no sólo se puede sino que se debe hablar. El destino último del hombre, en efecto, es la vida sobrenatural, para alcanzar la cual sirve de ayuda el orden temporal. Nadie es constreñido a lograr la beatitud eterna, pero ninguno debe ser privado de esa posibilidad.

(Continúa en la página siguiente abajo)

Orden jurídico internacional y autarquía de la comunidad política

DFD: *Le planteamos al profesor italiano “la doctrina Fayt”, en la que un juez opuesto a la doctrina católica con fundamento positivo en la Constitución Nacional sostuvo que los tratados internacionales se subordinan a la constitución de la comunidad política. ¿Puede defenderse la primacía del orden constitucional interno de los Estados sobre los tratados fundándose en el derecho natural a la independencia de los Estados? DC empieza discerniendo qué se entiende por “derecho internacional”.*

DC: Al menos desde la Paz de Westfalia (1648) hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el Derecho internacional es dado prevalentemente (*rectius* exclusivamente) por el conjunto de las “normas” de los tratados de paz, los cuales son dictados de paz, porque el vencido no puede en verdad tratar con el vencedor, debiendo aceptar las imposiciones de éste. En este caso, el Derecho internacional está constituido por reglas impuestas por el más fuerte. ¿Es esto derecho? Deberíamos responder caso por caso. En línea de principio, sin embargo, deberemos responder negativamente si considerásemos derecho (como debemos hacerlo) solamente a la determinación de la justicia...

DFD: *Seguro... Iusnaturalismo...*

DC: Deberemos, por el contrario, responder positivamente si considerásemos “derecho” a cualquier regla o bien a cualquier mandato acompañado de efectividad. Después del Tratado de paz con el cual se pone fin a la Segunda Guerra Mundial se ha registrado el avance de un proceso innovativo por lo que hace al Derecho Internacional. No digo que haya sido abandonada la precedente concepción positivista del Derecho Internacional; ella, sin embargo, ha entrado parcialmente en crisis por diversos motivos: puesta en discusión, a veces, de la soberanía de los Estados sea en cumplimiento de acuerdos internacionales

entre los poderosos (por ejemplo, las zonas de influencia establecidas en Yalta y Potsdam); erosión de la soberanía de los Estados impuesta por la internacionalización creciente de las relaciones sean públicas, esto es entre los Estados, sean privadas (avance, primero tímido y luego macizo, del proceso de globalización económica que ha impuesto cuestiones jurídicas que escapaban al control de la soberanía de los Estados); creación de los tribunales internacionales, etcétera. La crisis, en parte, ha favorecido el repensamiento de la “cuestión Derecho Internacional”, también para dar aplicación a las (discutibles) Declaraciones de derechos del hombre elaboradas y aprobadas en los últimos tiempos, comenzando por la de la ONU de 1948.

DFD: *La visión de dos derechos contrapuestos fundados en el mero poder sólo se resuelve por la prevalencia del poder mayor, y esta prevalencia no expresa un valor jurídico, objetivo y verdadero. Coincidimos por ello plenamente con la respuesta a esa visión, respuesta admirable por su rigor doctrinal. Estimamos, con todo, que existe un derecho natural a la independencia de la que es sujeto la comunidad política (autárquica). Derecho que esencialmente consiste en la libre disposición sobre sus propios asuntos, bajo la ley natural y la ley de Dios, sin sujeción a otro poder (político-mundano). Si lo refiriéramos a la contraposición “constitución/tratados”, tal derecho facultaría a la comunidad política para, por ejemplo, preservar su tradición constitutiva y su legítimo orden jurídico de la convivencia frente a una disposición fundada en un tratado (y ello aun sin mediar una pretensión intrínsecamente injusta de parte del instrumento u órgano internacional).*

Echando mano de un supuesto hipotético, que no se atiene a determinaciones positivas (como las del Tratado de Viena), sino que intenta ir a “la naturaleza de las

cosas”: si cupiera la convicción a las potestades de una comunidad política, de buena fe, de que el bien común sufriría desmedro (grave) por la aplicación de un tratado –incluso en un caso en que ni la forma ni el fondo de esta pretensión contradijesen per se la justicia natural o divina–, esas potestades, ¿tendrían derecho a rehusarse a aplicar la disposición internacional? Estimamos, por nuestra parte, que sí tiene derecho la comunidad política; y que en ese derecho estriba el signo –no la esencia– de que esa comunidad es política (autárquica) sensu stricto. Si objetivamente no lo tuviera, sería porque tal comunidad sería parte (políticamente integrada) en un todo político mayor, o estaría en vías de serlo. Y entonces la disposición ya no sería internacional, sino de orden político interno (actual o incoado)...

DC: Creo estar de acuerdo...

DFD: *Interrumpimos a Castellano... y nos dirigimos a los argentinos: Un fundamento de derecho natural y de “espíritu” a la postura que fundada en la letra de nuestra Constitución nacional hace el juez Fayt del asunto, fuera de la cuestión de si se acepta la palabra “soberanía”, cosa que rechaza nuestro entrevistado según se vio y se verá en lo que queda de sus sabrosas palabras.*

DC: La autonomía, sin embargo, no es independencia como soberanía. Como el sujeto (humano) capaz tiene derecho a la autonomía, así también las comunidades, familiares y políticas, tienen el derecho a la autonomía en su respectivo campo. Esto no significa hacer absolutamente aquello que quieren (no son soberanas en el sentido filosófico). El ordenamiento constitucional de los Estados modernos se considera, hoy, soberano, lo que es inaceptable racionalmente y, por lo tanto, jurídicamente. Significa que en el campo de lo opinable pueden organizarse y operar entre las elecciones que estimen más oportunas. Sin violar, empero, la justicia. 🙏

Sampay. Uno de los “más recios pensadores tomistas de América” (Recuerdo de un filósofo jurídico y político argentino)



FILOSOFÍA DEL DERECHO

Sampay según Derisi

Con este libro denso y macizo [*La crisis del Estado de Derecho liberal-burgués*], SAMPAY se coloca decididamente en la primera fila de los pensadores católicos y filósofos del país, sobre todo en lo tocante a la Filosofía jurídica.

Con motivo de la aparición de la obra quizá más conocida de SAMPAY escribió el fundador de nuestra Universidad, Monseñor OCTAVIO N. DERISI, esta nota bibliográfica.

Una contribución del tomismo argentino: *Introducción a la Teoría del Estado*, de ARTURO E. SAMPAY. Hace más

de diez años llamamos la atención sobre los primeros trabajos de SAMPAY, quien, joven aún, con tanto acierto como inteligencia, hacía sus primeros *incursus* en el dominio de la Filosofía jurídico-política. Decíamos entonces: “En su joven autor se va perfilando el maestro de la Filosofía del derecho para un porvenir no lejano (...). Una profundización creciente de la Filosofía del Doctor Angélico, sobre todo de su Filosofía jurídica, que el autor ya conoce y maneja con inteligencia (...) así como de los grandes filósofos jurídicos españoles del siglo XVI (Vitoria, Suárez, etc.), unida al gran conocimiento que él posee de las corrientes modernas del derecho, harán muy pronto —no lo dudamos—

de Sampay un firme baluarte de la filosofía tomista del derecho en nuestro país”⁽¹⁾.

Poco tiempo después apareció su libro *La crisis del Estado de Derecho liberal-burgués*, macizo estudio en el que se conjuga una enorme erudición histórico-política con una sólida formación filosófica, que permite al autor una crítica firme e incisiva a la época y organización político-social del liberalismo, realizada desde sus causas más profundas. Después de repetir el pasaje más arriba citado de la revista *Estudios*, refiriéndonos a esta obra de Sampay, añadíamos: “Estas palabras de entonces, ante la realidad alcanzada, adquieren hoy el tono de una profecía, ya que con este libro denso y macizo, Sampay se coloca decididamente en la primera fila de los pensadores católicos y filósofos del país, sobre todo en lo tocante a la Filosofía jurídica

(1) *Estudios*, Buenos Aires, agosto de 1941, págs. 90-91.

El movimiento contra el crucifijo

DFD. *También le planteamos al profesor Castellano la cuestión del movimiento encarnizado contra la cruz en los lugares públicos...*


DC: No caben dudas de que la movilización contra la exposición del crucifijo en los lugares públicos (escuelas, tribunales, etcétera) es funcional a otras finalidades, no a las razones de “turbación” personal, ni a exigencias “educativas”, etcétera.

DFD: *Cristofobia...*

DC: Esto no exime de la consideración de su (presunta) “fundamentación”. Entiendo verdaderamente que los derechos humanos que vienen invocados para la remoción del Crucifijo (habida cuenta de la naturaleza histórica de las declaraciones de derechos humanos) son una razón suficiente —si se admite la validez del movimiento histórico ateo de los derechos humanos— para la expulsión de todo y cualquier símbolo religioso de los lugares públicos. Por otra parte, no se pueden invocar en defensa del Crucifijo ni razones sociológicas (como hacen algunos tribunales europeos), ni a motivaciones históricas, ni se puede sostener que el Crucifijo expresa valores universalmente coparticipados (como, por ejemplo, la tolerancia, la no violencia, etcétera), ni afirmar

que él es un símbolo de civilización, porque todo esto no alcanza a dar respuesta a aquellos que, sobre la base de los derechos humanos como históricamente se han puesto y afirmado, exigen la expulsión de los lugares públicos. En ese sentido, a mí me parece más coherente, aunque discuta la solución, con las premisas de la sentencia de la Corte Europea de los Derechos del Hombre del 3 de noviembre de 2009 (aquella luego reformada por la Gran Cámara de la Corte Europea de los Derechos del Hombre el 18 de marzo de 2011). Puede parecer absurdo, pero la absurdidad deriva de las premisas, no en la conclusión de la sentencia.

DFD: *Le planteamos a nuestro entrevistado que no dudamos de que el derecho de que el crucifijo presida los lugares públicos proviene de la Realeza de Cristo, y le insinuamos nuestra tesis de que en las sociedades históricamente cristianas y con derecho positivo reconocedor del cristianismo (v.gr., nuestra Constitución Nacional, art. 2°), hay razones fundadas en su tradición que puedan valer para sostener la presencia pública de símbolos cristianos. En definitiva —y aunque lo principal sea el otro argumento—, la circunstancia tradicional histórica de Cristianidad (y su eventual supervivencia jurídica en el presente) reforzaría la legitimidad del crucifijo en lugares públicos... Y sigue respondiendo.*

DC: El problema que Uds. ponen tiene, bajo un cierto perfil, una solución simple: el derecho y, por lo tanto, también el derecho subjetivo, no existen sin fundamento en la justicia; no es el producto de las normas puestas por los hombres. Él tiene por fundamento y justificación el orden ético, político, jurídico, puesto por el Creador, aunque esto puede y debe encontrar histórica y contingentemente aplicaciones diversas. Se trata de un orden dado, no inventado. Interpretados a la luz de esta consideración, los derechos humanos no son otra cosa que la reivindicación del cumplimiento de un deber. Ellos, por lo tanto, nacen de la exigencia/obligación de respeto del orden, y a veces de la exigencia de restablecer el orden “dado”, cuando ha sido violado. Como ese orden “dado” debe ser tomado como realmente es, quien quiera profundizar el asunto debería subir al autor de este orden y debería reconocer la Realeza de Cristo también sobre lo temporal, como lo subrayó, por ejemplo, Dante Alighieri. Pero los derechos humanos de los cuales se habla hoy no reconocen la Realeza de Cristo porque reivindican la soberanía de los hombres. 

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - ABOGADO - DERECHO POLÍTICO - DERECHOS HUMANOS - IGLESIA CATÓLICA

Trayectoria



El Prof. Castellano, actuando como presidente de una Comisión de Doctorado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Udine.

Profesor ordinario de Filosofía de la Política en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de los Estudios de Udine, donde enseña también Filosofía del derecho, Teoría de los derechos humanos y Bioderecho. Desde 2007 es *Preside* (Decano) de esa Facultad. Nació en Flaibano, Udine, en 1945. Discípulo de Del Noce, se laureó en Trieste con las mejores notas y una tesis en Historia de la filosofía moderna y contemporánea publicada en Firenze en 1975 con Prefacio de su maestro (*L'aristotelismo cristiano di Marcel De Corte*). Tras prestar servicio militar, enseñó en distintos órdenes de enseñanza, cumpliendo además con sus estudios jurídicos. A partir de 1974 comenzó a enseñar en la Universidad de Trieste y en 1978 en Udine, siendo en 1983 profesor asociado de Filosofía Moral, cátedra que regentó durante diecisiete años. Ocupó distintas funciones administrativas y de dirección académica, incluso de Departamentos, en la misma Facultad de Udine. Enseñó de 1989 a 1998 Filosofía del derecho e Historia de las Doctrinas Políticas en la Academia Militar de Módena.

En 1972 fundó el periódico *Instaurare*, que dirige desde entonces, y que ha organizado treinta y nueve congresos nacionales y seminarios en distintas ciudades italianas. Desde 1976 hasta 1984 dirigió la revista histórica friulana *La Panarie*. Dirigió, de 1986 a 2007, el *Institut International d'Etudes Européennes A. Rosmini*, de Bolzano, organizando desde ese cargo veintiún congresos internacionales además de muchos seminarios en Italia y en el exterior. Ha estado a cargo de una Colección de dicho Instituto, publicando veintiún volúmenes bajo su dirección.

Participó de la fundación del Istituto Mitteleuropeo Mediterraneo di Studi Politici Superiori con sede en la Universidad de Udine, formando parte de su Consejo científico siendo Director.

Forma parte del claustro de docentes del Doctorado en Filosofía del derecho en la Universidad de Padova, así como de la Escuela de Doctorado en derecho de la misma Universidad.

Es miembro de la Real Academia de España para las Ciencias morales y políticas (a propuesta de Juan Vallet de Goytisolo, Gonzalo Fernández de la Mora y Dalmacio Negro); y es miembro honorario extranjero de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación del Reino de España (a propuesta de José María Castán, Juan Vallet de Goytisolo y de José Luis Pérez de Ayala).

Entre 2003 y 2007 integró el Comité ético independiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Udine.

Desde 2007 hasta 2011 ha sido miembro del Comité Ético de la “Azienda Ospedaliero-Universitaria ‘Santa Maria della Misericordia’” de Udine.


Codirige con Mario Bertolissi y Umberto Vincenti, la Colección *Forme e realtà nell'esperienza giuridica* (editore Giappichelli, Torino).

Dirige la Colección *De re publica* (Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli) y la Colección *Etica, Politica, Diritto/ Il Friuli e la Filosofia della prassi* (Editrice Forum, Udine).

Forma parte del Comité científico tanto de la Revista Internacional de Filosofía práctica *Circa Humana Philosophia* de Buenos Aires (Argentina) como de la revista *Intus-Legere* de la Universidad Adolfo Ibáñez de Viña del Mar (Chile).

Forma parte del Consejo de Estudios Hispánicos “Felipe II” de Madrid.

Es socio del Institut International d'Etudes Européennes “A. Rosmini” (Bolzano), de la Sociedad Italiana de Filosofía Política (Roma), de la Unión de Juristas Católicos Italianos (Roma), del Centro de Estudios de Direito Natural “José Pedro Galvão de Sousa”, San Pablo, Brasil.

Es miembro del Consejo científico de la Fundación “Centro Studi Augusto Del Noce” (Savigliano/Cuneo). 

dica”. Y poco antes, en la misma nota bibliográfica de esta primera gran obra de SAMPAY, afirmábamos: “La obra de Sampay es, en todo el rigor del término, una verdadera contribución de la Filosofía cristiana al acervo cultural del país (...) Estamos frente al fruto sazonado de una larga lectura, de una amplia y seria información (...) y de una penetrante meditación iniciada desde sus más hondas raíces en la crisis irremediable y fatal que carcome al Estado de Derecho liberal-burgués y llevada a cabo con un método riguroso a partir de los orígenes ideológicos del problema hasta sus últimas aplicaciones concretas a la luz de la Filosofía cristiano-tomista”(2).

A esa obra, con la cual su autor se colocaba entre los más recios pensadores tomistas de América, siguieron varios años de intensa reflexión –sólo interrumpidos periódicamente con algún adelanto del fruto de la misma– en los

que ha madurado esta magnífica *Introducción a la Teoría del Estado*, que no dudamos en juzgar una de las más auténticas contribuciones contemporáneas del Tomismo al esclarecimiento filosófico –en su faz ontológica y gnoseológica, sobre todo– de la Sociología política. Los principios tomistas, reavivados en toda su fuerza en la vigorosa y penetrante inteligencia del autor, han demostrado una vez más su ilimitada fecundidad –que les viene de su objeto trascendente inagotable: el ser– al esclarecer con la luz de su verdad esta compleja y oscura trama de la realidad y del conocimiento político. Tal auténtico aporte de SAMPAY al esclarecimiento ontológico-gnoseológico de la *Teoría del Estado* y, por ella, a la misma Ciencia o Filosofía política –en su doble aspecto ontológico y normativo– en el maremágnum de teorías, cuyas mismas contribuciones se malogran por la falsedad del sistema en que se insertan, viene a demostrar una vez más no sólo la posibilidad

de la originalidad dentro del Tomismo –la posibilidad de lograr nuevos resultados mediante la penetración y aplicación de los principios perennes a nuevos aspectos de la realidad y del conocimiento– sino mucho más, a pesar de lo escandalizante que pueda aparecer la afirmación en un mundo inficionado de relativismo histórico: que todo genuino aporte a la solución de los problemas filosóficos, aun viniendo de autores no tomistas, únicamente en el Tomismo pueden salvarse y afianzarse *de jure* y alcanzar toda su significación dentro de una concepción verdadera de la realidad total(3).

OCTAVIO NICOLÁS DERISI

VOZ: FILOSOFÍA DEL DERECHO

(3) *Sapientia*, Revista Tomista de Filosofía, 1952, segundo trimestre, año VII, n° 24, págs. 103-104.

(2) *Ortodoxia*, Buenos Aires, julio de 1942, págs. 164-165.



FILOSOFÍA POLÍTICA

Arturo Enrique Sampay, filósofo político: la ciencia política y la justicia social

por JOSÉ MARÍA MEDRANO(*)

Quisiera resaltar de antemano algo que tiene –en mi caso– alcance testimonial y muestra un personal convencimiento: durante las cuatro décadas que han durado mis aportes docentes en la Universidad Católica Argentina, jamás han dejado de figurar entre las lecturas recomendadas a los alumnos textos de ARTURO ENRIQUE SAMPAY (1911-1977).

Además, en el diseño de los distintos planes de estudios de doctorados y licenciaturas en ciencias políticas de la UCA –que suelo llamar “nuestra Escuela”– estuvieron siempre presentes ideas de SAMPAY, tomadas esencialmente de su obra fundamental: *Introducción a la Teoría del Estado*(1). Pienso que SAMPAY no escribió nada mejor ni antes ni después sobre temas de filosofía política y ciencia política clásica.

Si bien el paso de SAMPAY como profesor en los aludidos cursos de la UCA fue intermitente y efímero, muchos principios, bases y fundamentos contenidos principalmente en su mentado libro han inspirado hasta hoy los estudios políticos en nuestra Escuela. Aquellos principios, bases y fundamentos realizaron y realizan cumplidamente aquello de ARISTÓTELES comentado por SANTO TOMÁS: lo propio de los sabios es ordenar.

Ello supone una mentalidad fuerte y profunda pero humana al fin. Quiere decir que estas mentalidades son fecundas, pero no infalibles. Son mentalidades e inteligencias ricas y variadas sobre todo si, como la de SAMPAY, son laboriosas e inquietas, pero, como todo lo humano, sujetas a limitaciones e incertidumbres. Esto es así máxime en materia política, en la que abundan opciones difíciles y polémicas.

Pienso que SAMPAY era perfectamente consciente de ello. Precisamente destacó el vasto campo de lo opinable en el ámbito de las acciones y prácticas políticas circunstanciales. Así dejó escrito en su libro fundamental: “El más poderoso opositor de la identidad de las distintas realidades políticas es el sujeto de la actividad política, o sea, el hombre con su libre albedrío. Este carácter original de la persona humana, dueña de su libertad, desvanece cualquier tentativa de formular leyes rígidas y absolutas para el suceder político-histórico y, por lo mismo, de presentar la poliforme realidad política como un cuadro de necesaria uniformidad”(2). Lo que en esto hay de particular, contingente e históricamente fluyente es el objeto propio –dice– de “los juicios empíricos, en el vocabulario moderno, y del conocimiento de opinión, en el léxico clásico, esto es, de un conocimiento de philodoxia y no de philosophía”(3).

Para SAMPAY son posibles generalizaciones y tipificaciones empíricas, pero lo que es más importante, son también posibles juicios de esencia –son sus palabras– que versan sobre lo universal y necesario en política, ese “núcleo de politicidad” que da cuenta de lo que la política es mediante una “ontología política y una política normativa derivada de esa ontología”. Es nítida la raigambre aristotélica de esta línea de pensamiento. Baste para acreditar este aserto el siguiente texto del ESTAGIRITA: “Lo cognoscible científicamente y la ciencia se diferencian de lo opinable y la opinión en que la ciencia es universal y (se forma) a través de (proposiciones) necesarias, y lo necesario no es admisible que se comporte de otra manera. En cambio, hay algunas cosas que existen y son verdaderas pero que cabe que se comporten también de otra manera”(4).

Así, SAMPAY busca, encuentra y formula proposiciones políticas universales y necesarias, y se atiene al referido concepto restringido de ciencia que aparece en el transcritto texto aristotélico, lo cual impide que aparezca la palabra “ciencia” en el título de su *Introducción a la teoría del Estado*, que trata del Estado *moderno*, es decir, de una individualidad histórica contingente insusceptible, a su parecer, de un saber estrictamente “científico”. Pienso, sin embargo, que no es posible asumir en nuestros días con alcance exclusivo y excluyente aquel concepto restringido, pues la noción, la teoría y la práctica de la ciencia –o de las ciencias– han cobrado hoy una amplitud analógica innegable.

De todas maneras, sobre la base de aquello universal y necesario que aporta la “ciencia política” con el alcance que nuestro autor le asigna, SAMPAY “teoriza” acerca de las cosas políticas “que existen y son verdaderas pero que cabe que se comporten también de otra manera”. Con respecto a tales cosas presenta lo que llama “juicios de opinión probable” y “juicios de opinión con certidumbre”, no fáciles de alcanzar: no hay unanimidad de opiniones en las prácticas y en las obras políticas. Tampoco, por ejemplo, en la reconstrucción e interpretación de los clásicos políticos, sean quienes sean: no median totales acuerdos y avenencias completas en la interpretación de ARISTÓTELES, CICERÓN, MAQUIAVELO, MOSTESQUIEU, ROUSSEAU, MARX, y tantos otros.

Con respecto a esto último, son instructivas las consideraciones de SAMPAY acerca de la precariedad de medios y recursos que afectan al conocimiento histórico(5), teniendo en cuenta que el propio SAMPAY no descarta –según sus propias palabras– “la generalización mediante la cual se consiguen las llamadas leyes históricas, esto es, las conexiones que habitualmente se presentan entre ciertos he-

chos humanos y las leyes que se extraen de la experiencia política de los siglos, lo que estructura una *Praxilogía política* como podría ser la *teoría de las revoluciones*, enunciada por Aristóteles, las conclusiones generales del saber político de Maquiavelo o las normas sociológicas expuestas por Vilfredo Pareto, todas las cuales carecen de universalidad y necesidad científica, porque como aquella generalización, son el resultado de meros juicios *probables*, o sea, que aceptan la posibilidad del contrario”(6).

Por lo demás, no se le escapa a SAMPAY –siempre discípulo de ARISTÓTELES y SANTO TOMÁS– que las certezas, opiniones, conjeturas y dudas no descartan la verdad: sólo muestran las limitaciones humanas para arribar a ella.

Quizás por esto no siempre consintió en reeditar alguna obra de su autoría. En tal sentido, recuerdo que en 1965, como alumno suyo en el ya referido curso de Doctorado de la UCA, le sugerí que reeditara su importante y juvenil libro *La crisis del Estado de Derecho liberal-burgués*(7). Se negó a hacerlo, pues adujo que para semejante tema tendría que escribir un libro nuevo, con nuevas aportaciones exigidas por el paso y las urgencias del tiempo. Empero, el perfil del autor, de la temprana obra mencionada y de las que siguieron, se completa con la especie de proclama que figura en el primer párrafo del Prólogo respectivo, escrito por el propio SAMPAY: “Este libro, afanada cosecha de una investigación sociológica del colapso que a nuestra vista sufre el Estado de Derecho liberal-burgués, nació en función de la Argentinidad”.

Dicho libro, a pesar de la presunta autocritica del autor y de las objeciones del propio presentador de la obra, el intelectual y profesor español Francisco Ayala, mereció subidos elogios: Octavio Nicolás Derisi –en su momento Rector fundador de la UCA– ponderó el trabajo como “una verdadera contribución de la filosofía cristiana al acervo cultural del país”(8). Por su parte, el eminente Ayala en el mismo prólogo del libro dejó escrito lo siguiente: “Pero no quisiera que estas observaciones críticas hicieran olvidar lo que es esencial y sirve de fundamento para hacerlas: la calidad excelente, el valor extraordinario y la significación sin par de un libro del que el menor elogio consistiría en ponderar el esfuerzo a que responde, la honradez intelectual con que ha sido concebido y ejecutado y el calor espiritual que lo anima, si a esta ponderación no viniera a unirse el reconocimiento del pulso firme con que ha sido trazado, para completar en él un espléndido fruto mental”.

No puedo dejar de evocar en este punto la dedicatoria que ARTURO ENRIQUE SAMPAY estampó en su juvenil obra: *A Faustino J. Legón. Maestro y amigo*. Legón fue el profesor fundador de la cátedra de Derecho Político de la Universidad Nacional de La Plata donde se desempeñó SAMPAY; fue además miembro fundador de los Cursos de Cultura Católica de Buenos Aires y primer Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UCA.

Estas últimas circunstancias muestran la antigua vinculación de SAMPAY con los mencionados Cursos de Cultura Católica y con nuestra Universidad Católica de Buenos

(*) Profesor emérito UCA.

(1) SAMPAY, ARTURO E., *Introducción a la Teoría del Estado*, 1ª ed., Buenos Aires, Politeia, 1952.

(2) Ibidem, pág. 361.

(3) Ibidem, pág. 380.

(4) ARISTÓTELES, *Analíticos segundos*, 88b/89a, trad. de Miguel Canel del Sanmartín.

(5) SAMPAY, ARTURO E., *Introducción...*, cit., pág. 495.

(6) Ibidem, págs. 382/383.

(7) Buenos Aires, 1942.

(8) Nota bibliográfica en *Ortodoxia*, Revista de los Cursos de Cultura Católica, n° 1, julio de 1942, págs. 164/169.

Aires. La vinculación no consistió en su presencia continuada como profesor, sino, como ya señalé, en la contribución de aquellos “espléndidos frutos mentales” aludidos –y augurados– por el profesor Ayala.

Por tanto, merece recordarse aquí lo que fueron los Cursos de Cultura Católica de Buenos Aires, como antecedentes de su “legítima sucesora”, esto es, la hoy Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, con especial referencia dentro de ella al doctorado y licenciatura en ciencias políticas de la UCA (nuestra Escuela), hoy a cargo del Instituto en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la misma Universidad.

Los iniciales Cursos de Cultura Católica fueron instituidos en 1922 por un grupo de jóvenes laicos con el propósito de cultivar las principales disciplinas que integran la doctrina católica.

Fecha crucial en la vida de tales Cursos fue el 12-9-39, momento en que la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades de Estudios, “con la autoridad que le fue concedida por el Ssmo. Padre Papa Pío XII”, aprueban las *Normas y Bases de los Cursos de Cultura Católica* que, según allí se dice, no aspiran sino a preparar el camino, ya sea a la Universidad Católica de la República Argentina, ya sea al Instituto de Cultura Superior Católica.

Con arreglo a tales previsiones, el 7-3-59, “en la festividad de Santo TOMÁS DE AQUINO”, mediante la declaración colectiva de ese día el Episcopado declaró oficialmente fundada la Universidad Católica Argentina, entidad en la que debían culminar aquellos trabajos culturales originarios según las nombradas disposiciones eclesiásticas. En aquella declaración dicen los obispos: “Los Cursos de Cultura Católica –transformados posteriormente en el Instituto Católico de Cultura– origen y parte integrante de la Fundación Ateneo de la Juventud que naciera después, tuvieron precisamente por objeto estimular la plenitud de la vocación universitaria bajo el signo de una rigurosa formación religiosa, de carácter científico, para preparar las generaciones de maestros, investigadores y estudiosos que serían, llegado el momento, el fundamento vivo de una nueva universidad”. Recuerda el Episcopado “la disposición estatutaria concerniente a los Cursos en el sentido de su desaparición y fusión con la futura universidad, cuando así lo dispusiera la Autoridad Eclesiástica”. Y agrega: “Ha llegado ese momento. Los Cursos han realizado, con abundante fruto, esa misión y cumplen hoy su último destino”.

Antes había surgido *Ortodoxia*, Revista de los Cursos de Cultura Católica, de la que se publicaron diecisiete números, algunos en entregas dobles (Buenos Aires, 1942-1947).

En el número 1 de julio de 1942 puede leerse: “Ortodoxia, rectitud dogmática o conformidad con el dogma católico. Tal el significado primordial de la palabra con que esta revista será nombrada. Y esto es ya una cierta definición de ella. Pero la palabra comporta también la significación etimológica de opinión recta. De esta ortodoxia se procurará que sean también expresión las páginas de esta revista”.

De lo significado por ambas acepciones se hicieron cargo los hombres de los Cursos: de la “ortodoxia mayor” de principios incommovibles y de la “ortodoxia menor” sobre lo que se deriva opinablemente de tales principios, pues no se proponen tanto repetir la enunciación de los principios expuestos en las definiciones de la Iglesia, “cuanto promover la dilucidación desinteresada de todo lo que en lo especulativo se sigue de los principios en el ámbito de lo opinable”. Y porque al ámbito de lo opinable le son inherentes los riesgos de todo ámbito de libertad, los “Cursos se ponen bajo el patrocinio rector de Santo Tomás de Aquino, Doctor Angélico y Doctor Común”.

Por otra parte, en el número inicial, *Ortodoxia* abrió sus páginas y ofreció hospitalidad a quienes, sin ser de los Cursos, realizaban análogas tareas intelectuales porque –dice– “está en la finalidad propia de los Cursos tanto como el suscitar en ellos vida intelectual católica, el servir como puedan a esa vida donde quiera que exista”.

Pues bien, SAMPAY, como convencido partícipe de semejantes doctrinas, aceptó la referida invitación y publicó en *Ortodoxia*, además de un “escolio” o nota explicativa

titulado *La pedagogía y la política en las estructuras históricas de cultura*⁽⁹⁾, dos importantes trabajos: *La filosofía del “iluminismo” y la Constitución argentina de 1853*⁽¹⁰⁾ y *Ontología del Estado*⁽¹¹⁾. Este último artículo anticipa, convenientemente adaptado y ampliado, las importantes y valiosas ideas contenidas en la *Introducción a la Teoría del Estado*, bajo los títulos *La ontología del Estado como objeto formal de la filosofía política y como saber previo y necesario para la Teoría del Estado y Naturaleza de la realidad del Estado*. Allí aparecen perdurables proposiciones acerca de la definición esencial del Estado y un análisis causal mediante la reseña de las causas eficiente, material, formal y final, con la insoslayable primacía y fecundidad normativa del Bien Común político (o “Bien común simpliciter”, en la terminología adoptada por SAMPAY). Además, en los mismos lugares se afirma al Estado como *ente real* de la categoría de relación, esto es, no como mero *ente de razón*, por un lado, ni, por otro lado, como *ente substancial* que existe *en sí* y no en las personas humanas que lo integran; en este sentido indica el propio SAMPAY: “El Estado tiene a modo de sustancia las personas humanas, que accidentalmente constituyen un todo; un todo integrado por unidades humanas correlacionadas que viven por sí mismas una vida propia en la comunidad”⁽¹²⁾.

En esta línea realista asevera SAMPAY: “El Estado, por tanto, se da en el distrito de la realidad histórica como una dinámica unidad de orden, causada por un fin, sin que el investigador, por el acto de conocerla, agregue o conforme algo respecto a esa realidad”⁽¹³⁾; lo cual requiere –dice SAMPAY– “una gnoseología realista, animada por la metafísica del ser”⁽¹⁴⁾.

Todo esto y más fue asumido por nuestra Escuela de Ciencias Políticas de la UCA, cuyo director inicial, Francisco Arias Pelerano, fue discípulo de SAMPAY. Puede leerse en este sentido la dedicatoria que SAMPAY estampó en la segunda edición de su tantas veces citada *Introducción...*: “Esta segunda impresión de la Introducción a la Teoría del Estado sólo lleva de nuevo las correcciones a errores de imprenta deslizados en la primera edición. Mi discípulo, el profesor de Derecho Político en la Universidad Católica de Buenos Aires, Doctor Francisco Arias Pelerano, tuvo a su cargo el cuidado de esta publicación. Vaya a él, entonces mi amistosa gratitud. A. E. S. Verano 1964/65”⁽¹⁵⁾.

Además, SAMPAY colaboró varias veces en la revista *Sapientia*, luego órgano de la Facultad de Filosofía de la UCA, cuyo director, el propio OCTAVIO NICOLÁS DERISI, publicó un minucioso y ponderativo artículo con el definitorio título *Una contribución del tomismo argentino: Introducción a la Teoría del Estado, de Arturo E. Sampay*⁽¹⁶⁾.

A su turno, el Doctorado y la Licenciatura en Ciencias Políticas de la UCA hicieron suyos a manera de base y punto de partida el siguiente proyecto filosófico-político de SAMPAY: “Recimentar, entonces, en la metafísica, la Teoría del Estado y también, en buena parte la Ciencia Política, pero recogiendo lo que aporta de verdadero el denso pensar sociológico de nuestro tiempo, será la empresa que nos impondremos en el segundo libro de nuestra obra”. Claro que, como quedó dicho, se trata de “base y punto de partida”, no punto de llegada ni pensamiento estático y petrificado ajeno a las contingencias históricas. “Base” de todos modos, cimiento que ha demostrado su solidez a través de la experiencia de años.

Por lo demás, SAMPAY incursionó varias veces en prácticas políticas de diverso cuño mediante opciones opinables y polémicas, aunque, más allá de discusiones y posibles divergencias, mantuvo hasta el final lo esencial de su pensamiento filosófico-político, signado por su catolicismo y su apego al ya mentado saber clásico.

A título de ejemplo, recuerdo que nuestro autor había objetado el concepto de política de CARL SCHMITT, basado en la tensión amigo-enemigo y también el llamado “decisionismo” del jurista alemán. Algunas de esas críticas aparecen en el ensayo *Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica*, que SAMPAY se decidió a reeditar en 1965, ya en su

madurez. De ese ensayo extraigo el siguiente revelador párrafo, en polémica con “algunos juristas del Río de la Plata”: “Por cuanto mi aceptación del derecho natural me coloca más lejos de Carl Schmitt que a ellos con su relativismo filosófico jurídico que es un púdico taparrabo para ocultar lo que el autor germano exhibe desnudamente, esto es, que al ser rechazado el derecho natural –como estos relativistas y aquel *decisionista* lo hacen– no queda más derecho que el derecho positivo y, por ende, el criterio de lo justo lo establecen los hombres que ejercen el poder político. ¡La vieja falsía que sirvió a Creón para sacrificar a Antígona! ¡Pero las ideas expresadas por Antígona, afirmando la objetividad de lo justo natural, siguen sosteniendo a nuestra civilización!”⁽¹⁷⁾.

Este texto muestra el perfil jurídico de SAMPAY que, unido a su saber político y a personales convicciones, puso en el centro de sus trabajos a las diversas formas de la justicia, en particular a la justicia social. A la justicia, problema crucial de lo político, lo jurídico y lo económico, es decir, de las tres preocupaciones capitales de SAMPAY.

Así, al asumir la crítica de monseñor DERISI a alguna ciencia política empírica, esto es, para decirlo con palabras del propio DERISI, la que no distingue lo “empírico sensible” de lo “esencial inteligible” y “llega así a un *sociologismo absorbente*”, nuestro autor escribió en 1971, pocos años antes de su muerte: “En conclusión, el amoralismo de la ciencia política empírica es mistificante de la realidad política en sus aspectos esencial y fenoménico. Esta mistificación es un subterfugio ideológico destinado a cegar la comprensión de la verdadera idea de justicia y a obstaculizar el progreso de la justicia”⁽¹⁸⁾.

Esa inclinación por la justicia lo llevó en sus últimos tiempos a volcarse marcadamente a las disciplinas socioeconómicas, con resultados desparejos. Precisamente, en el ya mencionado doctorado en ciencias políticas tuvo a su cargo en la primera mitad de 1965 el curso de Política Económica, lamentablemente trunco.

De todas maneras, tengo el convencimiento de que fue debido a las ideas de SAMPAY que ingresó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación el principio *in dubio pro iustitia socialis*, en la sentencia dictada el 13-9-74, en la causa “Miguel Ángel Bercaitz”, y firmada por él en su carácter de conuez del Alto Tribunal. Era entonces titular del Poder Ejecutivo María Estela Martínez de Perón.

Merece la pena transcribir casi íntegramente el considerando respectivo: “Y como esta Corte lo ha declarado, ‘el objetivo preeminente’ de la Constitución, según expresa su preámbulo, es lograr el ‘bienestar general’ (Fallos: 278:313), lo cual significa decir la justicia en su más alta expresión, esto es, la justicia social, cuyo contenido actual consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que esta cuenta **con vistas a lograr que todos y cada uno de sus miembros participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización**. Por tanto, **tiene categoría constitucional** el siguiente principio de hermenéutica jurídica: *in dubio pro iustitia socialis*. Las leyes, pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el ‘bienestar’, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad. Asimismo, este principio de hermenéutica *in dubio pro iustitia socialis* es aplicable a la interpretación de las leyes procesales, según se debe inferir de lo que tiene resuelto esta Corte con los siguientes términos: como ‘la justicia es una virtud al servicio de la verdad sustancial, ella debe siempre prevalecer sobre los excesos rituales’ (Fallos: 280:228). Principio que con referencia a los **sectores sociales más necesitados** tempranamente aplicó el tribunal –cuando integrábanlo conspicuos constituyentes del 53– con este enunciado admirable en su sencillez: ‘tratándose de personas desvalidas, es de equidad y aun de justicia apartarse del rigor del derecho para reparar los efectos de la ignorancia de las leyes o del descuido de su defensor’ (Fallos: 5:459). Ahora bien: la jubilación constituye la prolongación, después de la cesación regular y definitiva de la actividad social laboral del individuo, de la remuneración, como débito de la comunidad por el servicio que él le ha prestado. La Constitución garantiza ‘jubilaciones y pensiones móviles’ (art. 14 bis). O

(12) SAMPAY, ARTURO E., *Introducción...*, cit., pág. 423.

(13) Ibidem, pág. 356.

(14) Ibidem, pág. 14.

(15) SAMPAY, ARTURO E., *Introducción a la Teoría del Estado*, Bibliográfica OMEBA, Buenos Aires, 1961.

(16) *Sapientia*, n° 24, 1952, segundo trimestre, pág. 103 y sigs.

(17) SAMPAY, ARTURO E., *Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1965, pág. 9.

(18) SAMPAY, ARTURO E., *Crítica de monseñor Derisi a la ciencia política empírica*, Sapientia, volumen XXVI, 1971, pág. 436.

(9) En *Ortodoxia*, n° 5, noviembre de 1943, págs. 595/599.

(10) Ibidem, número 4 julio de 1943, págs. 324/351.

(11) Ibidem, número 8, octubre de 1944, págs. 409/429.

sea, prescribe que estas prestaciones asistenciales deben ser actualizadas permanentemente para compensar la continua desvalorización que en nuestra época experimentan los signos monetarios, perjudicando a los vastos sectores de la sociedad cuyas únicas rentas son entradas periódicas fijas en dinero. De aquí que esta Corte ha declarado reiterada y constantemente que ‘el principio básico que sustenta el sistema previsional argentino es el de la necesaria proporcionalidad que debe existir entre el haber de pasividad y el de actividad’ (Fallos: 263:400; 265:256; 267:196; 279:389). Y también, en consecuencia, ha afirmado, ‘enfáticamente, que las leyes de materia previsional deben interpretarse conforme a la finalidad que con ellas se persigue, lo que impide fundamentar una interpretación restrictiva’ (Fallos: 248:115; 266:19; 266:202; y muchos otros). No sólo, pues, la interpretación analógica restrictiva de un derecho social –en el caso, previsional– contraría a la uniforme jurisprudencia de esta Corte, concordante con la doctrina universal (el ‘principio de favorabilidad’, *Günstigkeitprinzip*, que formularon los autores alemanes a partir de la Constitución de Weimar...), sino que también se contrapone a la hermenéutica de las leyes que surge –según lo mostramos– del ‘objetivo preeminente’ de ‘promover el bienestar general’ que la Constitución se propone obtener para todos los habitantes del suelo argentino’ (énfasis en negrita agregado). Firman los conjuces Roberto H. Marfany (según su voto), Oscar de la Roza Igarzábal, Felipe S. Pérez, Cayetano Giardulli, Arturo E. Sampay.

El pensamiento de SAMPAY sobre este asunto se reconoce si, por ejemplo, se compara el considerando transcripto con otros textos de nuestro autor. Como es sabido, SAMPAY fue protagonista principal en la elaboración de la Constitución argentina de 1949, y pronunció el Informe del despacho de la mayoría de la Comisión revisora en el debate en general, en la sesión de la Convención Nacional Constituyente el 8-3-49. Dijo entonces SAMPAY: “**La necesidad de una renovación constitucional en sentido social es el reflejo de la angustiosa ansia contemporánea por una sociedad en la que la dignidad del hombre sea defendida en forma completa.** La experiencia del siglo pasado y de las primeras décadas del presente demostró que la libertad civil, la igualdad jurídica y los derechos políticos no llenan su cometido si no son completados con reformas económicas y sociales que permitan al hombre aprovecharse de esas conquistas. **Si se sume al hombre en la miseria, le resulta muy difícil la virtud, y si no cuenta con una economía estable que le dé seguridad para el mañana y confianza en el porvenir –el derecho a la seguridad social, como ahora se llama–, pierde todo estímulo para ocuparse en la vida pública y está obligado a someterse a la voluntad de quien es económicamente más fuerte, con lo cual queda relegado al margen de la vida social**”⁽¹⁹⁾. Y agregó más adelante en el mismo Informe: “**El bien común, o bien de la colectividad, significa que el Estado debe hacer posible a sus sujetos la realización de lo bueno y garantizar esa posibilidad. Pero para cumplir acciones buenas en la vida, es decir, para llevar una existencia virtuosa, se necesitan también medios materiales.** Consecuentemente el Estado debe velar para que cada miembro de la comunidad que llene su misión pueda vivir de acuerdo con su rango y participar del bienestar, de la prosperidad y de la cultura en proporción con sus prestaciones al bien común. **El significado moderno de la justicia social es una aplicación de los principios de la justicia legal a las cuestiones económicas y sociales provocadas por la intrínseca injusticia del capitalismo moderno. Por justicia social debe entenderse la justicia que ordena las relaciones recíprocas de los grupos sociales, los estamentos profesionales y las clases, con las obligaciones individuales, moviendo a cada uno a dar a los otros la participación en el bienestar general a que tienen derecho en la medida en que contribuyeron a su realización**”⁽²⁰⁾ (he destacado en negrita aspectos especialmente relevantes para nuestro tema). Posteriormente profundizó y, si se quiere, radicalizó aún más estas ideas con lenguaje actualizado.

Como se ve, “bien común” asimilado al “bienestar general” que menciona la Constitución Nacional, “justicia social” como forma preeminente de la justicia y como

aplicación de los principios de la justicia legal a las cuestiones económicas y sociales, la justicia como virtud al servicio de la verdad sustancial, la eliminación de la miseria y la marginación en la vida social que obstaculizan la “virtud” o una “existencia virtuosa” tal como lo exige la “dignidad” o “excelsa dignidad” del hombre, participación en los bienes materiales y espirituales de la “civilización” son, entre otros, conceptos que se reiteran con variados matices en los textos transcritos y fundamentan el principio *in dubio pro iustitia socialis* como “categoría constitucional”.

Por lo demás, son reconocibles allí las fuentes clásicas de SAMPAY. Así, por ejemplo, se lee en la *Política* de ARISTÓTELES: “En todas las ciencias y artes el fin es un bien; por tanto, el mayor y más excelente será el de la suprema entre todas, y ésta es la disciplina política; y el bien político es la justicia, que consiste en lo conveniente para la comunidad; todos opinan que la justicia es cierta igualdad...”⁽²¹⁾. También como ejemplo puede verse en la *Suma Teológica* de SANTO TOMÁS: “4. Todo movimiento recibe su especie del término, y, por lo tanto, a la justicia legal pertenece ordenar al bien común las cosas que son de las personas privadas; al contrario, ordenar el bien común a las personas particulares por medio de la distribución es propio de la justicia particular”⁽²²⁾. Y el mismo SANTO TOMÁS indica que para alcanzar un nivel de vida buena se requiere unidad pacífica, obrar bien e, instrumentalmente, “suficiencia de bienes materiales, cuyo uso es necesario para el acto de virtud”⁽²³⁾.

Por otra parte, después del citado caso “Bercaitz”⁽²⁴⁾, tal principio “hermenéutico” fue esgrimido varias veces sobre materias diversas en distintos momentos que sugieren las corrientes de pensamiento predominantes en cada época y contingencia histórica.

En Fallos: 293:446, sentencia del 25-11-75, “Filandro Antonio s/jubilación por invalidez”, el principio figura en el consid. 6° y firman los jueces Miguel Ángel Bercaitz, Agustín Díaz Biale, Héctor Masnatta, Ricardo Levene (h.), Pablo L. Ramella. Era presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón.

En Fallos: 319:3241, sentencia del 27-12-96, “Sixto Celestino Chocobar c. Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos”, se debatieron cuestiones previsionales y nuevas pautas de movilidad del haber inicial de jubilación. El principio aparece en la disidencia de los Dres. Belluscio, Petracchi y Bossert (consid. 40). Firman los jueces Julio S. Nazareno, Augusto César Belluscio (en disidencia), Enrique Santiago Petracchi (en disidencia), Antonio Boggiano (su voto), Guillermo A. F. López, Gustavo A. Bossert (en disidencia), Adolfo Roberto Vázquez (según su voto). Era titular del Poder Ejecutivo Carlos Saúl Menem.

En Fallos: 322:2926-vol. 3, se publicó el pronunciamiento del 2-12-99 recaído en “Juan Manauta y otros c. Embajada de la Federación Rusa”. Allí se demandó por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de obligaciones previsionales y de asignaciones familiares a cargo de la demandada. El Alto Tribunal sostuvo que “en materia de seguridad social lo esencial es cubrir riesgos de subsistencia, por lo que no debe llegarse al desconocimiento de los derechos sino extrema cautela, y de acuerdo con el principio *in dubio pro iustitia socialis*” (consid. 10). Firman J. S. Nazareno, E. Moliné O’Connor, C. S. Fayt, A. C. Belluscio, E. S. Petracchi (según su voto), A. Boggiano, G. A. F. López, G. A. Bossert, Adolfo R. Vázquez. Era presidente de la República Carlos Saúl Menem.

En Fallos: 328:1602, sentencia del 17-5-05, “María del Carmen Sánchez v. ANSES”, el juez Juan Carlos Maqueda invocó el principio *in dubio pro iustitia socialis* en el consid. 3° de su voto para mantener, con la mayoría de sus colegas, los reajustes y la movilidad del haber de pensión pretendidos por la actora. Firman E. S. Petracchi, A. C. Belluscio, C. S. Fayt, A. Boggiano (en disidencia), J. C. Maqueda (según su voto), E. R. Zaffaroni (según su voto),

(21) ARISTÓTELES, *Política*, Libro III, 12, 1282 b., ed. bilingüe, trad. por Julián Marías y María Araujo, Instituto de Estudios Políticos; Madrid, 1951, pág. 90.

(22) SANTO TOMÁS DE AQUINO, *Suma Teológica*, 2-2, q. 61, a1 ad 4; t. VIII, 2-2 q. 47/79, BAC, Madrid, 1956, pág. 351.

(23) SANTO TOMÁS DE AQUINO, *De regime principum*, en VICTORINO RODRÍGUEZ, *El régimen político de Santo Tomás de Aquino*, Madrid, Fuerza Nueva editorial, 1978, pág. 146.

(24) Publicado en Fallos: 289:430.

E. I. Highton de Nolasco, R. L. Lorenzetti, C. M. Argibay (según su voto). Era titular del Poder Ejecutivo Néstor Kirchner.




En Fallos: 330:1989, el 3-5-07 en la causa “Marta Cristina Madorran c. Administración Nacional de Aduanas”, la Corte Suprema, al afirmar la estabilidad propia del empleado público, adujo lo que llamó “la decisiva doctrina que asentó esta Corte en el caso ‘Bercaitz’”, y puntualizó: “No fue por azar que este precedente se originó en el contexto de los derechos sociales de la norma citada; tampoco es por ese motivo que la justicia social se ha integrado *expressis verbis*, en 1994, a la Constitución Nacional” (consid. 5°). Suscriben la sentencia R. L. Lorenzetti, E. Highton de Nolasco (según su voto), C. S. Fayt, E. S. Petracchi, J. C. Maqueda (según su voto), C. M. Argibay (según su voto). Era presidente de la Nación Néstor Kirchner.

En la sentencia publicada en Fallos: 330:2800 del 26-6-07, en la causa “Defensor del pueblo de la Nación c. Poder Ejecutivo Nacional sobre amparo”, se negó legitimación al mencionado funcionario en lo atinente a la defensa del derecho que cada depositante tiene sobre sus depósitos bancarios. El principio que nos ocupa figura en el voto del Dr. Juan Carlos Maqueda, consid. 10, donde se reproducen los términos formulados en el citado caso “Bercaitz” como uno de los parámetros para fijar y al mismo tiempo delimitar el ámbito de actuación del referido Defensor. Firman esta sentencia E. I. Highton de Nolasco, C. S. Fayt (según su voto), J. C. Maqueda (según su voto), C. M. Argibay. Era presidente de la Nación Néstor Kirchner.

He indicado en todos los casos los respectivos titulares del Ejecutivo, todos justicialistas según sus propios dichos, aunque con inevitables matices provenientes de diversas fuentes ideológicas y de distintos momentos y contingencias históricas. Ello no implica sumisión de los jueces ni exclusividad de éstos en la afirmación de la justicia social, tampoco significa que todos los magistrados firmantes de las mencionadas sentencias profesaran idénticas ideologías, pero da cuenta de los respectivos contextos socio-políticos y parece signo manifestativo de la mentada politicidad del derecho. Este último aspecto fue abordado en varios lugares por SAMPAY con enfoques principalmente jurídico-constitucionales acordes con su especialidad. En particular se refiere al “ordenamiento jurídico” como propiedad propia o “propio” del orden, entendido a su vez como causa formal del Estado. Baste para ilustrar lo dicho el siguiente párrafo de la *Introducción a la Teoría del Estado*: “La politicidad, en efecto, es un elemento esencial y, por ello, constitutivo del ordenamiento jurídico, pues en él existe necesariamente una *idea* de orden político a realizarse, esto es, un *fin*, perseguido por las normas jurídicas y que, mediata o inmediatamente, es el mismo que se atribuye al Estado”⁽²⁵⁾.

Ahora bien, como dice ARISTÓTELES en su *Metafísica*, primordialmente se trata de huir de la ignorancia y “es indigno que el hombre no busque la ciencia que está a su alcance” (982 b). Ello conduce en ocasiones a reconocer el magisterio de alguien autorizado, y no es fácil saber ser discípulo. Antes sostuve que también se sabe algo cuando se sabe aprender de otro y que hay una cierta sabiduría en ello. Tal sabiduría comienza, me parece, en saber elegir el maestro, y del maestro, lo mejor de él.

En este punto me parece pertinente recordar la “docilidad”, parte cuasi integral de la virtud de prudencia, precisamente esa parte que –según SANTO TOMÁS– consiste en la aptitud para aprender de otro, lo cual no supone siempre la aceptación sino también –pienso en un sentido extensivo– la crítica, la divergencia e incluso el rechazo de lo dicho por alguien adecuadamente acreditado por su saber y su experiencia. En tal situación, tanto el asentimiento como la crítica, la disconformidad o el rechazo comportan incorporar conocimientos, abrir paso a nuevas reflexiones, percibir aspectos y matices que no siempre aparecen en primer plano. En lo personal, con este alcance acepto el magisterio de SAMPAY. 

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO POLÍTICO - IGLESIA CATÓLICA - EDUCACIÓN

(25) SAMPAY, ARTURO E., *Introducción...*, cit., pág. 141.

(19) SAMPAY, ARTURO E., *La Constitución argentina de 1949*, Buenos Aires, Ediciones Relevo, 1963, pág. 27.

(20) Ibidem, pág. 48.



Sampay y Schmitt

Frente a la crisis de la ciencia jurídica

SERGIO R. CASTAÑO
CONICET

Sumario: I. EL LIBRO DE ARTURO SAMPAY. – II. EL PLANTEO DE SCHMITT. 1) *LA SITUACIÓN DE LA CIENCIA Y DE LA REALIDAD JURÍDICAS EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA*. 2) *LA CRISIS DE LA CIENCIA JURÍDICA Y LOS DOS ESTADIOS DE LA CRISIS DE LEGALIDAD DEL ESTADO LEGISLATIVO*. 3) *VON KIRCHMANN Y SAVIGNY*. – III. LA CRÍTICA DE SAMPAY. 1) *VON KIRCHMANN, FILÓSOFO ARISTOTÉLICO*. 2) *LA FUNDAMENTACIÓN DE PRINCIPIOS INMUTABLES*. 3) *CONSIDERACIÓN SOBRE EL VALOR DE LA CRÍTICA DE SAMPAY*. 3.1) La cuestión epistemológica. 3.2) La posibilidad de fundamentar racionalmente principios dados y no puestos. – IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN.

I El libro de Arturo Sampay

En 1965 aparecía *Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica*⁽¹⁾, el primer libro, en la Argentina, dedicado a las ideas del gran pensador alemán, obra salida de la pluma del más relevante teórico del Estado que ha dado nuestro país. El libro, ya preparado para su publicación en 1952, recién pudo ser editado dos años más tarde en La Paz; pero esa primera edición “tuvo escasisima difusión”, dice su autor, porque la casi totalidad de sus ejemplares se destruyó involuntariamente. Recién en 1965, amainados los avatares del exilio y la persecución política (que comienzan, precisamente, en 1952), pudo finalmente ver la luz la edición argentina. La obra consta de dos capítulos. En el primero de ellos, SAMPAY se ocupa centralmente de la exposición de *Sobre los tres modos del pensamiento científico-jurídico* (*Über die drei Arten des Rechtswissenschaftlichen Denkens*, 1934) y somete a crítica de la “teoría de la concreta ordenación y estructuración” del derecho, propuesta por CARL SCHMITT en los albores del régimen nacionalsocialista. En el segundo capítulo, SAMPAY estudia y enjuicia el análisis schmittiano de la crisis jurídica contemporánea a partir de la lectura de *La situación de la ciencia jurídica europea*, conferencia pronunciada por SCHMITT entre 1943 y 1944 en Bucarest, Budapest, Madrid, Coimbra, Barcelona y Leipzig “ante muchos de los más destacados juristas de las Facultades de Europa” –dijo su autor–, y publicada en Alemania en 1950⁽²⁾. A ese análisis y enjuiciamiento dedicaremos las siguientes líneas.

II El planteo de Schmitt

1) *La situación de la ciencia y de la realidad jurídicas en la época contemporánea*

CARL SCHMITT abre su exposición sindicando al positivismo normativista –entronizado en la teoría y en la praxis jurídica hacia la segunda mitad del siglo XIX– como el responsable de la crisis de la ciencia jurídica contemporánea. En el origen de la situación epocal descripta y negativamente valorada se hallan, en efecto, la adopción del normativismo como método jurídico y del positivismo como filosofía del derecho. Es así como el objeto de la ciencia jurídica quedó circunscripto a la norma válida entendida en perspectiva positivista, es decir, a la ley dictada por el Estado. Con ello, la validez (*Geltung*) jurídica se redujo a la expresión de la voluntad circunstancial del poder de turno. El método jurídico “puro”, por su parte, prescindirá del significado objetivo de la norma para atenerse exclusivamente a la validez en sentido formal. En esta “ficción normativista” se deja a un lado, de tal modo, el sentido po-

lítico, social y económico concreto de normas e instituciones, en suma, el contenido material del derecho, y se absolutizan los aspectos formales relativos a los procedimientos de expresión de la voluntad coactiva del Estado. El cuestionable pero no por ello menos vigente monopolio de tal forma de pensamiento, por la cual la voluntad del poder soberano se constituyó en fuente absoluta del derecho, acarreo como consecuencia inevitable que el ordenamiento de cada Estado quedara aislado y separado de los otros ordenamientos del orbe. Semejante fragmentación del derecho quebró la secular unidad del *jus publicum europaeum*, que a su vez cimentaba la unidad espiritual del hombre occidental. A partir de allí, el derecho internacional público se redujo a los tratados que las mónadas estatales establecían entre sí, como uno de los modos de tender “puentes sobre el abismo” (en la lograda expresión de SCHMITT) que sortearan el hiato normativo entre los Estados. De hecho, los vínculos pacticios que unían –a través de tratados, convenciones y uniones– a los Estados europeos entre sí no diferían de aquellos que vinculaban Estados europeos con otros pertenecientes a culturas ajenas a la occidental: desde un punto de vista positivista, una vinculación jurídica entre comunidades europeas constituye una pura casualidad; se trata sólo de una relación arbitraria entre dos órdenes cerrados y sin fundamentos de validez comunes. La teoría “dualista” de HEINRICH TRIEPEL (1899) expresa bien este divorcio entre el derecho internacional y los ordenamientos internos, que liquidaba, sostiene SCHMITT, el específico derecho de los pueblos europeos forjado por el común espíritu de esos pueblos entre los siglos XVII y XIX. Por tal razón, el instituto jurídico internacional del reconocimiento de los Estados, que tradicionalmente había presupuesto el umbral civilizatorio de unos usos político-jurídicos compartidos, se rebajó hasta la táctica oportunista y nihilista de los poderosos. En este sentido, para SCHMITT, el caso del derecho internacional privado resulta también ilustrativo de esta implosión histórico-espiritual, pues esta rama del derecho, desde la segunda mitad del siglo XIX, había preterido a la comunidad jurídica europea para transformarse en una mera “suma de precarias coincidencias de normas de colisión estatales”, al decir del jurista de Berlín.

Pero si contrariamente al pretendido “fundamento formal” del positivismo se pasa a una consideración material de contenido del derecho, se constata la existencia de un auténtico *common law* europeo, integrador de las diferencias entre las diversas tradiciones particulares (germánica, anglosajona, latina). La historia del derecho europeo es la historia de las recíprocas –no serviles sino originales– recepciones operadas a través de mil años⁽³⁾.

Tal ha sido, precisamente, el sentido del proceso por el que Europa hizo suyo el derecho romano. Sintetiza SAMPAY a SCHMITT: “La ciencia jurídica vigente en Europa, hasta la revolución francesa, fue el derecho romano. La recepción del derecho romano, y más aún de la ciencia jurídica romana –porque países que no aceptaban el derecho romano fueron, no obstante, permeados por la ciencia jurídica romana, que se enseñaba en todas las Universidades junto con el derecho canónico–, fue la base común del edificio cultural de Europa”⁽⁴⁾.

2) *La crisis de la ciencia jurídica y los dos estadios de la crisis de legalidad del Estado legislativo*

SCHMITT le pone fecha al comienzo de la crisis de la ciencia jurídica: 1848. La ruptura revolucionaria señala para él la gran encrucijada epocal que, en el plano de los saberes jurídicos, se corresponderá con el abandono del derecho natural y la adopción, embebida de ilusión progresista, del positivismo legal. El giro político de 1848 encontrará su expresión en las palabras de Windscheid, pronunciadas en 1854: “No existe para nosotros un derecho absoluto. El sueño del derecho natural ha terminado”. A

partir de ese momento, la validez del derecho pasó a fundarse en la voluntad soberana del legislador, y la creación y mutación jurídicas conocieron una progresiva aceleración, proceso en el que SCHMITT distingue dos momentos principales.

El primero de ellos está dominado por las grandes codificaciones que se llevan a cabo desde fines del siglo XVIII. Ahora bien, a pesar del espíritu centralista y de la voluntad de recrear el derecho demiúrgicamente (*ex novo*) que el movimiento de la codificación trasunta, la tarea propia de una auténtica ciencia jurídica no desaparece. En efecto, los grandes juristas participan en la elaboración de las leyes sancionadas por los parlamentos; la duradera vigencia de la ley permitía el tiempo suficiente para su comentario y eventual crítica por los jurisconsultos. Pero lo más significativo estaba dado por el fenómeno normativo de la distinción entre la ley objetiva y la opinión subjetiva del legislador. Mientras éste, reunido en parlamentos movidos por intereses inmediatos y divididos en partidos antagónicos, manifiesta una voluntad problemática, volátil y sujeta a compromisos circunstanciales, la ley en que se plasma la labor legislativa posee una unidad impersonal, desvinculada de las motivaciones particulares de las que surge, una objetividad racional que amalgama las posiciones políticas divorciadas. De allí la pertinente significación del *dictum* “la ley es más sabia (*klüger*) que el legislador”, agrega SCHMITT. Y de allí la concreta posibilidad de que la ciencia jurídica encare la interpretación y el comentario racional y ponderado de las normas, y venga a representar, así, la unidad de la voluntad jurídica del Estado⁽⁵⁾.

Pero si la dignidad y autoridad de la ley no habían sufrido desmedro esencial en el estado de cosas propio del Estado legislativo liberal decimonónico, la situación cambia drásticamente con el advenimiento del siglo XX: “El ritmo de la legislación del Estado intervencionista no es el mismo que el de un Estado excepcionalmente interviniente, como los del siglo XIX, y al acortarse el tiempo entre la ley y su modificación se redujo la participación de la ciencia jurídica en la creación y objetivación del derecho positivo”, resume SAMPAY. Se torna habitual la delegación de facultades legislativas en órganos gubernativos y administrativos, y a la majestad de la ley sucede un torrente de decretos (*Dekrete*), reglamentos (*Verordnungen*) y resoluciones (*Anordnungen*). Si el reglamento es una “ley motorizada”, la resolución administrativa es un “decreto motorizado”, no público, comunicado sólo a los particulares interesados; y entre el funcionario competente que la dicta y quien la recibe no es posible intercalar los actos de juicio científico-cognoscitivos propios de la ciencia jurídica. Tal situación no se circunscribe a un sistema político o a una contingencia internacional, sino que es común a los regímenes parlamentarios y presidencialistas, a las democracias y a las llamadas dictaduras, a los vencedores y a los vencidos (en la Gran Guerra). Y dado que la ciencia jurídica no puede ya seguir el tren de la hipertrofia y proliferación de los métodos de sanción del derecho positivo sin “perder el aliento”, es decir, sin renunciar a la observación calma y la investigación profunda, luego ella ya no cumplirá con su función de ser “el último asilo del derecho” frente a las ficciones del positivismo y las arbitrariedades del poder⁽⁶⁾.

3) *Von Kirchmann y Savigny*

Frente a tal crisis, afirma SCHMITT, hubo un autor que advirtió del riesgo y otro que indicó una vía de solución. Una primera aguda señal de la situación la constituye, expone el teórico del Estado alemán, la conferencia *La carencia de valor de la jurisprudencia como ciencia*⁽⁷⁾, pronunciada en 1847 y publicada al año siguiente por el jurista y filósofo JULIUS HERMANN VON KIRCHMANN. La cifra y síntesis de la obra de este autor reside para SCHMITT en la sentencia siguiente: “Tres palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en papel de deshecho (*werden zu Makulatur*)”. Se trataría de la constatación por VON KIRCHMANN de la futilidad de pretender erigir en objeto de estudio un conjunto de normas positivas a

(5) SAMPAY, ARTURO E., *ibidem*, págs. 49-50; SCHMITT, CARL, *ibidem*, págs. 400-404.

(6) SAMPAY, ARTURO E., *ibidem*, págs. 50-53; SCHMITT, CARL, *ibidem*, págs. 404-408.

(7) *Die Wertlosigkeit der Jurisprudenz als Wissenschaft*, traducida al castellano con el título de *La jurisprudencia no es ciencia*, por A. Truyol y Serra en 1949.

(1) SAMPAY, ARTURO E., *Carl Schmitt y la crisis de la ciencia jurídica*, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 76 págs., con dedicatoria a Giorgio Del Vecchio.

(2) SCHMITT, CARL., *Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft*, Tübingen, Internationale-Universität, 1950 (antes, en 1944, había sido publicada en húngaro en la revista *Gazdasági Jog*, V). Utilizaremos la edición incluida en *Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924-1954*, Berlín, Duncker & Humblot, 2003; la 1ª edición, con prólogo y addendae de SCHMITT, data de 1958. El trabajo estudiado por SAMPAY estuvo destinado a integrar un volumen de homenaje a Johannes Popitz, quien fue ejecutado en febrero de 1945. De las páginas 426 y 427 del *postscriptum* de la conferencia tomamos los datos sobre ella consignados en este lugar.

(3) Hasta aquí conf. SAMPAY, ARTURO E., *Carl Schmitt...*, cit., págs. 43-47 y SCHMITT, CARL., *Die Lage...*, cit., págs. 386-391.

(4) SAMPAY, ARTURO E., *ibidem*, pág. 48; SCHMITT, CARL., *ibidem*, págs. 391-397.

cada paso cambiantes, emanadas de la voluntad estatal del momento⁽⁸⁾.

Pero mayor sustantiva relevancia en el planteo de SCHMITT sobre la crisis de la ciencia jurídica europea ostenta la figura del gran romanista FRIEDRICH CARL VON SAVIGNY, paradigma del primer distanciamiento del legalismo normativista, así como símbolo doctrinal de la solución que SCHMITT avizora no sólo como posible sino como válida. SAVIGNY, jurista e historiador de dimensión europea y heraldo de la doctrina del espíritu del pueblo (*Volksgeist*) como creador del derecho y del lenguaje, es el inspirador de la escuela histórica y el fundador del derecho internacional privado. A pesar de su significación, constata SCHMITT que su doctrina ha sido negativamente juzgada en los tiempos presentes como una tendencia reaccionaria y contraria a la vida, que habría obtenido sólo una pírrica victoria frente al inevitable movimiento de la codificación normativista. Pero ello sólo trasunta la incompreensión de quienes identifican progreso jurídico con la creciente velocidad de la maquinaria legislativa. En realidad, la apelación de SAVIGNY constituye un llamado a la toma de conciencia de la ciencia jurídica para que ésta se erija en custodia del derecho positivo y para que los juristas asuman su misión. Su llamado (más expresión de una situación espiritual que de un argumento) representa la primera toma de distancia consciente frente a la positividad (como técnica al servicio del poder) propia del Estado liberal-burgués; concretamente, consiste en el intento de conjurar la identificación del derecho con la pura facticidad a través de la dimensión histórica; pero “sin arrojar el derecho –remata SCHMITT– en la palabrería del derecho natural, propia de la guerra civil (*ohne das Recht in die Bürgerkriegsparolen des Naturrechts zu werfen*)”.

En el “sentido existencial” que SCHMITT atribuye a la teoría de SAVIGNY sobre las fuentes del derecho se descubre un peculiar significado de los términos “histórico” y “positivo”. En efecto, el derecho (vigente) como “orden concreto” no puede ser desvinculado de la Historia; de allí que el derecho auténtico no sea puesto (por la ley) sino que se establece en una evolución no intencional, por la cual se determina en una forma histórica concreta, cuyo desarrollo cobra conciencia de sí en la jurisprudencia. La positividad, para la ciencia jurídica, se halla ligada a una especial forma de fuente del derecho (*Rechtsquelle*), gracias a la cual el derecho tiene su específico origen como “algo dado y no puesto”, interpreta SCHMITT. Por su parte, la ley es sólo uno de los modos en que se manifiesta el patrimonio jurídico del pueblo; y la esencia y valor de la ley residen en su estabilidad y duración. Esto se opone al espíritu de las “orgías positivas” del legislador absoluto desencadenadas por la Revolución Francesa. A propósito de lo cual sentencia SCHMITT que el positivismo hodierno ya no conoce ni origen ni patria, y que su intención última es la dominación y la calculabilidad.

Así entendido, el derecho histórico-positivo aparece como vida orgánica en desarrollo paulatino, múltiplemente concretada, a la cual le es intrínseca la mutabilidad (*Wandelbarkeit*), propiedad por excelencia de lo histórico. Y la ciencia jurídica tiene por cometido la recepción, tutela y recreación de la vida jurídica del pueblo. Se trata, para SCHMITT, de una ciencia jurídica que hoy debe luchar para preservar su independencia contra el huro tecnicismismo legalista, como ayer (siglo XVI) luchó para ganarla frente a la teología y a la metafísica. Esa ciencia “primogénita del racionalismo occidental moderno” constituye la verdadera fuente del derecho. A su cuidado está confiado el fundamento del ser racional del hombre ante las situaciones cambiantes y los poderosos de turno; fundamento que nutre principios como, ante todo, el reconocimiento de la persona, que ni la guerra puede derogar. En virtud de tal misión SCHMITT llama a la ciencia jurídica “último asilo de la conciencia jurídica”⁽⁹⁾.

III La crítica de Sampay

1) Von Kirchmann, filósofo aristotélico

Contrariamente a la interpretación de SCHMITT, SAMPAY demuestra la naturaleza genuinamente especulativa de la obra de VON KIRCHMANN. En efecto, el filósofo y jurista plantea –aristotélicamente– que la ciencia se ocupa de lo universal y necesario (es decir, cabe agregar, que una cien-

cia jurídica se identificaría con una filosofía segunda); mientras que el objeto propio de la jurisprudencia lo constituyen lo múltiple y contingente de una realidad jurídica empírica determinada. Luego el estudio sistemático de un derecho positivo particular no puede pretender el estatuto de ciencia. Esta tesis se ubica en el plano filosófico, sin vinculaciones sociológicas con la situación de ese momento, por lo cual, concluye SAMPAY, SCHMITT “vinculó arbitrariamente el estudio de KIRCHMANN al hecho histórico del aceleramiento en la producción y cambio de las legislaciones”⁽¹⁰⁾.

2) La fundamentación de principios inmutables

SAMPAY aprueba que SCHMITT sostenga la necesidad del reconocimiento de principios del derecho que rijan las cambiantes circunstancias históricas, principios que se manifiestan, por ejemplo, en el reconocimiento de la dignidad humana. Ahora bien, para el jurista argentino ello no puede sino significar la aceptación del derecho natural. En efecto, el derecho histórico, dado que “tiene principio en la historia y se debe a una decisión humana”, podría ser sustituido por otro derecho libremente creado por los hombres (i.e., también positivo). Lo tradicional, por el mero hecho de serlo, no constituye una ley inmutable. Su larga vigencia hace presumir su validez objetiva, pero ésta se funda, necesariamente, en los principios invariables del derecho natural. Y el derecho natural, por su parte, se funda en la naturaleza del hombre. Por ello, la aceptación del derecho natural presupone, a su vez, una teoría realista del conocimiento, que aprehenda la esencia del hombre como fundamento ontológico del derecho natural; así como el reconocimiento de los universales, sin los cuales no puede explicarse la universalidad e inmutabilidad de la naturaleza del hombre y de los principios (primarios) del derecho natural. Finalmente, SAMPAY no deja de observar que la esencia del hombre tiene su fundamento ontológico último en la participación de la naturaleza divina: su causa ejemplar es Dios creador. Pero ello, va de suyo, no significa negar la especificidad jurídica de los principios del derecho natural, fundamento de validez inmanente del derecho⁽¹¹⁾.

3) Consideración sobre el valor de la crítica de Sampay

El teórico argentino del Estado, en su valoración de las posiciones de SCHMITT en *La situación...*, celebra que éste haya abandonado el decisionismo, el cual, para SAMPAY, representa precisamente el núcleo del proceso histórico-espiritual cuyas consecuencias condena SCHMITT en su escrito de las postrimerías de la guerra. De hecho, el texto que comentamos –a saber, el capítulo II de CARL SCHMITT y la crisis de la ciencia jurídica– se abre, como hemos dicho, con la exposición y crítica de SAMPAY a la teoría jurídico-política de la “ordenación concreta”, la cual, afirma SAMPAY, presupone necesariamente el decisionismo. No entraremos a ponderar el juicio de SAMPAY sobre el abandono por SCHMITT del decisionismo, juicio referido al pensamiento del gran teórico alemán –y, seguramente, cuestionable como interpretación de SCHMITT–. Con todo, y ello sin desmedro de las (como habitualmente en él) ricas y medulares observaciones de SCHMITT, sí será del caso detenernos brevemente en la crítica de SAMPAY a la solución misma que SCHMITT ofrece para conjurar las consecuencias teóricas y prácticas del positivismo insito en el Estado liberal. En forma muy sintética: trataremos de aquilatar si el fondo de la impugnación que SAMPAY hace a SCHMITT en el plano sistemático, el “de las cosas mismas”, es fundado o trasunta la aplicación de esquemas dogmáticamente asumidos, como ha planteado un distinguido estudioso argentino al enjuiciar la crítica que nos ocupa⁽¹²⁾.

3.1) La cuestión epistemológica

En relación con la “desinterpretación” en que habría incurrido SCHMITT respecto de la ponderación del sentido de la obra de VON KIRCHMANN se hallan las puntualizaciones de SAMPAY sobre el estatuto y el objeto de la ciencia jurídica. La crítica, en esta cuestión, atiende a las afirmaciones de SCHMITT sobre la lucha de la ciencia jurídica por liberarse –hoy como ayer– de las ataduras de saberes invasivos y ajenos. Si en el siglo XVI se trató de la independencia de la teología y la metafísica, hoy se trata de la asimi-

lación del derecho a una técnica de dominación al servicio de la voluntad mutable del poder (respecto de esto último, la coincidencia de SAMPAY con SCHMITT es plena: el derecho positivo no puede ser instrumento de sujeción –interno o externo– en manos del soberano de turno).



Ahora bien, a propósito de la reivindicación schmittiana de una ciencia jurídica hija del racionalismo moderno y desligada del derecho natural viene a cuento aquí mencionar la paradigmática contraposición que enfrenta a la concepción aristotélica clásica de la praxis política (y jurídica) –que nutre a la tradición tomista– con la concepción moderna, que reconoce su mentor y símbolo en HOBBS. La mención de dicha contraposición es pertinente, dada la relevancia de la figura de HOBBS para el pensamiento de SCHMITT y, en particular, dada la reivindicación schmittiana de la ciencia jurídica moderna como fruto peraltado y primero del racionalismo occidental liberado de la “teología” y de la “metafísica” (en última instancia, del derecho natural clásico-cristiano). En efecto, en HOBBS, por un lado, el conocimiento de la praxis se torna teórico, pues se asimila al de la física. Pero, por otro lado, la realidad práctica misma pierde su naturaleza de praxis (acción libre legitimada por un fin recto, que sólo constituye buena praxis cuando hace bueno al que obra) para adquirir aquella de la póiesis (obra técnica cuya bondad se pondera a partir de su eficiencia, con independencia de la rectitud de la intención del agente, y de su perfección personal)⁽¹³⁾.

Sin posibilidad de detenernos en ello en este lugar, no obstante no cabe dejar de observar que, en principio, la posibilidad de una ciencia del derecho aparece plausible a partir de la existencia de un objeto que revista la naturaleza y las propiedades requeridas como para constituirlo en principio de un conocimiento etiológico cierto de una realidad universal y necesaria. Ahora bien, ese objeto es el derecho natural. Por tal razón, el fundamento mismo que permite justificar el rango de ciencia para el saber jurídico y, en tal medida, afirmar una especificidad epistemológica propia de la ciencia jurídica, distinta de la metafísica y de la teología, es precisamente el que impide reducir a la ciencia jurídica al plano de la positividad historicista. En línea con lo dicho, debe destacarse que SAMPAY dedica un proporcionalmente extenso desarrollo a imposter la significación de una gnoseología realista para el conocimiento del objeto de la ciencia del derecho; de cuyo rescate, concluye SAMPAY, pende la tarea del hombre de derecho que quiera servir a la conciencia jurídica occidental⁽¹⁴⁾.

Con este tema se vincula la cuestión axial de la juridicidad y de la naturalidad del derecho natural, pues de la naturaleza jurídica del derecho natural pende la posibilidad de reconocerlo como fundamento inmanente de validez del derecho real y concretamente vigente. El derecho natural expresa una teonomía natural, pero no es teología, afirma SAMPAY contra SCHMITT y su mentor SAVIGNY⁽¹⁵⁾. Antes al contrario, su reconocimiento por el agente moral no se deriva del previo conocimiento de un principio teológico (natural), ni mucho menos de la adhesión por la fe a unos principios revelados sobrenaturalmente. Por tal razón, SAMPAY ejemplifica la aceptación del derecho natural con el testimonio de los paganos ULPiano y CICERÓN⁽¹⁶⁾.

3.2) La posibilidad de fundamentar racionalmente principios dados y no puestos

CARL SCHMITT apela a la ciencia jurídica para encomendarle la tarea de salvaguardar –frente a los mudables po-

(13) Tal la distinción de ARISTÓTELES (cfr. E. N., 1105 a 26 y sigs.; ed. Bywater, Oxford, O.U.P., 1991). Sobre el tema del giro moderno en la concepción de la praxis son ya clásicas las páginas de WILHELM HENNIS en *Politik und praktische Philosophie* (Neuwied-Berlin, Luchterhand Verlag, 1963). Respecto de la ruptura del pensamiento moderno con la tradición aristotélica del conocimiento práctico, en directa referencia a la política y al derecho, cfr. especialmente en esa obra el capítulo *Topik und Politik* (págs. 89-115). Es de notar cómo BACON, a quien HENNIS trata, junto con PEDRO RAMUS, HOBBS y DESCARTES, como uno de los fundadores del nuevo giro científico-epistemológico en el ámbito práctico, veía al conocimiento como un instrumento de poder. Por aquí podría columbrarse hasta qué punto la exaltación de la ciencia jurídica moderna puede representar una contradicción con la condena de alguna de sus consecuencias en la praxis jurídica histórica, si no se precisa el sentido y alcance de tal exaltación.

(14) SAMPAY, ARTURO E., *Carl Schmitt...*, cit., págs. 70-74.

(15) Ibidem, págs. 47-48.

(16) Ibidem, págs. 69-70.

(8) SCHMITT, CARL, *Die Lage...*, cit., págs. 399-400.

(9) Ibidem, págs. 408-426, *passim*.

(10) SAMPAY, ARTURO E., *Carl Schmitt...*, cit., págs. 56-60. Enseguida SAMPAY ilustra con erudición el hecho de que el libro de *Von Kirchmann* tenía antecedentes como el del *Arte legal para estudiar la jurisprudencia*, de F. BERMÚDEZ DE PEDRAZA, de 1612.

(11) SAMPAY, ARTURO E., *Carl Schmitt...*, cit., págs. 68-75.

(12) Conf. DOTTI, JORGE E., *Carl Schmitt en Argentina*, Rosario, Homo Sapiens, 2000, pág. 153.



La fisonomía del político según Arturo Enrique Sampay

por GERMÁN MASSERDOTTI
(USAL - UCALP - UFASTA)

Sumario: 1. INTRODUCCIÓN. – 2. LAS CUALIDADES NATURALES DEL POLÍTICO. – 3. LAS CUALIDADES INTELECTUALES DEL POLÍTICO. – 4. LAS CUALIDADES MORALES DEL POLÍTICO. – 5. A MODO DE CONCLUSIÓN.

1 Introducción

En el presente trabajo presentaremos *la fisonomía del político* a partir del pensamiento de ARTURO ENRIQUE SAMPAY. Nuestro autor escribió en su *Introducción a la Teoría del Estado*⁽¹⁾, publicada por primera vez en 1951, acerca de las *cualidades que debe poseer la persona que pertenece a la clase política*. En pocas páginas SAMPAY elabora un perfil finamente logrado de aquellos que tienen *vocación* para conducir al resto de los hombres en la consecución del bien común político. Se detendrá en particular en tres puntos debidamente fundamentados: 1º) “las cualidades naturales que manifiestan la vocación de político”; 2º) “las cualidades intelectuales que debe adquirir quien elige el oficio político” y 3º) “la perfección moral que necesita para poner su idoneidad profesional al servicio de la comunidad”⁽²⁾. Los políticos –“los hombres que se preocupan, habitual y activamente, de la dirección del Estado”⁽³⁾– necesitan, de alguna manera, cumplir simultáneamente con estos tres requisitos para ser auténticamente tales.

(1) SAMPAY, ARTURO E., *Introducción a la Teoría del Estado*, Buenos Aires, Politéia, 1951. Nosotros usaremos la edición de 1996 publicada por Theoría.

(2) SAMPAY, ARTURO E., *Introducción a la Teoría del Estado*, Buenos Aires, Theoría, 1996, págs. 491-492.

(3) Ibidem, pág. 489. En el mismo sentido que SAMPAY, CASTAÑO entiende al Estado como realidad permanente: “Se trata del plexo de relaciones de coordinación, subordinación e integración de individuos y grupos que se aúnan en el todo de la sociedad política” (CASTAÑO, S. R., *El Estado como realidad permanente*, Buenos Aires, La Ley, 2003, pág. 35).

2 Las cualidades naturales del político

En primer lugar, SAMPAY trata sobre las cualidades naturales. A propósito de este tópico, rememora la cuestión aún vigente de la *vocación* o *llamado*. En respuesta a la visión distorsionada de ROUSSEAU y de KELSEN, nuestro autor afirma que

“El hecho natural de la existencia de un estamento dirigente de la vida política, que la llamada doctrina de las clases políticas se encarga en nuestros días de mostrar, y de acentuar la atención sobre sus funciones, como una reacción contra el ingenuo igualitarismo rousseauiano que hizo decir a HANS KELSEN que en la democracia no hay sitio para quienes tienen temperamento de jefes, se conecta con la doctrina clásica de la vocación, según la cual en los hombres existen aptitudes naturales para los diversos oficios que requiere la comunidad, incluso para el más elevado, esto es, el oficio político, pues, como decía Aristóteles, hay hombres cuya tarea propia parece ser la de gobernar a los demás”⁽⁴⁾.

En vistas de la procuración del bien común político, cada uno de nosotros tiene

“Una ‘*vocatio*’ –esto es, un ‘llamado’ que viene de Dios–, para cumplir una determinada función en la sociedad. Esta *vocación* personal nace, en primer lugar, *ex causis naturalibus*, porque obedece a requerimientos de aptitudes natas, a las que se sobreañade la libertad individual en la elección profesional; en segundo lugar, procede de la intervención de la Divina Providencia que, al despertar una y otra *vocación*, siempre garantiza que las diferentes necesidades de la vida social no dejen de cumplirse”⁽⁵⁾.

En el político hay una *libido dominandi* y una *solertia* que forman parte de la configuración de su *tipo natural*.

“El político tiene, pues, una aptitud innata, o sea, un impulso vital, y dones naturales que le revelan su vocación, y

(4) Ibidem, pág. 490.

(5) Ibidem, págs. 490-491.

que consisten en una *libido dominandi* y en la solercia o rápida conjeturación de los medios que han de preferirse para lograr un fin”⁽⁶⁾.

De esta manera, el *subiecto* –de acuerdo con la terminología ignaciana– del político resulta *distinto* en comparación al de otros miembros del Estado.

“a) El sustrato psicológico del *homo politicus* está constituido por un impulso vital primario que lo lleva a dominar a los demás, y al que acompañan, como un cortejo de disposiciones coadyuvantes de esa inclinación nuclear, una recia voluntad, ambición y aptitudes de organizador, de combativo, de guía, que se manifiestan, no sólo en las elevadas zonas del poder político, sino también en las más humildes expresiones de la convivencia humana, ya que siempre surge de ésta, en desproporción numérica, los dirigentes, que son los menos frente a quienes carecen de independencia en sus juicios y no aciertan a decidirse sin alguien que los oriente”⁽⁷⁾.

Una de las aptitudes propias del político, como fue dicho poco antes, no es en realidad la picardía sino la *solercia* o *sagacidad*, que consiste en

“[l]a aptitud para elegir con rapidez el medio más apropiado para lograr el fin que se persigue. Los que en nuestros días investigan el tipo psicológico del *homo politicus* llaman a esto intuición política, y la definen como la percepción instintiva, directa y espontánea que permite al político discernir de inmediato en las complicadas y variadas situaciones de la vida política, captar la esencia de los problemas y hallarles atinada solución... en el fondo es una cualidad original del alma”⁽⁸⁾.

Así, SAMPAY concluye: “Si se atiende, entonces, a que las dotes que manifiestan una vocación política son aptitudes naturales, podrá considerarse verdadero que el *politicus non fit, sed nascitur*”⁽⁹⁾.

3 Las cualidades intelectuales del político

Teniendo presente que *lo que el político debe saber* no viene de la aptitud natural sino que “Es resultado de la in-

(6) Ibidem, pág. 491.

(7) Ibidem, pág. 492.

(8) Ibidem, pág. 492.

(9) Ibidem, pág. 493.

(Continúa en la página siguiente abajo)

deres y regímenes– el ser racional del hombre como fundamento de los principios del derecho, entre los cuales se cuenta, primeramente, el reconocimiento de la persona, que no puede oscurecerse ni siquiera en los fragores de la guerra⁽¹⁷⁾. Ahora bien, resulta evidente que la tarea de determinar ese fundamento permanente de la praxis jurídica, anclado en la naturaleza específica del ser humano, que permite dar razón del reconocimiento de la (dignidad de la) persona, no puede sino residir en una actividad sapiencial de raigambre intrínsecamente filosófica. En concreto, se trata de una determinación de la antropología filosófica que servirá de fundamento a todo el orden práctico, incluido el orden jurídico y el político –pues los saberes prácticos, efectivamente, se subalternan a la antropología⁽¹⁸⁾–. Por ello es racionalmente incuestionable la propuesta de SAMPAY de desechar el intento de explicar tal fundamento acudiendo al historicismo, toda vez que éste no supera, *per se*, el plano de los mudables factores de poder vigentes, a pesar de la relativa estabilidad que pueda proporcionar una tradición jurídica determinada⁽¹⁹⁾.

Ahora bien, si de sustentar la validez de principios normativos objetivos y universales se trata, resulta asimismo racionalmente legítimo proponer llevar a cabo la fundamentación teórica que quiere SCHMITT acudiendo a aquella doctrina que, como señaló el mismo ALF ROSS, “está lejos de un racionalismo abstracto que busca deducir mediante

la razón una solución para cada cuestión específica concreta. Hay así mucho lugar en su construcción [la del Aquinate] para una forma sociológico-realista de la política jurídica. Lo mismo ocurre con el tomista de hoy”⁽²⁰⁾. La alternativa es férrea: la opción superadora del positivismo (el cual, *sensu stricto*, implica reducción de todo derecho a la expresión efectiva de los poderes políticamente vigentes en la Historia) no consiste en otra forma de positivismo –por más que en ella el derecho no quede atado a las sucesivas formas del tecnicismo liberal, sino a la sanción de una voluntad colectiva consuetudinaria–. La alternativa al positivismo es el iusnaturalismo, y el más acabado exponente de iusnaturalismo es el tomista. Si SCHMITT impugna el positivismo (identificación de todo el derecho con el derecho positivo) –o, por lo menos, sus consecuencias (cuasi)necesarias–, luego la solución no puede consistir en la apelación al derecho histórico, cuyo fundamento de validez, en tanto consuetudinario, se reduce a la positividad (i.e., vigencia) inveterada.

Hay otro aspecto de la respuesta de SAMPAY a SCHMITT que merece ser resaltado por su acierto teórico medular. Se trata de la necesidad de encuadrar toda consideración sobre el sentido del derecho dentro de una determinada comprensión y valoración del orden político, continente que funda y causa, en la doctrina y en la realidad, al mundo jurídico. Esta toma de posición teórica, común a ambos autores, es puesta de manifiesto por SAMPAY cuando señala que el propio SCHMITT ha visto claramente la dimensión política del derecho, y que de acuerdo con tal perspectiva ha explicado a SAVIGNY⁽²¹⁾. Por lo demás –cabe agregar–, toda la obra de SCHMITT cuenta como una de sus principa-

les (y positivas) notas el haber combatido el abstractismo juricista propio del racionalismo liberal⁽²²⁾. SAMPAY adhiere al tomismo como a la doctrina que mejor expresa la realidad del derecho natural. Ahora bien, el iusnaturalismo tomista se define precisamente por la primacía del bien común político y la correspondiente afirmación de la politicidad natural del hombre. Y es asimismo el bien común político el que constituye el primer principio de existencia y de legitimidad de la praxis jurídica –principio que a su vez funda la propiedad de la politicidad del derecho–.

IV A manera de conclusión

CARL SCHMITT es el más grande teórico del Estado que ha producido el genio alemán en la época contemporánea, junto con HERMANN HELLER. Pero su obra tiene un techo: la repulsa del derecho natural de la tradición clásica. Y ese techo le fue señalado por el tomista ARTURO ENRIQUE SAMPAY, tal vez con un dejo de desazón y de reclamo hacia quien nunca, como SCHMITT, desmintió su condición de católico –y de católico, cabe agregar, consciente del sentido del Katéjon⁽²³⁾–. 🙏

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO

(22) Y constituye también una nota de presencia sustantiva en la obra de SAMPAY. Aquí podría citarse, junto a los medulares desarrollos críticos de su *opus magnum*, la *Introducción a la Teoría del Estado*, el ensayo sobre *La filosofía del iluminismo y la Constitución argentina de 1853*, Buenos Aires, Depalma, 1944.

(23) En el *postscriptum* de la edición que utilizamos, SCHMITT reitera su recurrente preocupación por ese tema escatológico mayor (al respecto cfr. GROSSHEUTSCHI, FELIX, *Carl Schmitt und die Lehre vom Katechon*, Berlín, Duncker & Humblot, 1996); y allí identifica a SAVIGNY como una figura cuya significación histórica está alineada con el Katéjon (*Die Lage...*, cit., pág. 429).

(17) SCHMITT, CARL, *Die Lage...*, cit., pág. 423.

(18) Sobre este controvertido tema la mejor guía es MEINVIELLE, JULIO, *La subalternación de la ética a la psicología*, en Sapientia a. 1, n° 2 (1946).

(19) Por lo demás, nótese cómo, según FERDINAND LASALLE –paradigmático representante de la resolución del derecho en los factores de poder vigentes–, la conciencia y formación (moral) general del pueblo, en tanto fuerzas sociales, no dejan de contarse, justamente, entre tales factores de poder; cfr. LASSALLE, FERDINAND, *Über Verfassungswesen*, Hamburgo, EVA-Reden, 1993, pág. 22.

(20) ROSS, ALF, *Sobre el derecho y la justicia*, trad. G. Carrió, Buenos Aires, EUDEBA, 1977, pág. 238.

(21) SAMPAY, ARTURO E., *Carl Schmitt...*, cit., págs. 63-64.

JUSTICIA Y ECONOMÍA

I. Doctrina católica sobre la usura

En un periódico argentino de orientación católica, se ha afirmado recientemente que la Iglesia produjo “una lamentable involución de la Doctrina Católica de condena de la usura”. Y se agrega que “es posible que el abandono de la enseñanza de la condena de la usura por parte de la Iglesia haya abierto las puertas a las actuales exigencias de la evolución moral, tales como la contracepción, el aborto, el matrimonio homosexual y otras aberraciones de igual naturaleza”.

La crítica injusta –y con la mencionada deducción anexa, que no resiste el menor análisis– se basa en un libro de JOHN NOONAN, laico norteamericano de clara tendencia progresista. Este autor publicó otro libro en 1966, en el que sostenía que la Iglesia, así como había cambiado su doctrina sobre la usura, también debía hacer lo mismo respecto de la anticoncepción. Este segundo libro fundamentó una declaración de doscientos teólogos, encabezados por Charles Curran, publicada en *The New York Times* (31-8-68) rechazando la encíclica *Humanae Vitae*, donde el papa Pablo VI ratifica la condena de los métodos de regulación artificial de la natalidad.

Los antecedentes que reproducimos a continuación demuestran que en los más recientes documentos oficiales de la Santa Sede se mantiene la condena a la usura.

Últimas enseñanzas del Magisterio

– Consejo Pontificio “Justicia y Paz”. *Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia*, 2004.

323. En el Antiguo Testamento se encuentra una doble postura frente a los bienes económicos y la riqueza. Por un lado, de aprecio a la disponibilidad de bienes materiales considerados necesarios para la vida: en ocasiones, la abundancia –pero no la riqueza o el lujo– es vista como una bendición de Dios. En la literatura sapiencial, la pobreza se describe como una consecuencia negativa del ocio y de la falta de laboriosidad (cf. Pr 10,4), pero también como un hecho natural (cf. Pr 22,2). Por otro lado, los bienes económicos y la riqueza no son condenados en sí mismos, sino por su mal uso. La tradición profética estigmatiza las estafas, la usura, la explotación, las injusticias evidentes, especialmente con respecto a los más pobres (cf. Is 58,3-11; Jr 7,4-7; Os 4,1-2; Am 2,6-7; Mi 2,1-2). Esta tradición, si bien considera un mal la pobreza de los oprimidos, de los débiles, de los indigentes, ve también en ella un símbolo de la situación del hombre delante de Dios; de Él proviene todo bien como un don que hay que administrar y compartir.

341. Si en la actividad económica y financiera la búsqueda de un justo beneficio es aceptable, el recurso a la usura está

moralmente condenado: “Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable”⁽¹⁾. Esta condena se extiende también a las relaciones económicas internacionales, especialmente en lo que se refiere a la situación de los países menos desarrollados, a los que no se pueden aplicar “sistemas financieros abusivos,

(1) *Catecismo de la Iglesia Católica*, 1992:

2269. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona. La ley moral prohíbe exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la asistencia a una persona en peligro.

La aceptación por parte de la sociedad de hambres que provocan muertes sin esforzarse por remediarlas es una escandalosa injusticia y una falta grave. Los traficantes cuyas prácticas usurarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos los hombres, cometen indirectamente un homicidio. Este les es imputable (cf. Am 8,4-10).

El homicidio involuntario no es moralmente imputable. Pero no se está libre de falta grave cuando, sin razones proporcionadas, se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla.

(Continúa en pág. 14)

dustria humana, del aprendizaje intelectual”⁽¹⁰⁾, conviene recordar que él obra “Mediante la *Prudencia arquitectónica*, y que ésta es aplicación de los principios generales de la Ciencia Política a la circunstancia presente, en la que se conforma el porvenir”⁽¹¹⁾. De este modo,

“[e]l saber necesario al político es: la *Ciencia Política*, que le da los principios generales; la *Psicología racional*, a la que está subalternada la Ciencia Política, que le da el significado del bien del hombre, uno de cuyos aspectos busca el bien del hombre; la *antropología sobrenatural*, que subordina, a su vez, a la Psicología racional, desde que el bien del hombre no sólo es natural, sino también sobrenatural, y lo sobrenatural no destruye ni anula lo natural sino que lo eleva y perfecciona; el *conocimiento de las principales artes operativas subalternadas a la Ciencia política*, que brindan reglas relativamente generales aplicables y necesarias para el obrar político arquitectónico; asimismo, le hace falta poseer la *memoria* del pasado, que para la Prudencia arquitectónica es la *historia*, y la inteligencia del presente político, lo cual constituye el objeto de la *Teoría del Estado o Sociología Política*”⁽¹²⁾.

SAMPAY resalta en particular el papel que cumple el conocimiento histórico en la formación intelectual del político. En la historia “está incluida más de una especie de conocimiento, una de las cuales es parte de la Prudencia”⁽¹³⁾.

Nuestro autor, en un resultado sintético ejemplar, nos ilustra acerca de la ciencia histórica y su influjo en el juicio prudencial político:

“La *historia* tiene por objeto el conocimiento de actos humanos sociales, cuyo carácter específico es haber acaecido en el pasado (...) la continencia de los *actos humanos* tiene necesidad cuando son *pasados o presentes*, desde que en ellos rige el principio de contradicción. Sólo difiere el grado de facilidad con que se adquiere esa certidumbre (...) las *manifestaciones* o signos exteriores de los actos humanos sociales pasados son aprensibles por el sujeto conociente a través de los testimonios escritos, orales o plásticos que de ellos dejaron quienes los aprehendieron directamente”⁽¹⁴⁾. “Pero ese conocimiento histórico, cuasi-especulativo, de la realidad humana pasada, tiene como finalidad práctica extraer reglas singularizadas de comportamiento humano (...) Para la Prudencia política, esas ‘constantes’ extraídas de la historia política, incluidas, además del propio obrar humano político, la historia de las instituciones políticas y de las doctrinas políticas enunciadas como programa de realizaciones políticas en circunstancias dadas, constituyen ese sistema de reglas que designamos *Praxiología política*. Es decir, el conocimiento de la *Historia política*, que acrece la experiencia del político, tiene por objeto extraer de esa experiencia reglas singularizadas que aconsejen preferir una –conocida como que da los efectos buscados– entre las muchas soluciones que se ofrecen al político para determinar las normas ge-

nerales y abstractas de la Ciencia Política en la realidad política en que obra y que recrea con su obrar”⁽¹⁵⁾.

Señalemos, entonces, que no existe verdadero político si no cuenta con un suficiente conocimiento histórico, en particular acerca de la comunidad política para la cual ha sido llamado a gobernar.

4 Las cualidades morales del político

SAMPAY distingue entre la *idoneidad* para el oficio político y la *capacidad moral* en relación al servicio del bien común del Estado. De este modo,

“[s]i bien aquella idoneidad profesional puede existir sin esta capacidad moral, no puede cumplirse, sin ella, la función social del oficio; y aunque para apreciar el oficio en su condición de tal basta la idoneidad, el cumplimiento del deber profesional, que se reduce a una obligación moral, requiere la perfección de quien lo cumple”⁽¹⁶⁾.

En terminología platónica, el político *debe ser un philopolis*, i.e., un *amador del Estado*. En todo caso, su mirada personal está puesta en la eterna felicidad, no en bienes privados y mucho menos materiales.

“Como el *político* es un servidor de la *res publica*, y su oficio es desvelarse, mediante un obrar personal, en procura del bien de la comunidad, debe ser un *philopolis*, como decía PLATÓN (*República*, VI, 15; 503 a), un amador de su comunidad, de una multitud de prójimos; y la dilección de amar al prójimo tiene por fuente la caridad divina. Por tanto, el político fundamenta su abnegación en el amor de Dios, porque si todos los hombres obran movidos por su bien, el político busca un bien personal, como premio a su altruismo, y ya que éste no puede ser, como demostraremos, un bien privado material ni el bien de la gloria –según creían ARISTÓTELES y CICERÓN–, debe ser la beatitud divina, la perfecta y eterna felicidad”⁽¹⁷⁾.

A partir de lo dicho, resulta todavía más patente que el político *traiciona su vocación específica* si pone su fin en la consecución de los bienes materiales. El *lucro* no debe formar parte de la tarea política.

“Si el *político* usa en provecho personal el ejercicio de su función, niega la razón de ser del poder político, que los sujetos acatan porque esperan de él un bien común; y es tan propio de la naturaleza de las cosas considerar que el político no debe convertir la *res publica* en *res privata*, que no hay político verdadero, o que simule serlo, que no afirme, con verdad y mentira respectivamente, que es un servidor de la comunidad y que relega sus intereses particulares para ocuparse de los públicos. Atendiendo a esto, Pareto devela la «constante» histórica de que, en la lucha que los elencos políticos libran por el poder, ninguna arma es más eficaz para vencer al contricante que el achacarle utilizar la función política como fuente de bienes materiales propios, ya

que todo miembro de la comunidad tiene entonces la evidencia de una desnaturalización del móvil que debe animar a quien ejerce el *oficio político*, pues no es el lucro el premio que corresponde a esa función”⁽¹⁸⁾.


Todo hombre busca la felicidad. El político también. Pero teniendo presente que la felicidad humana se logra al conseguir la bienaventuranza, y siendo ésta última recompensa de la vida virtuosa,

“[s]e deduce que este premio ha de guardar proporción con el grado de excelencia de la virtud; y ya que es mayor la virtud que debe tener quien ejerce el oficio de político, porque no sólo se dirige convenientemente a sí mismo sino que del mismo modo conduce a los demás –por lo que es más grande el bien que consigue con su virtud–, resulta que también debe ser mayor el premio que le corresponde. Santo Tomás dice, en efecto, que en la escala de las diversas artes, oficios y poderes, son más dignos de alabanza quienes dirigen acertadamente a los demás, que quienes se comportan según la dirección ajena. [...]. Y como quien dirige la ciudad –concluye SANTO TOMÁS– mantiene con los gobernados una relación análoga a la del maestro con sus discípulos, a la del arquitecto con los albañiles y a la del general con los soldados, el premio de que se hace digno, si dirige bien la comunidad, es mayor al de cualquiera de quienes acataron bien sus directivas (Cfr. S. TOMÁS DE AQUINO, *De regimine principum*, I, 9)”⁽¹⁹⁾.

A partir de lo dicho, concluye SAMPAY:

“El político, por tanto, necesita adquirir, además del saber intelectual, una formación moral que le dé una disposición habitual para querer y obrar el bien, conforme a las virtudes naturales y sobrenaturales que se sustentan en Dios”⁽²⁰⁾.

5 A modo de conclusión

Nos preguntamos, a partir de los pensamientos de ARTURO ENRIQUE SAMPAY en torno a la fisonomía del político, si hay algunos –*non multa, sed multum*– en nuestra querida Patria, en respuesta a su vocación, plasmada en las aptitudes naturales de que gozan, que quieran conformarse de acuerdo con la escuela intelectual y moral formulada por nuestro autor. Ciertamente que los hay. No una muchedumbre, pero sí los suficientes para hacer resurgir a nuestra Nación mediante la práctica saludable de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Resta quererlo. Cualquier renuncia se justifica por amor a nuestra Argentina. 

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - DERECHO POLÍTICO

(10) *Ibidem*, pág. 493.

(11) *Ibidem*, pág. 493.

(12) *Ibidem*, págs. 493-494. Las negritas son nuestras.

(13) *Ibidem*, pág. 494.

(14) *Ibidem*, pág. 494-495.

(15) *Ibidem*, pág. 495.

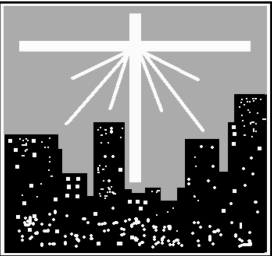
(16) *Ibidem*, pág. 491.

(17) *Ibidem*, pág. 496.

(18) *Ibidem*, pág. 497.

(19) *Ibidem*, pág. 499.

(20) *Ibidem*, pág. 500.



LA CRISTIANDAD

Los neomaritaineanos (Aproximación al Nuevo Liberalismo Católico)

FERNANDO ROMERO MORENO
CEUR y Universidad Austral, Rosario

Agradezco a los doctores Alfonso Santiago, Gabriel Zanotti, Roberto Bosca y Mons. Mariano Fazio, por su apoyo y/o consejos para la publicación de esta nota, a pesar de las críticas que hago respecto de alguna de sus ideas.

1. El error del “liberalismo católico” es de antigua data. Con diversidad de matices y tendencias, puede rastrearse su origen en el pensamiento de LAMENNAIS y probablemente su representante mayor en el siglo XX haya sido JACQUES MARITAIN. La oposición entre las tesis de este liberalismo con la Fe católica fue expuesta por la mayoría de los Papas, sobre todo a partir de Gregorio XVI. Como saben los entendidos, en su naturaleza más íntima el liberalismo católico es, por un lado, un *naturalismo o semina-turalismo político* que promueve un laicismo “moderado”, según aquel apotegma clásico convertido por ellos en “ideal” o “tesis”: *La Iglesia libre en el Estado libre*. Es decir, *la renuncia a la doctrina del Estado católico*, convirtiendo en una norma “de máxima” la hipótesis del Estado laico “aconfesional”, respetuoso de la Ley Natural y de la libertad de la Iglesia. Junto con esto, caracteriza al liberalismo católico un intento de superar el individualismo y el utilitarismo de los liberales ilustrados mediante una *antropología “personalista”*⁽¹⁾ que desnaturaliza la naturaleza del bien común. Estos dos aspectos se manifiestan luego en la valoración que hacen del *capitalismo*, la *democracia*, la *Revolución* y la *Modernidad*.

2. En los últimos treinta años se ha ido desarrollando una variante del “liberalismo católico” que sólo tiene diferencias de grado con el anterior, viene formulado con una terminología nueva –al menos en parte– y pretende apoyarse en los documentos del Concilio Vaticano II y en las enseñanzas de los Papas posteriores al mismo. Además, frente a la “aventura de la teología progresista”, *es visto en muchos ambientes como un baluarte de ortodoxia*.

3. Antes de explayarnos en los errores de esta corriente, queremos reconocer que, en sus representantes, hay un *genuino y legítimo deseo de cristianizar el orden temporal; de garantizar la legítima autonomía de las realidades terrenas; de recordar la misión que tienen los laicos de santificarse y santificar la vida personal, familiar y social (la consecratio mundi); de respetar la legítima libertad en cuestiones opinables y prudenciales; de dar fundamento a una sana laicidad; y, en definitiva, de “oxigenar” los ambientes cristianos de actitudes y mentalidades clericales o integristas, proclives al celo amargo, a un desordenado agere contra y a una intransigencia cerril no con el error, sino también con las personas que yerran. Por otro lado, sus representantes han hecho aportes valiosos en distintos campos del saber, como la teología, la filosofía, el derecho, la historia, la economía, etc.* No obstante y más allá del natural aprecio que sentimos por algunos de ellos (a quienes conocemos personalmente), no podemos dejar de advertir sobre los errores de sus posturas. Algunos de los referentes más importantes de este liberalismo católico son, según nos parece, PEDRO LOMBARDÍA, MICHAEL NOVAK, ANDRÉS OLLERO TASSARA, MARTÍN RHONHEIMER, ROBERTO BOSCA, ALFONSO SANTIAGO, RAFAEL TERMES, GABRIEL ZANOTTI, ALEJANDRO CHA-

(1) Hoy se tiende a identificar la legítima defensa de la dignidad humana con la palabra “personalismo”. En ese sentido, nada tenemos que objetar al término. La expresión, con todo, adquirió unas características propias en las ideas de pensadores como MOUNIER y MARITAIN que merecieron profundas críticas por parte de intelectuales serios que mencionaremos al final de este artículo. El propio Juan Pablo II habló, con relación a MARITAIN, de “algunos aspectos discutibles de su pensamiento”, en su Carta al Rector de la Universidad Católica de Milán, con motivo del Coloquio “Jacques Maritain hoy día”, organizado por la universidad, en octubre de 1982. También se suele identificar el vocablo “liberalismo” en sentido amplio con estado de derecho democrático. Mientras esto se haga dentro de lo que la Doctrina Social de la Iglesia (sobre todo San Pío X, Pío XII y Juan Pablo II) ha enseñado acerca de tal forma de gobierno, el término “liberalismo” no se aplica a lo que sostenemos aquí, aunque nos parece que es imprudente el uso ambiguo de dicho vocablo.

FUÉN, GEORGE WEIGEL, MONS. MARIANO FAZIO y JUAN MANUEL BURGOS⁽²⁾.

4. Vamos a sintetizar las principales características o notas del Nuevo Liberalismo Católico (de ahora en más, NLC). Previamente queremos advertir que *no todos los referentes del mismo adhieren a la totalidad de las ideas que señalaremos o no lo hacen siempre del mismo modo*. Así, por ejemplo, GABRIEL ZANOTTI no defiende la “tesis” de la laicidad aconfesional sino la de una “confesionalidad substancial” y MONS. MARIANO FAZIO es crítico del liberalismo económico, pero hacer un análisis exhaustivo del pensamiento de cada uno de ellos excedería el marco de esta nota. Vamos, pues, a exponer de modo general los rasgos fundamentales del NLC:

a) *Defensa como ideal de una “laicidad aconfesional” en una comunidad política respetuosa de la Ley Natural*, teniendo como superada –por clerical o integrista– la doctrina tradicional acerca de la necesidad del Estado católico. Esta “laicidad aconfesional” (separación amistosa entre el Estado y la Iglesia) presentada como “tesis” fue oportunamente reprobada por el Papa León XIII (precisamente con relación al caso norteamericano, que el Santo Padre consideró como la mejor solución para esa nación dadas sus circunstancias, pero no como el “ideal supremo”) y el Concilio Vaticano II no cambió nada al respecto, pues sostuvo que la doctrina tradicional sobre las relaciones Iglesia-Estado seguía vigente, idea que nos parece ser la clave hermenéutica para interpretar correctamente la Declaración *Dignitatis Humanae*. Dice el Concilio: “puesto que la libertad religiosa que exigen los hombres para el cumplimiento de su obligación de rendir culto a Dios, se refiere a la inmunidad de coacción en la sociedad civil, *deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia de Cristo*”⁽³⁾. Es que la Iglesia siempre ha sostenido como enseñanza definitiva de su Magisterio Ordinario y Universal que, supuesta una comunidad mayoritariamente católica, el Estado debe serlo también. Y esto no sólo por razones culturales, sino porque el hombre debe rendir culto a Dios tanto de modo individual como social. No “favoreciendo el hecho religioso en general” (indiferentismo político) sino con actos de culto público al Dios Uno y Trino de la Revelación cristiana, con la subordinación de su orden político y jurídico a la Ley Natural y a la Ley Divino-positiva, con el reconocimiento expreso de la Realeza social de Nuestro Señor Jesucristo, y con el apoyo a la Iglesia Católica, sin menoscabo de la recíproca libertad del Estado y de la Iglesia en sus

(2) Algunos ejemplos de estas tesis pueden verse en: BOSCA, ROBERTO, *Maritain en una antología de Sur*, <http://www.institutoacton.com.ar/oldsite/index.htm>; BURGOS, JUAN MANUEL, *Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-crítico*, Madrid, Fundación Emmanuel Mounier, Colección Persona, 2006; CHAFUÉN, ALEJANDRO A., *Los fundamentos escolásticos de la Economía de Mercado*, en *Cristianismo y libertad*, Fundación para el Avance de la Educación, 1984; FAZIO, MARIANO, *Secularización y cristianismo*, Buenos Aires, Universidad Libros, 2008; LOMBARDÍA, PEDRO, *Dualismo cristiano y libertad religiosa en el Concilio Vaticano II*, en *Ius Canonicum* (1986); NOVAK, MICHAEL, *El rostro humano de la economía*, <http://www.liberalismo.org/articulo/62/15/rostro/humano/economia/>; OLLERO TASSARA, ANDRÉS, *Laicidad*, <http://www.conoze.com/doc.php?doc=662>; RHONHEIMER, MARTÍN, *Secularidad cristiana y cultura de los derechos humanos*, <http://arvo.net/laicidad-y-laicismo/secularidad-cristiana-y-cultura-de-los-derechos-humanos/gmx-niv132-con15606.htm>; SANTIAGO, ALFONSO, *Religión y Política*, Buenos Aires, Ad-hoc, Colección Filosofía del Derecho y Derechos Constitucionales, 2008; TERMES, RAFAEL, *Doctrina social de la Iglesia y liberalismo: ¿antagonismo o malentendido?*, Revista Laissez Faire, septiembre 2000, Universidad Francisco Marroquín de Guatemala; WEIGEL, GEORGE, *Biografía de Juan Pablo II, Testigo de Esperanza*, Barcelona, Plaza & Janés Editores, 1999; ZANOTTI, GABRIEL, *Economía de mercado y Doctrina Social de la Iglesia*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1985; *El humanismo del futuro*, Buenos Aires, Fundación Editorial de Belgrano, 1989; *Fundamentos filosóficos y epistemológicos de la praxeología*, en Libertas, Buenos Aires, ESEADE, 1990; *Liberalismo y religión Católica, Apostólica Romana*, en *Cristianismo y Libertad*, Fundación para el avance de la educación, Buenos Aires, 1985.

(3) Concilio Vaticano II, *Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa*.

A propósito de

La cuestión Religión y Estado

Hemos invitado con amplitud y profusión a seguir la discusión de los temas abordados en nuestro DFD, concretamente en torno al tema Religión y Estado, y hemos recibido un definido aporte de Fernando Romero Moreno, que se transcribe. Aunque también se nos ha prometido desde la otra posición, para enriquecer el debate, pero para el número 23.

campos respectivos (distinción de potestades, sin separación). Eso no supone, pues, defender un Estado fundamentalista, clerical o integrista (confusión entre lo temporal y lo espiritual). Que en el “modelo de Cristiandad medieval” hubiera desviaciones en ese sentido (como de hecho las hubo) no es algo consubstancial a la naturaleza del Estado católico. De modo que identificar la mentada “unión del Trono y del Altar” como una “esencial” confusión entre lo sacro y lo profano es una afirmación falsa. Si una novedad vino a aportar el Concilio Vaticano II fue la de *complementar las enseñanzas clásicas acerca de las relaciones Iglesia-Estado con una mejor comprensión de la autonomía relativa de lo temporal (sana laicidad) y con la doctrina de la libertad “civil” en materia religiosa*⁽⁴⁾, pero dejando intactas las obligaciones del hombre y de la sociedad respecto de la verdadera Iglesia de Cristo. Esa misma noción de “libertad religiosa” tiene aún que formularse de modo más claro –una mejora nos parece que ya existe en el Catecismo de la Iglesia Católica– para mostrar la continuidad, en lo esencial y definitivo, respecto del Magisterio precedente. La hipótesis de un Estado laico “aconfesional”, pero respetuoso de la Ley Natural, siempre fue vista por la Iglesia como un “mínimo exigible” en naciones pluriconfesionales y con comunidades católicas minoritarias. Pero, repetimos, nunca como “el” ideal. Por otro lado, dicho Estado históricamente no existió y antropológicamente es de difícil aplicación si contamos con la existencia del pecado original y con las distintas “interpretaciones” que de hecho hay acerca del iusnaturalismo.

b) *Justificación del capitalismo liberal como un régimen económico compatible con la Doctrina Social de la Iglesia*, siempre que se entienda al liberalismo como despojado de la ética individualista y/o utilitarista, y suponiendo la difusión de una cultura basada en el “personalismo”. En rigor de verdad, todos los Papas que se ocuparon de la “cuestión social” han reprobado, con diversidad de matices, el liberalismo económico. Algunos (León XIII, Pío XI y Juan Pablo II) explicaron que no se condenaba al capitalismo como sistema sino a la ideología liberal que podía ir unida al mismo. Pero ninguno sostuvo que el “capitalismo liberal” podía ser aceptable si se lo enmarcaba en un conjunto de valores respetuosos de la dignidad humana, pues tal cosa era y es contradictoria en sí misma. *No alcanza con difundir una “cultura de la solidaridad y de la ética social empresaria” ni garantizar un orden jurídico-político que respete las instituciones del libre mercado (propiedad privada, contratos, estabilidad de la moneda, etc.) o los derechos de terceros. Es necesaria, además de eso, una justa regulación del orden económico por parte de las entidades intermedias y del Estado (que tenga en cuenta la justicia social y el bien común), regulación que la doctrina de la Iglesia –dentro del respeto al principio de subsidiariedad– siempre ha reclamado.* Como hay además una condena al “capitalismo real”, cuyo impacto global el Papa Pío XI no dudó en calificar como *Imperialismo Internacional del Dinero*, expresión que también fue utilizada por el Magisterio posterior al Concilio Vaticano II. Hay que reconocer que los liberales “clásicos” también han criticado este capitalismo de riqueza concentrada y monopolizada, como fruto –según su interpretación– del intervencionismo de los gobiernos o de monopolios u oligopolios artificiales (más propio de una suerte de “mercantilismo global” o de un “socialismo de mercado”, que de una “sociedad libre”). No entramos a dirimir esta última cuestión histórica, pero la señalamos para evitar interpretaciones unidireccionales.

(4) DE FUENMAYOR, AMADEO, *La libertad religiosa*, Pamplona, 1974; HERVÁS, JUAN, *La libertad religiosa*, Pamplona, Epalsa, 1966; RATZINGER, JOSEPH, *Cristianismo y Democracia Pluralista; acerca de la necesidad que el mundo moderno tiene del Cristianismo*, Scripta Theologica, 16, marzo 1984.

c) *Presentación de la democracia como el mejor régimen político y como una “fe secular”*, siempre que se trate de una democracia no relativista y fundada en normas absolutas “predemocráticas” cuyo origen se encuentra en la Ley Natural. Si bien es cierto que a partir de León XIII, y de modo más claro con Pío XII, hubo una “mayor apertura” de la Iglesia hacia el régimen republicano, las exigencias para que el mismo sea conforme con la Ley Divino-positiva y con la Ley Natural nada tienen que ver con reducir el bien común al orden natural, convertir la democracia en una “fe secular” o presentarla como el mejor régimen político. Precisamente algunas de esas tesis fueron las que San Pío X condenó en el Movimiento Le Sillon. Por otra parte, los católicos que se oponen a esta forma de gobierno en su formulación moderna (división de poderes, constitución escrita, sufragio universal, etc.) no son defensores de regímenes totalitarios y/o autoritarios, como algunos parecen insinuar. La rica doctrina del tradicionalismo español (sobre todo del “carlismo”) o, en materia económica, del “distributismo inglés” (G. K. Chesterton - Hilaire Belloc) son ejemplos más que elocuentes en este sentido.

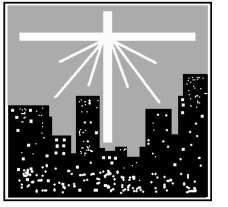
d) *Rechazo de la herencia política originada en la Revolución Francesa de 1789 (democracia totalitaria y laicismo beligerante) en contraposición al modelo laico, pluralista y respetuoso de la religión, encarnado en la Revolución Norteamericana de 1776 (y que algunos relacionan con la Revolución Inglesa de 1688)*. Es una vieja tesis conservadora (EDMUND BURKE)⁽⁵⁾ retomada por el nuevo liberalismo católico y por los llamados “neoconservadores”⁽⁶⁾. Volvemos a recordar las reservas de León XIII respecto del “modelo norteamericano” y consideramos que esa visión idílica acerca de los Padres Fundadores (no respecto de sus ideas, sino de los hechos concretos) no resiste el análisis histórico si tenemos en cuenta la persecución a la Iglesia católica que hubo en algunos Estados de la Unión, la tolerancia con la esclavitud, el imperialismo colonialista expuesto en el “Destino Manifiesto” (en particular respecto de Hispanoamérica), la difusión de sectas protestantes en América Central y América del Sur financiadas por el gobierno de los EE.UU., la enorme influencia en esa Nación de la Masonería y de entidades hostiles al Catolicismo, etc... Algunos de los defensores de esta distinción, como Mons. FAZIO, reconocen varios de los problemas señalados, pero los vinculan con influencias del liberalismo ilustrado de origen francés o con una de las expresiones del nacionalismo y del imperialismo “modernos” (aunque podrían citarse textos de Locke o de Tocqueville sobre el catolicismo para refutar o al menos matizar estos juicios). En todo caso y sea lo que fuere acerca del origen ideológico de estos problemas, *no nos parece que sea doctrinal e históricamente verdadero el planteo de una Revolución moderna “buena” (la de los EE.UU. en 1776) frente a otra “mala” (la Francesa de 1789)*. El tema, como tiene en sus presupuestos un análisis de tipo histórico, es más conjetural y opinable en lo que a la reconstrucción del pasado se refiere, pero *no puede servir para justificar como “positiva” en sede filosófica y/o teológica, una Revolución “fundadora” de la laicidad “aconfesional”, de la democracia “iusnaturalista” y del capitalismo “liberal”*. Sobre una posible interpretación “paleoconservadora” (y por lo tanto “no liberal”) de la Revolución Norteamericana, no nos pronunciamos en este artículo.

e) *Visión altamente optimista de la Modernidad*, valorando lo que llaman el proceso de “desclericalización” (aunque critiquen el secularismo), que ha permitido pensar en la posibilidad de una Modernidad “cristiana”, cuyos antecedentes serían la Segunda Escolástica Española, el liberalismo “moderado” al estilo de Tocqueville, el personalismo de Maritain y Mounier, y el Magisterio del Concilio Vaticano II (sobre todo a partir de la Constitución *Gaudium et spes* y la Declaración *Dignitatis Humanae*). El principal problema de esta interpretación es la “justificación”, no ya sólo doctrinal sino también histórica, de las ideas del NLC. Respecto de esto, nos parece importante aclarar lo siguiente: consolidados los cambios religiosos,

políticos, sociales, culturales y económicos de la Modernidad (Reforma Protestante, Ilustración, Revolución Francesa, Capitalismo y Revolución industrial), aparecieron entre los católicos dos tendencias fundamentales lícitas con relación al juicio que este proceso merecía y al modo de actuar frente a las nuevas realidades: una tendencia fue el *tradicionalismo* (José de Maistre, Donoso Cortés, el Cardenal Pie, Mons. Delassus, Juan Vázquez de Mella, el Cardenal Billot, Julio Meinvielle, entre otros) que se caracterizó por realizar un juicio altamente crítico de la Modernidad y la Revolución, defender el ideal de Cristiandad (comunidades políticas católicas) y juzgar como erróneos los intentos de cristianizar la democracia liberal, el capitalismo y el socialismo⁽⁷⁾. Esta tendencia, ortodoxa en sus representantes más importantes (aunque teñida de tradicionalismo filosófico en Francia), podía llevar en su seno el peligro del integrismo y el fundamentalismo (confusión de los órdenes natural y sobrenatural, desconocimiento de la legítima autonomía de lo temporal, mentalidad de partido único), *pero en sí misma era y es una tendencia legítima, en tanto y en cuanto se mantuviera y se mantenga fiel al Magisterio de la Iglesia. Hay muchos tradicionalistas ortodoxos, prudentes, con una sana libertad de espíritu, abiertos al diálogo verdadero, a los que sólo calumniando se puede tildar de “integristas” o de “clericales”*. Por caso, podemos citar el ejemplo, entre nosotros, de CARLOS A. SACHERI⁽⁸⁾. Otra corriente que podemos denominar *social-cristiana* prefirió rescatar de la Modernidad los aspectos que no eran *necesariamente incompatibles* con el Orden Natural y con la Fe católica, procurando cristianizar el régimen republicano, la economía de mercado (en otros casos el Estado de Bienestar), e incrementar el diálogo con la cultura contemporánea. *Tal opción también era y es legítima, como lo prueban los casos de Federico Ozanam, Albert de Mun o Augusto del Noce o, entre nosotros, de Juan Rafael Llerena Amadeo o Eduardo Ventura* (de hecho, el problema no está en defender un modelo republicano, de economía de mercado y sana laicidad, asunto que está dentro de las opciones legítimas y opinables de que goza cualquier católico –sobre todo lo referente a los dos primeros aspectos–, sino hacerlo de un modo contrario a las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia: democracia “naturalista”, capitalismo “liberal” y laicidad “aconfesional”). El peligro de esta corriente más “abierto” hacia la Modernidad radicó y radica en un *desordenado afán por conciliar con la Modernidad y la Posmodernidad* que puede conducir al error, como sucedió con Lamennais y otros católicos liberales, con el democristianismo de Le Sillon, con las corrientes marxistas de la teología de la liberación y, en general, con toda la teología progresista, sea en su versión de “centro” o “centro-derecha” (neoliberalismo católico) o sea en la variante de “izquierda” (tercermundismo o “cristianos para el socialismo”). Estos errores fueron oportunamente condenados por los Papas, de modo que justificar una “modernidad cristiana” con ejemplos erróneos (por caso, los Padres Fundadores de los EE.UU. o la democracia cristiana maritainiana) no parece el camino correcto para alguien que quiera ser fiel a la dimensión pública de la Fe católica, máxime si esas enseñanzas se dirigen principalmente a fieles laicos cuya misión es precisamente la *instauración cristiana del orden temporal*.

5. En síntesis, la doctrina de la Iglesia acerca de estas cuestiones no ha cambiado. *Una “hermenéutica de la continuidad”, como la que pide Benedicto XVI debe también aplicarse a este punto. Y si hubiera una legítima discontinuidad en algunos temas, como también ha sugerido el Romano Pontífice, la misma debe probarse*. Es cierto que sobre las relaciones Iglesia-Estado, la democracia, el capitalismo y las Revoluciones modernas, la Doctrina Social de la Iglesia, no sólo después sino también antes del Concilio Vaticano II, fue teniendo modificaciones parciales. Pero, en lo que al *Magisterio Ordinario y Universal* se refiere, siempre se trató de cambios acordes con la Tradición. Supuesto que ahora hubiera dudas respecto de algunos documentos, deben interpretarse de acuerdo con el Magisterio definitivo precedente. En lo que hace a uno de los aspectos principales del error católico liberal (el pelagianismo o semipelagianismo político), veamos lo que enseña el *Catecismo de la Iglesia Católica*: “El deber de rendir a Dios un culto auténtico corresponde al hombre individual y socialmente considerado. Esa es ‘la doctrina

tradicional católica sobre el deber moral de los hombres y de las sociedades respecto a la religión verdadera y a la única Iglesia de Cristo’ (DH 1). Al evangelizar sin cesar a los hombres, la Iglesia trabaja para que puedan ‘informar con el espíritu cristiano el pensamiento y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en la que cada uno vive’ (AA 13). Deber social de los cristianos es respetar y suscitar en cada hombre el amor de la verdad y del bien. Les exige dar a conocer el culto de la única verdadera religión, que subsiste en la Iglesia católica y apostólica (cf. DH 1). Los cristianos son llamados a ser la luz del mundo (cf. AA 13). La Iglesia manifiesta así la realeza de Cristo sobre toda la creación y, en particular, sobre las sociedades humanas (cf. LEÓN XIII, enc. *Inmortale Dei*; Pío XI, enc. *Quas primas*)”. Y al referirse a la doctrina sobre la libertad religiosa afirma: “El derecho a la libertad religiosa no es ni la permisión moral de adherirse al error (cf. LEÓN XIII, enc. *Libertas praestantissimum*), ni un supuesto derecho al error (cf. Pío XII, discurso 6-12-53), sino un derecho natural de la persona humana a la libertad civil, es decir, a la inmunidad de coacción exterior, en los justos límites, en materia religiosa por parte del poder político. Este derecho natural debe ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de manera que constituya un derecho civil (cf. DH 2) (...) El derecho a la libertad religiosa no puede ser de suyo *ni ilimitado* (cf. Pío VI, breve *Quod aliquantum*), *ni limitado solamente por un ‘orden público’ concebido de manera positivista o naturalista* (cf. Pío IX, enc. *Quanta cura*). *Los ‘justos límites’ que le son inherentes deben ser determinados para cada situación social por la prudencia política, según las exigencias del bien común, y ratificados por la autoridad civil según ‘normas jurídicas, conforme con el orden objetivo moral’* (DH 7)”⁽⁹⁾. Por su parte, ese gran defensor de la *secularidad* o *sana laicidad* bien entendida, de la *legítima libertad política* en cuestiones opinables y prudenciales, un crítico agudo del clericalismo y del *catolicismo oficial* como fuera San Josemaría Escrivá (al que algunos de estos autores que mencionamos presentan erróneamente como precedente de la “secularidad” entendida al modo “católico-liberal”, coincidiendo en esto –aunque en sentido contrario– con ciertas interpretaciones tradicionalistas acerca del Fundador del Opus Dei), no dudó en felicitar al entonces Jefe del Estado Español precisamente por seguir la doctrina de la Iglesia en este punto. En carta al mismo del 23-5-58, decía: “Aunque apartado de toda actividad política, *no he podido por menos de alegrarme, como sacerdote y como español, de que la voz autorizada del Jefe del Estado proclame que ‘la Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única y verdadera y Fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación’*. En la *fidelidad a la tradición católica de nuestro pueblo* se encontrará siempre, junto con la bendición divina para las personas constituidas en autoridad, la mejor garantía de acierto en los actos de gobierno, y en la seguridad de una justa y duradera paz en el seno de la comunidad nacional”⁽¹⁰⁾. En cuanto a las libertades e instituciones “liberales” escribió: “Es necesario contrarrestar con denuedo esas ‘*libertades de perdición*’, hijas del libertinaje, nietas de las malas pasiones, biznietas del pecado original..., que descienden, como se ve, en línea recta del diablo”⁽¹¹⁾. Lo que en buena lógica se desprende de estos textos es que *para Escrivá no había contraposición entre sana laicidad y Estado católico, ni identificación entre secularidad y catolicismo liberal*⁽¹²⁾. Ideas que no nos consta haya modificado después del Concilio Vaticano II. *Podríamos traer a colación otros textos del Fundador del Opus Dei acerca del laicismo, la masonería o la teología progresista para corroborar lo impreciso de ubicarlo a la par de pensadores heterodoxos como MOUNIER o MARITAIN*. Pero estimamos que con esto es suficiente.



(5) Cfr. NASH, GEORGE, *La rebelión conservadora en Estados Unidos*, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1987; ASHFORD, NIGEL - DAVIES, STEPHEN, *Diccionario del pensamiento conservador y liberal*, Buenos Aires, Nueva Visión, 1992; KIRK, RUSSELL, *La mentalidad conservadora en Inglaterra y EE.UU.*, Biblioteca del Pensamiento actual, Madrid, Rialp, 1956.

(6) En contraposición a los “paleoconservadores” o conservadores tradicionalistas.

(7) LAMAS, FÉLIX A., *Ensayo sobre el orden social*, Instituto de Estudios Filosóficos Santo Tomás de Aquino, 1990.

(8) Cfr. SACHERI, CARLOS A., *El Orden Natural*, Buenos Aires, Ediciones del Cruzamante, 1980; HERNÁNDEZ, HÉCTOR H., *Carlos A. Sacheri: predicar y morir por la Argentina*, Buenos Aires, Vórtice, 2007.

(9) CIC, N°s 2105 y 2108.

(10) ESCRIVÁ DE BALAGUER, JOSEMARÍA, *Carta*, 23-V-1958, en *Razón Española*, N° 105, enero-febrero 2001.

(11) ESCRIVÁ DE BALAGUER, JOSEMARÍA, *Forja*, 720.

(12) Sobre la noción de secularidad en San Josemaría Escrivá, cfr. GARCÍA SUÁREZ, *Existencia cristiana secular. Notas a Propósito de un libro reciente*, *Scripta Theologica*, 1970, vol. 2 (1); DE FUENMAYOR - GÓMEZ-IGLESIAS - ILLANES, *Fe cristiana y realidades seculares*, en *El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma*, EUNSA, 1989, y REDONDO, GONZALO, *Secularidad y secularismo*, *Ius Canonium* XXVII, 1987.

Con algunas limitaciones en su interpretación, esta misma *doctrina sobre el ideal del Estado católico* era ya, a la hora de ser redactado el nuevo Catecismo, la tesis de Fernando Ocáriz (mejorando ideas de De Fuenmayor)⁽¹³⁾, en la que procuraba mostrar la continuidad del Concilio Vaticano II con el Magisterio anterior. “Hermenéutica de la continuidad” que, con más precisión, ya habían esbozado oportunamente el P. Victorino Rodríguez O.P y Mons. Guerra Campos. Sobre otros puntos del liberalismo católico, que ahora se presenta *aggiornado*, se expresaron con claridad CHARLES DE KONINCK⁽¹⁴⁾, LEOPOLDO EULOGIO PALACIOS⁽¹⁵⁾, JULIO MEINVIELLE⁽¹⁶⁾, EUDALDO FOR-

(13) OCÁRIZ, F., *Sulla libertà religiosa. Continuità del Vaticano II con il Magisterio precedente*, Annales Theologici, 3, 1989.

(14) DE KONINCK, C., *De la primacia del Bien Común contra los personalistas*, Madrid, 1952.

(15) PALACIOS, LEOPOLDO E., *El mito de la Nueva Cristiandad*, Madrid, Rial, 1951.

(16) MEINVIELLE, J., *Crítica de la concepción de Maritain sobre la persona humana*, Buenos Aires, 1948; *De Lamennais a Maritain*, Buenos Aires, 1967; *Respuesta a dos cartas de Maritain al R. P. Garrigou*

MENT⁽¹⁷⁾, CARLOS CARDONA⁽¹⁸⁾, HÉCTOR H. HERNÁNDEZ⁽¹⁹⁾ o LUIS MARÍA SANDOVAL⁽²⁰⁾, entre otros. Catolicismo y liberalismo, como catolicismo y socialismo, son pues incompatibles. *Si es ilegítima una “teología de la liberación” de inspiración marxista, también lo es una doctrina de la laicidad, la democracia, el capitalismo y la Modernidad de carácter liberal o neoliberal*. Como ha dicho LUIS MARÍA SANDOVAL: “Ante el laicismo, que preten-


Lagrange, O.P., con el texto de las mismas, Buenos Aires, 1948; *Concepción católica de la política*, Buenos Aires, 1975.

(17) FORMENT, EUDALDO, *El problema de la persona y la sociedad*, en *Fundamentos filosóficos de la enseñanza de la filosofía*, Enseñanza de la filosofía en la educación secundaria. Tratado de educación personalizada, Víctor García Hoz (dir.), Madrid, Rialp, 1991.

(18) CARDONA, CARLOS, *Metafísica del bien común*, Madrid, Rialp, 1966.

(19) HERNÁNDEZ, HÉCTOR H., *Liberalismo económico y doctrina social económica católica (Notas críticas sobre un intento conciliador)*, Buenos Aires, Ediciones Gladius, 1991.

(20) SANDOVAL, LUIS MARÍA, *Laicidad ¿Premisa o fruto? ¿Mínimo o ideal?*, abril, N° 116

de dictar el bien y el mal, reivindicamos la sana laicidad del Estado que aquel usurpa, sin que esa autonomía implique independencia absoluta de Dios. *La laicidad del Estado se sostiene sobre premisas cristianas*, que actúan en hombres con esa herencia latente (...) *La laicidad no es premisa del orden cristiano, sino consecuencia de sus principios. La apelación al derecho natural no es concluyente en la medida en que es negada su existencia y el auxilio divino para confirmarlo. La laicidad sólo quedará asegurada tras una nueva evangelización de la política. Y no es sino un mínimo, considerando el lugar que corresponde a Dios en la vida pública, lo cual es un deber natural según el Concilio Vaticano II. Ese lugar condigno no es sino el de rey de la verdad, como nos enseñan la fiesta de Cristo Rey y la encíclica Quas primas*. Es inútil e impío querer darnos por satisfechos con un punto medio (...) o pretender una restauración de valores sin Él”⁽²¹⁾. 

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - IGLESIA CATÓLICA

(21) Ídem.

(Viene de la página 11)

si no usurarios”⁽²⁾. El Magisterio reciente ha usado palabras fuertes y claras a propósito de esta práctica todavía dramáticamente difundida: “La usura, delito que también en nuestros días es una infame realidad, capaz de estrangular la vida de muchas personas”⁽³⁾.

Breve análisis

Durante mucho tiempo se utilizó el concepto de usura que formuló ARISTÓTELES: “se aborrecerá la usura, porque en ella la ganancia se obtiene del mismo dinero y no de aquello para lo que éste se inventó, pues el dinero se hizo para el cambio, y en la usura el interés por sí solo produce más dinero. Por eso se llama en griego *tokos*, pues lo engendrado (*tiktómena*) es de la misma naturaleza que sus generadores, y el interés viene a ser dinero de dinero; de suerte que de todas las clases de tráfico éste es el más antinatural”.

Ahora bien, como aclara el profesor MIHURA SEEGER, “una doctrina moral debe no solo ser justa en absoluto sino que ha de ser, además, aplicable a la situación real histórica sobre la que pretende ejercer su función normativa-perfectiva. En esto último está comprometida la practicidad de la verdad moral y su necesaria exclusión del utopismo”. Aplicando este criterio a la doctrina sobre la usura, tal como fuera formulada por los padres y doctores de la Iglesia, la misma debe quedar delimitada al período histórico en el que fue expresada, período previo al del desarrollo de una economía dinámica.

Es que en la antigüedad, al existir una economía estática, la usura correspondía al precio exigido por el uso de un bien consumible, cedido en préstamo. Así explica SANTO TOMÁS que “comete injusticia el que presta vino o trigo pidiendo le den dos recompensas, una la restitución de igual cosa y otra el precio del uso que se llama usura” (*Summa Theol.* II-II, q. 78, a.1).

Pero el mismo Tomás (ya en el siglo XIII) reconoce la existencia de usos secundarios de las cosas, y ello exige una mayor precisión sobre el concepto de usura. “Solo hay usura en la medida en que el capital prestado lo sea bajo la formalidad de un bien consumible”.

Explica el Aquinate: cuando se halla “algún uso secundario del dinero de plata, como si alguien diese plata acuñada por ostentación o empeñándola en prenda (...) tal uso del dinero puede venderlo el hombre legítimamente”.


Son los integrantes de la Escuela de Salamanca –Francisco de Vitoria, Tomás de Mercado, Domingo de Soto– quienes profundizan el estudio de los nuevos problemas que representaba la economía. Distinguen entre usura, lucro y préstamos con interés; condenan la usura, limitan el lucro y permiten el préstamo con interés. Domingo de Soto (siglo XVI) admite la moralidad de los créditos bancarios.

(2) *Catecismo de la Iglesia Católica*, 1992:

2438. Diversas causas, de naturaleza religiosa, política, económica y financiera, confieren hoy a la cuestión social “una dimensión mundial” (SRS 9). Es necesaria la solidaridad entre las naciones cuyas políticas son ya interdependientes. Es todavía más indispensable cuando se trata de acabar con los “mecanismos perversos” que obstaculizan el desarrollo de los países menos avanzados (cf. SRS 17; 45). Es preciso sustituir los sistemas financieros abusivos, si no usurarios (cf. CA 35), las relaciones comerciales inícuas entre las naciones, la carrera de armamentos, por un esfuerzo común para movilizar los recursos hacia objetivos de desarrollo moral, cultural y económico “redefiniendo las prioridades y las escalas de valores” (CA 28).

(3) JUAN PABLO II, discurso del 4-3-2004.

El papa Benedicto XIV, en *Vix Pervenit*, de 1745, luego de ratificar como pecado la usura, admite que “mediante contratos de naturaleza muy diversa del mutuo, cada cual pueda colocar e invertir su propio dinero, ya para obtener rentas anuales, ya también para ejercer el comercio o en negocios lícitos, y obtener de ello un honesto lucro”.

El tema merecería un análisis más profundo, que excede nuestra competencia, pero consideramos necesario expresar nuestro disenso con las afirmaciones que señalamos en el comienzo de esta nota. 

LIC. MARIO MENEGHINI

Córdoba, julio de 2011

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - ECONOMÍA - IGLESIA CATÓLICA - DERECHO

II. Justicia y deuda externa

La Argentina debe el 80% de su Producto Bruto Interno (Tres informes)

1. Cuánto se debe por “la deuda externa”

Este trabajo es un intento de cuantificar la deuda pública del Estado Nacional precisando las cifras que fueron planteadas en otra nota anterior, también editada por *El espejo de la Argentina* (*Alerta amarilla sobre la deuda pública*, del 9-2-11).

La deuda del Estado central

Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Economía la deuda del Estado Central al 31-12-10 es de unos 176.000 millones de dólares (MD).

Una gran parte de esta deuda –aproximadamente 77.000 MD– está contraída con el propio sector público: es la deuda intra-Estado (a la que nos referimos en el artículo titulado precisamente *Qué significa la deuda intra-Estado*, del 16-11-10, editado por *El espejo...* en su número cero).

El hecho de que un monto tan relevante de obligaciones esté tomado con agencias del mismo Estado permite obviamente mayor libertad de acción y refinanciación permanente pero *no libera al Tesoro, en el futuro, de sus obligaciones* de cubrir el no desfinanciamiento de los organismos oficiales prestamistas, como es el caso de los fondos adeudados a los jubilados a través de la ANSeS o la devolución de reservas internacionales que son activos del Banco Central. Es decir que *tales deudas intra-Estado no son neutras para el Tesoro Nacional*.

Pero volviendo al tema central del monto de la *deuda pública*, en valor absoluto e independientemente del tipo de acreedor, tenemos que dicha deuda suma un total de 176.000 MD.

Los importes se expresan aquí siempre con redondeo y conforme su equivalencia a dólares, aunque las obligaciones están contraídas en distintas monedas.

Actualmente, un 40% de la deuda está en pesos y un 60% en moneda extranjera.

Pero –y aquí viene lo importante– ésta no es toda ni la real deuda del gobierno central.

Aunque las registraciones de la deuda pública siguen el criterio contable de lo percibido, que refleja las obligaciones de pago ciertas a una fecha de corte determinada (en este caso, fin del año pasado) existen otras operaciones de deuda muy relevantes que también devengan obligaciones concretas, pese a que sus importes no pueden preestablecerse con exactitud, pero que constituyen compromisos en firme y documentados.

A este tipo de obligaciones, que comprenden conceptos de deuda que son válidos y devengados a futuro aunque no mos-

trados en los datos oficiales, lo denominamos “deuda no registrada”.

La deuda no registrada

Hay tres rubros fundamentales de deuda no registrada (derivados básicamente del megacanje Kirchner-Lavagna de 2005) que están en cabeza del Estado Central:

1. Los *intereses que se capitalizan por anatocismo*, esto es, intereses devengados y no pagados que se suman al capital y generan nuevos intereses. El Presupuesto 2011 prevé el pago de unos 9.000 MD de intereses de la deuda pública pero no informa cuánto es el importe que no se paga sino que se capitaliza durante el ejercicio, y que estaría en un mínimo de 1.300-1.500 MD/año, para el período 2011-2014, lo que da así un piso acumulativo de 5.000 a 6.000 MD.

2. La *indexación de deuda en pesos ajustada por CER*, cuyo monto equivale a 38.000 MD y que, actualizada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oficial del INDEC –que reconoce un 11% de inflación anual para el 2010– significa que esta deuda crece inercialmente unos 4.000 MD por año. Suponiendo que dicha deuda indexada por CER (un índice que replica el IPC) se extinga en 5 años (la mitad de la vida promedio de la deuda total, que es de 11 años) y que se mantenga una tasa de inflación oficial anual del 10%, esto significa que tal indexación llevaría el monto de este rubro de deuda a una cifra tentativa entre 20 y 24.000 MD en el quinquenio.

[Nota: En realidad, si el ajuste por inflación oficial se mantuviera en el orden del 10% anual y el tipo de cambio/dólar siguiera una devaluación de la mitad (5%) –como previsto para el ejercicio 2011– la cifra de 24.000 MD pudiera reducirse consecuentemente en su proyección. Pero ello depende de una combinación de variables que hoy es muy difícil predecir: gran diferencial contra el supuesto de vida promedio (20.500 MD vencen en el período 2033-2038 y no en 5 años), evolución de la deuda en pesos con CER, inflación oficial y devaluación del peso con respecto al dólar].

3. A partir del canje del 2005 la Argentina asumió el compromiso de pagos adicionales a los nuevos tenedores de bonos en función del crecimiento económico de nuestro país.

Se trata de las llamadas Unidades Ligadas al Crecimiento o Cupones PBI (ULPBI), que fijan un pago anual acumulativo por ejercicio cuando el país aumenta su producto bruto por encima del 3% anual, cosa que ha venido ocurriendo con creces en los últimos años (salvo el 2009) y que se estima puede mantenerse a mediano y largo plazo.

Javier Llorens, de Córdoba (*Al César lo que es del César; o las formas proteicas de la deuda*, diciembre de 2010), ha calculado que el monto total a pagar por este tipo de compromisos –a lo largo de toda su vigencia– sumaría unos 38.000 MD, de los que 6.000 ya se habrían pagado (incluyendo los 2.500 previsto girar a fin de este año) y restan por pagar en el futuro 32.000 MD. Oficialmente son *deuda contingente* porque no se conoce *a priori* su importe exacto pero se trata de obligaciones en firme que pueden ser estimadas. El gobierno podría “liberarse” de esta servidumbre de pagos anuales pero para ello tendría que comprar los cupones PBI a valor de mercado (que hoy tienen una cotización en bolsa creciente), lo que supondría un gasto al contado no menor de 11 o 12.000 MD; si bien el Ministerio de Economía no ha planteado hasta ahora tal variante. Todo esto quiere decir que, sumando los tres rubros de deuda no registrada –en sus estimaciones de mínima– el monto de la misma sería del orden de unos 57.000 MD (5.000 + 20.000 + 32.000).

Lo que significa que la deuda total real del Estado Central no es la de los 176.000 MD oficial sino de unos 233.000 MD.

La deuda pública nacional

El Estado Central no es el único ente oficial que tiene deuda pública. Por eso es necesario determinar también cuánto es la deuda de la Nación Argentina en su conjunto.

La idea de *deuda pública nacional* apunta precisamente a cuantificar cuánto es esto que el país realmente debe –a nivel de entidades oficiales– cualquiera sea la *ventanilla* de endeudamiento que se utilice ya que, en definitiva, todos esos rubros son *sumables*, esto es, pesan como carga financiera sobre el Estado y el pueblo de la Nación.

Para tener así una idea de lo que estaría debiendo actualmente en total la Nación Argentina deben sumarse a la del gobierno central –además de las propias y completas– las obligaciones contraídas por todos los órganos y niveles del Estado, que son esencialmente los siguientes:

a) La deuda cuasi fiscal del Banco Central (BCRA) por *letras y notas* (LEBAC/NOBAC), que son colocadas para esterilizar el dinero emitido para comprar dólares que se utilizan para pagar deuda externa con reservas internacionales; y que hoy suman unos 25.000 MD.

b) La deuda consolidada de todas las *provincias* –incluyendo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– cuya última información oficial (al 30-6-10, después de la quita y el pago con fondos de la Coparticipación de Impuestos) era de 96.200 millones de pesos, equivalente a unos 25.000 MD (porque a esa fecha el tipo de cambio estaba en 3,93 \$/US\$).

Como una parte relevante de esta deuda de las provincias está contraída con la Nación y respaldada con títulos BOGAR, por casi 10.000 MD (9.800), corresponde descontar dicha cifra para no tomarla dos veces, con lo que la deuda neta de las provincias quedaría así en el orden de los 15.000 MD.

c) La deuda pública de los *municipios* del país, que es un misterio: no se publican informaciones oficiales al respecto pese a que tales datos obviamente existen y se llevan monitoreados a nivel nacional y provincial.

d) Lo mismo ocurre con la deuda pública de los *entes nacionales*: organismos oficiales, empresas del Estado y fondos fiduciarios o fideicomisos públicos.

Este rubro de endeudamiento es particularmente importante dado que el Estado Central garantiza –lo mismo que la gran mayoría de la deuda de las provincias– el cumplimiento de sus obligaciones, pero su monto se desconoce.

Baste decir que para este año –según Presupuesto 2011– está previsto que el gobierno nacional emita avales dentro de este rubro por un total de 18.000 MD (se aclara: millones de dólares, no pesos), que corresponden a préstamos a tomar en su mayor parte para la realización de obras públicas e infraestructura.

Lo que da una idea de las magnitudes de deuda que se manejan por esta vía.

Hasta aquí los principales rubros de deuda pública que, junto con la del Estado Central, completan lo que denominamos deuda pública nacional o deuda de la Nación Argentina en su conjunto, y que totaliza entonces realmente entre 273.000 MD (producto de la deuda del gobierno central incluyendo la deuda no registrada –233.000 MD– más los 40.000 MD de deuda conocida de las provincias y BCRA) y 293.000 MD (si a los 273 mil se le agrega una suma tentativa de 20.000 MD más por las deudas de entes nacionales y municipios, actuales y próximas a contraer).

Comparadas estas cifras con el producto bruto –estimable hoy en unos 350.000 MD– la *relación Deuda/PBI estaría así en el orden del 80%*.

Cabe aclarar, por último, que aquí no están computadas las deudas contingentes por juicios contra el Estado con sentencia en firme ni los montos de reclamos por causas en curso (en su mayoría: locales por juicios jubilatorios y externas por denuncias ante el CIADI); y tampoco se toma en cuenta la deuda flotante o exigible, que tiende a ser cada vez más relevante.

Conclusión

Como resultado de todo lo aquí sucintamente explicado se puede dejar planteado lo siguiente: 1) La deuda pública real del Estado Central es mucho mayor que la deuda oficial mostrada por el Gobierno. 2) La deuda pública de la Nación Argentina en su conjunto –Estado Central, Provincias, Municipios, BCRA y Entes Nacionales– se encuentra en altísimos niveles de alerta financiera pese a que el gobierno (con la complicidad de la clase dirigente institucional y de los medios de información) omite informar sobre los montos concretos de dichos segmentos de obligaciones. 3) En este contexto –y con los datos presupuestarios en la mano (que preanuncian un aumento neto de la deuda pública del Estado Central de 9.400 MD, más los avales citados)– *la llamada política de desendeudamiento público es una mentira*.

Ante la eventualidad que algunos de los datos estimados en este trabajo puedan estar equivocados es obvio que sería conveniente que las autoridades dieran a conocer las cifras disponibles y supuestamente correctas; porque se habla mucho de la manipulación de cifras del INDEC pero nadie habla de la manipulación –tanto o más grave– de la deuda pública de la Argentina.

En resumen, deuda nacional real de la Argentina sería así hoy del orden de los 273.000 MD, que es la cifra cuantificable sobre la base de datos conocidos. Este total podría elevarse a unos 293.000 MD si se verifica que las cifras supuestas de la deuda de Entes Nacionales y Municipios del país alcanzan a 20.000 MD adicionales.



16-4-2011

(*) Corresponde a cifras no informadas pero inferidas sobre la base de los servicios que se devengan por intereses y a nueva deuda en proceso de contracción (que en el Presupuesto 2011 se autoriza por un monto).

2. El lavado de la deuda pública

Por analogía con el concepto de lavado de dinero, a los fines de este trabajo definimos como lavado de deuda aquellas operaciones de reestructuración que tienen por efecto práctico *encubrir o dificultar la identificación de deudas ilegítimas cargadas al Estado*. Este tipo de procedimientos se efectúa a través de novaciones de deuda (refinanciación con el mismo acreedor) y/o nuevas operaciones con terceros para cancelar obligaciones contraídas con otro acreedor (operaciones de administración de pasivos). En determinados casos –como ocurre actualmente en la Argentina– el Estado puede pagar así a tenedores privados deudas contrayendo nuevas deudas dentro del propio sector público.

El objeto de esta nota es analizar precisamente esto que está sucediendo hoy en la Argentina en la materia, donde tal modalidad –que, en realidad, es una constante en la historia de la deuda pública– se sigue realizando pero con la importante variante de que se hace principalmente a través del crecimiento de la deuda intra-Estado.

Operatoria del lavado de deuda

La esencia de toda operación de “lavado de activos” –en este caso, desde el ángulo del Fisco, su contrapartida o “lavado de pasivos”– es transformar operaciones ilegales o irregulares en contratos aparentemente legítimos, soslayando para ello que –desde el punto de vista lógico y jurídico– si una obligación primitiva es irregular o ilegítima en su origen la misma no genera obligaciones válidas para el Estado pese a cualquier refinanciación que se haga.

Los funcionarios superiores intervinientes son, en tales situaciones, directamente responsables por las acciones, omisiones y/o irregularidades que convalidarían de este modo a través de su comportamiento contrario a los intereses del Estado e incumpliendo, consecuentemente, sus deberes como funcionarios públicos.

Este proceder se agrava más todavía cuando las obligaciones se contraen sin demostración de la debida capacidad de repago del Estado, lo que implica compeler una forzosa reestructuración futura de las mismas, sin extinción de los compromisos financieros.

La combinación de deudas ilegítimas y reestructuraciones sin capacidad de repago configura la base del círculo vicioso de la deuda perpetua: el *stock* de la deuda pública no baja, los servicios de intereses de la deuda pesan cada vez más en los gastos corrientes, los vencimientos de capital no se pagan sino que se refinancian en su totalidad generando nuevos servicios de deuda y las administraciones de gobierno toman más deuda, cuyo saldo sigue aumentando.

Tal fue y sigue siendo el mecanismo de endeudamiento público permanente que ha seguido nuestro país hasta hoy, tema que ya ha sido tratado en otros trabajos del autor(*).

Antecedentes de la deuda actual

El procedimiento clásico del endeudamiento público se da casi siempre por medio de la creación de deudas ilegítimas o irregulares que luego se van “legitimando” a través de sucesivas reestructuraciones de pasivos de modo que las obligaciones espurias originales son reemplazadas gradualmente por nuevos instrumentos de deuda.

Esto ocurrió en la Argentina con la deuda externa primitiva del Proceso Militar 1976-1983 a lo largo de etapas sucesivas:

– Los Acuerdos de Nueva York 1985-1987 del gobierno Alfonsín, que refinanciaron el paquete de deudas ilegítimas arras-

tradas del gobierno militar e incluyendo también la estatización de las deudas privadas transferidas al Estado por el mecanismo de *swaps* y seguros de cambio.

– El Plan Brady 1992-1993 de la Administración Menem-Cavallo, que se hizo sobre la base de los convenios anteriores y transformó las acreencias nominativas de los grandes Bancos Acreedores en títulos públicos anónimos (el conjunto de Bonos Brady y conexos). Fue el gran “salto cualitativo” del lavado de deuda que dio paso, a su vez, a la segunda ola de endeudamiento público durante la década del noventa.

– El megacanje De la Rúa-Cavallo de junio del 2001 y la posterior conversión de bonos en préstamos garantizados, a través del decreto 1387/01, en noviembre de ese mismo año.

– El megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 –y sus complementarios del 2010– que se estima reestructuraron entre un 80 y un 95% los títulos emitidos en el 2001.

Todas estas operaciones se hicieron por connivencia entre los grandes acreedores del Estado –asistidos por Bancos-Agente colocadores de deuda, apoyados por calificadoras de riesgo a cargo de las buenas notas para el país y recomendaciones de los organismos financieros internacionales (con el Fondo Monetario a la cabeza)– y los gobiernos de turno, cualesquiera fuese su signo político.

Un “detalle” importante a tener en cuenta es que todas estas reestructuraciones se hicieron por necesidad frente al fracaso de las anteriores, es decir, como forma de evitar una declaración formal de cesación de pagos (cosa que no impidió el default en el caso de la crisis de deuda del 2001).

La posición del actual Gobierno

En su libro *Después del derrumbe* (Buenos Aires, abril de 2003) –editado un mes antes de las elecciones– el ex presidente NÉSTOR KIRCHNER decía que en caso de que asumiese la presidencia no iba a cuestionar la legitimidad de la deuda pública, ya que, en línea con los argumentos típicos del establishment, ningún otro gobierno anterior la había objetado y que el Congreso, al convalidar el presupuesto anual, estaba dando por sobreentendido que las obligaciones por las que se pagan los intereses de la deuda son legítimas.

Su esposa, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ratificó y explicitó más aún esta postura oficial en varias ocasiones, especialmente en su discurso del 4-3-10, donde no solamente se refirió a la legitimidad de la deuda dándola por válida e incuestionable, sino que garantizó el pago de la misma a los acreedores, apelando incluso a las reservas internacionales del Banco Central, tal como lo viene haciendo su administración.

Esta postura del gobierno tuvo por hitos principales el pago total y anticipado de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional, el Megacanje Kirchner-Lavagna del 2005 y sus canjes complementarios del 2010, la oferta de pago con Reservas de la deuda externa a los países del Club de París (cuya mayor parte proviene de sucesivos “lavados de deuda” desde el Gobierno Militar) y la constitución por Decreto de los denominados Fondos de Desendeudamiento Público (2010 y 2011), utilizados para pago a organismos multilaterales de crédito y acreedores privados también con reservas internacionales.

El gobierno Kirchner soslaya así la existencia de la causa judicial con sentencia en firme Olmos I y las otras causas que todavía siguen en curso: Olmos II, Megacanje 2001 y gestión de la deuda 1976-2007.

La política de endeudamiento público de la actual Administración sigue una hoja de ruta cuyos pasos principales declarados son la regularización de la deuda con los acreedores que no ingresaron en los canjes (*holdouts*), el nuevo arreglo con el Club de París y la vuelta al Mercado Internacional de Capitales para contraer más deuda pública en el nuevo marco de reglas del Grupo de los 20 (que tiene por organismo de monitoreo al FMI).

En este contexto, la apelación a la deuda intra-sector público, esto es, la toma de fondos de entes del Estado –principalmente Banco Central y ANSeS– para pagar a organismos financieros internacionales y acreedores privados, actúa en la práctica como un préstamo puente para cubrir las necesidades de financiamiento derivadas de la deuda pública de modo de poder cumplir con los objetivos de la hoja de ruta.

Este procedimiento –que se ha explicado en otros trabajos del autor(**) y que conlleva un nuevo lavado fáctico de deuda– estaría, sin embargo, llegando hoy a su fin, por la cercanía a un “límite de riesgo” de la deuda intra-Estado, que expone particularmente al Banco Central y a la ANSeS desde el punto de vista financiero.

El discutible uso del criterio de Reservas de Libre Disponibilidad (RLD) del BCRA para prestarle fondos a la Tesorería,

(*) *La deuda pública nacional de la Argentina* (16-5-11), *Alerta amarilla sobre la deuda pública* (9-2-11) y *Deuda pública y presupuesto 2011* (12-1-11).

(**) *¿Un debilitamiento del Banco Central?* (11-5-11) y *¿Qué significa la deuda intra-estado?* (16-11-10); además de los escritos citados en el punto anterior.

que debilita la posición de divisas del banco y la cuestionable utilización de los recursos acumulados de la ANSeS con el mismo fin no sólo aumentan la exposición del sistema financiero público, sino que alterarían las prioridades en el destino de tales fondos: el respaldo de la base monetaria y la garantía de las obligaciones comerciales en moneda extranjera, en el primer caso, y el cumplimiento de las obligaciones legales de recomposición de los haberes jubilatorios en el segundo.

Proyecciones políticas inmediatas

Todo este mayúsculo “pateo para adelante” de vencimientos crecientes de la deuda pública (por capital e intereses) se da a costa del aumento de la deuda intra-Estado como una forma de cobertura transitoria que no sólo constituye un peligroso incremento de las obligaciones netas y no extinguibles del Fisco, sino que implica, a la vez, una nueva enorme operación de lavado de deuda en gran escala a través de la cual el Estado liquida y transfiere títulos de origen ilegítimo de manos privadas cargándolos a sus propias cuentas públicas, con el agravante de que tales nuevas obligaciones no tienen capacidad de pago demostrada.

Esta es la principal y “pesada herencia” que viene gestando el gobierno Fernández de Kirchner y que se supone espera sostener hasta las elecciones presidenciales de octubre, abriéndose así el grave interrogante –del que no se habla– sobre lo que deberá hacerse inmediatamente después de los comicios en esta materia.

Repitiendo una técnica que ya es de rigor en estos casos, el capital financiero maneja en la actualidad las crisis de deuda pública forzando que los ciclos de deuda coincidan cada vez más y en forma mejor calzada con los períodos de gobierno.

De esta manera se asegura que si la victoria electoral corresponde a las fuerzas políticas de oposición las mismas afrontarán en condiciones financieras totalmente débiles las futuras renegociaciones próximas, y si la victoria consagra la permanencia del gobierno de turno, el mismo tendrá que cumplir –de grado o por fuerza– los compromisos irrestrictos que ha asumido, porque no son ya herencia de ninguna administración anterior y porque, además, esos compromisos han sido tomados precisamente como condición o forma de asegurar su continuidad en el “poder”, un poder que deviene así en la práctica una parodia desde el punto de vista de las verdaderas decisiones de gobierno.



7-6-2011

3. La deuda pública no registrada

Entendemos por deuda no registrada aquélla que supone compromisos en firme para el Estado, esto es, obligaciones ya asumidas que deberán ser abonadas por el Fisco, aunque hoy no se tenga determinado su importe exacto.

El objeto de este trabajo es analizar el carácter y magnitud de este tipo de deuda que el Gobierno no muestra en sus informes contables ni estadísticos, pero que pesan fuertemente en sus compromisos de pago.

Deuda no registrada

Según la última información oficial disponible del Ministerio de Economía, la deuda pública total en cabeza del Estado Central es de 184.400 MD⁽²⁾ al 31-3-11.

(1) Ver GIULIANO, H., *El aumento de la deuda pública* (4-7-11), *La deuda pública nacional de la Argentina* (16-4-11) y *Alerta amarilla sobre la deuda pública* (9-2-11).

(2) MD significa millones de dólares, así como M\$ millones de pesos. En ambos casos las cifras se muestran siempre con redondeo, de modo que puede haber algunas diferencias mínimas entre totales y sumatoria de importes.

La cifra se integra por 173.100 MD de deuda *performing* o regularizada (por la que se pagan los intereses en término) y 11.300 MD de deuda no presentada a los canjes 2005-2010 (*holdouts*), que aproximadamente la mitad se encuentra en juicios contra el Estado.

Este total de deuda oficial no computa tres grandes rubros de deuda no registrada: 1. intereses que se capitalizan por anatocismo (intereses devengados y no pagados que se suman al capital y devengan nuevos intereses), 2. indexación de deudas en pesos que se ajustan o actualizan por inflación, y 3. proyección de pagos de los cupones vinculados al crecimiento del producto bruto (ULPBI-Unidades Ligadas al PBI), que se abonan anualmente –a fin de cada año– cuando se cumplen determinadas condiciones de aumento del PBI (básicamente, aumento superior al 3%).

Vamos a explicar brevemente de qué se trata cada uno de estos rubros:

1. Capitalización de intereses

No todos los intereses de la deuda pública que se le devengan al Estado se pagan como gasto público corriente dentro del presupuesto del ejercicio.

La gran mayoría de estos servicios efectivamente se abona pero una parte se capitaliza.

Cuando se pactó el megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 la tasa de interés promedio de la operación fue del 8,28%, pero no se informó el monto de los intereses a capitalizar durante los primeros 10 años, que daba entre 11 y 12.000 MD, de los que hoy 7.000 MD o más se habrían ya capitalizado, restando por lo tanto 4 o 5.000 MD.

Economía no informa anticipadamente ni proyecta este saldo pendiente de capitalización.

2. Ajuste por inflación

Una gran parte de la deuda en pesos –hoy equivalente a cerca de 38.000 MD (son algo más de 150.000 M\$)– se indexa aplicando el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia), un índice que replica la inflación minorista o IPC (Índice Precios Consumidor).

El Gobierno computa oficialmente una inflación del 10% anual (la del INDEC, no la inflación real).

Aplicando este índice al monto de la deuda indexable, tendríamos un aumento en la base de capital de casi 4.000 MD por año. Sin embargo, habida cuenta que hoy esa tasa de inflación es del 10% pero la devaluación del peso contra dólar es de un 5% (tipo de cambio retrasado frente a la inflación), la conversión o re-expresión de este importe en dólares da la mitad.

Suponiendo –con criterio muy benévolo– que se mantenga tal bajo ritmo de inflación durante la vida promedio de la deuda –que es de 11 años– y que la paridad cambiaria no varíe durante el mismo período (supuesto casi imposible), el aumento de este rubro de deuda indexada nos da un importe acumulado de 22.000 MD.

3. Unidades ligadas al PBI

El megacanje 2005 incorporó, entre otras innovaciones, el pago de un plus a los acreedores en función del crecimiento de la economía argentina, esto es, un pago anual en función del aumento del producto bruto (PBI).

Se estableció así que si el país crece a una tasa superior al 3% anual, el equivalente al 5% del excedente sobre ese incremento, en valor absoluto, se abonará distribuyéndolo entre los tenedores de bonos que entraron en el canje.

Para el cómputo de estas Unidades ligadas al PBI (ULPBI) se considera como año base el 2005 y el cálculo tiene carácter

(3) Ver LLORENS, J., *Al César lo que es del César o las formas proteicas de la deuda*, diciembre de 2011.

(4) A precio de cotización en Bolsa las ULPBI tienen hoy un valor de mercado de aproximadamente 11.000 MD.

acumulativo, de modo que los pagos se potencian con el transcurso del tiempo (30 años y/o tope del 48% sobre el valor total de los cupones emitidos).

Bajo la administración Kirchner se ha pagado así a los acreedores que entraron en el canje 2005 unos 4.600 MD: 380 MD en 2006, 820 en 2007, 1.420 en 2008 y 1.980 MD en 2008. En 2010 no hubo pagos por este concepto porque en el año anterior (que se toma como referencia) no se tuvo el crecimiento mínimo del 3% fijado como piso pero este año 2011 se estima que los pagos –que se realizan en diciembre– sumarían entre 2.500/2.800 y más de 3.000 MD.

En realidad, las erogaciones por este rubro son siempre mayores porque el Estado argentino está obligado a pagar el servicio anual de las ULPBI a los acreedores que aceptaron el Ccanje pero además está comprometido a rescatar otros títulos públicos con el importe no pagado a los tenedores que no entraron en la operación (los *holdouts*), de modo que las sumas totales erogadas fueron superiores a las consignadas: se estima 6.000 MD en lugar de 4.600.

JAVIER LLORENS, que ha estudiado específicamente este tema⁽³⁾ calcula que las ULPBI implicaban originariamente un monto de deuda total a pagar por concepto de ULPBI de 38.000 MD durante toda la vigencia de los cupones, de los que 6.000 se han abonado y falta pagar los 32.000 restantes⁽⁴⁾.

Total de deuda no registrada

Sobre la base de lo explicado tenemos entonces que por deuda no registrada existe un monto de aproximadamente 58.000 MD, producto de sumar 4.000 MD de intereses pendientes de capitalización más 22.000 MD de indexación de deudas en pesos ajustadas por inflación más 32.000 MD de cupones PBI.

Son casi 60.000 MD –puesto en términos realistas– que no aparecen en los informes oficiales ni en el correspondiente perfil de vencimientos de la deuda pública.

Si a la actual deuda declarada por el gobierno central –184.400 MD– se le suma este total de la deuda no registrada –los 58.000 MD estimados– tenemos que el total real de la deuda pública ronda hoy aproximadamente los 242.400 MD⁽⁵⁾.

El problema de la deuda contingente

La cuestión de la deuda no registrada se oculta a la opinión pública con la excusa de tratarse de deuda contingente.

En condiciones normales, el concepto de deuda contingente hace referencia a los juicios contra el Estado, donde se reclaman pasivos eventuales y difíciles de estimar por parte del Fisco.

Es el caso de la Argentina frente a las demandas internacionales presentadas en el CIADI –Tribunal Arbitral del Banco Mundial– y frente a los reclamos locales por mala liquidación de haberes jubilatorios; además de los adicionales por juicios externos de los tenedores de bonos que no entraron en los canjes 2005-2010 (los *holdouts*).

Originariamente las demandas ante el CIADI se estimaban en unos 20.000 MD que, por medio de sucesivos arreglos bilaterales del Gobierno, hoy se habrían reducido a la mitad.

Los juicios contra la ANSeS, en cambio, son crecientes y totalizan hoy más de 450.000 causas, cuyo importe de reclamos básicos superaría ya el equivalente a 10.000 MD.

Este tipo de deuda contingente por juicios contra el Estado no es informado por el gobierno ni está contemplado bajo ninguna forma dentro del *stock* de deuda pública pese a que la Ar-

(5) Esto es deuda sólo en cabeza del Estado Central: no están comprendidos en este total la deuda cuasi Fiscal del Banco Central (BCRA), la deuda consolidada de provincias y municipios, ni la deuda de empresas del Estado, organismos nacionales y fondos fiduciarios. Ni mucho menos las deudas contingentes por juicios contra el Estado.

(Continúa en la página siguiente abajo)

NOTAS

Premio Jérôme Lejeune a tres jueces

Como se relata en la reseña de los Congresos Nacionales de Filosofía del Derecho de Resistencia, Chaco, y en las Jornadas de Filosofía del Derecho de Tucumán, se ha otorgado a tres jueces, dos camaristas de Corrientes y uno de Salta, el Premio Jérôme Lejeune, por su defensa del derecho humano al respeto de la vida humana inocente y no nacida.



Correo de Lectores

“Estimado Profesor:

He leído con atención el Diario de Filosofía del Derecho, que ha tenido la gentileza de enviarme, y quisiera expresarle

mis felicitaciones, por la oportunidad de las temáticas y la calidad de los artículos...”.

Dr. JULIO ALVEAR TÉLLEZ

Profesor-Investigador de la Dirección de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo (Chile) y Director del Departamento de Ciencias del Derecho de dicha Facultad.

¿Cometió genocidio el general Julio Argentino Roca?

En la zona había unos 70.000 indios.

En la guerra murieron 1313 indios de lanza, es decir combatientes; 1271 indios combatientes fueron hechos prisioneros (no se peleó “a no hacer prisioneros”); 1049 fueron reducidos o sometidos voluntariamente.

Nada menos que 10.539 indios no combatientes fueron hechos prisioneros (el objetivo era sólo militar y evitar los malos, las muertes y el robo de ganado explotado trascordillera).

Murió sólo el 0,45% de la población total (no hubo exterminio de un pueblo).

55.000 –esto es, la gran mayoría de la población– logró escapar cruzando el Río Negro (y se la dejó escapar).

(Fuente: DÍAZ ARAUJO, ENRIQUE, *Propiedad indígena [glosas críticas]*, Universidad Católica de La Plata, Colección “Al quite”, 2009, 112 págs. [pág. 64 con cita de CUEVAS, RUBÉN, *La mala historia*, en *Archivos de política y desarrollo*, 18-9-09]).



NOTICIAS. JORNADAS. CONGRESOS



Tercer Congreso Nacional de Filosofía del Derecho, Política y Bioética. Resistencia, Chaco

Organizado por la Asociación San Fernando del Río Negro, con auspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Noreste (UNNE), de la Cátedra de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la misma universidad que integra el Dr. Pedro Braillard Pocard, vicedegobernador de Corrientes y organización académica de la Universidad FASTA de Mar del Plata, tuvo lugar en la ciudad de Resistencia, Chaco, del 1 al 4 de septiembre de 2011 en los salones facilitados por la Facultad de Ciencias Económicas y de Humanidades UNNE Resistencia. Es de destacar la colaboración de la Fundación Banco de la Nación Argentina, del Nuevo Banco del Chaco, de la Lotería Chaqueña, de la Librería ConTexto y de la Comisión Justicia y Paz de la Arquidiócesis.

Bioética

Tuvo iniciación el viernes 2 en la espléndida Aula Magna de la Facultad de Ciencias Económicas, que lucía, como toda la Universidad, con un llamativo decoro y limpieza, con el Himno Nacional argentino. Luego se escuchó a la eficiente organizadora abogada Ilda Dellamea, enseguida la Secretaria del Congreso Mónica Averó, de Entre Ríos, dio lectura a las palabras de la vicedecana de Derecho de FASTA Paula Giaccaglia, y vino la Misa a cargo del Arzobispo Monseñor Fabriciano Sigampa, con sermón alusivo. Enseguida fue el primer plenario, dedicado a Bioética, bajo la presidencia del abogado Eduardo Olazábal (Universidad Católica de Cuyo, San Juan), en el que disertó en primer lugar el profesor Siro De Martini (UCA y Comité de Ética de la Academia Nacional de Medicina), quien demostró que la llamada “perspectiva de género” es una ideología que, como tal, pretende imponer, mediante penetración cultural, el cambio de los paradigmas dictados por la naturaleza o la experiencia, que son tenidos como válidos y legítimos por la sociedad. Destacó que en la promulgación de la ley del pseudo matrimonio de personas del mismo sexo, la Presidente confirmó la pertenencia de la novedad al cambio ideológico al señalar: “No hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social, transversal, diversa y amplia” [v. Boletín de Bioderecho, con las palabras de un vocero autorizado: “Meterse con el matrimonio porque era, justamente, lo que provocaría un profundo cambio cultural”]. Esta ideología es una vertiente del “feminismo radical” de raíz marxista, y sus objeti-

vos van mucho más allá que la legalización de las uniones entre homosexuales. La misma realidad biológica es suplantada por “construcciones semánticas, sociales o culturales”, con el fin de terminar con las opresiones patriarcales que representan la maternidad, la fecundidad y la familia. Para lograr su objetivo, el primer paso es la construcción de un cierto consenso sobre la indiferenciación sexual del ser humano. Esta construcción, si es ley, puede imponerse a toda la sociedad con los consiguientes daños a la familia, a la identidad de los hijos, al futuro de la Patria y a la moralidad pública.

Luego de algunas agudas objeciones del profesor sanjuanino que presidía el panel y las proporcionadas respuestas del orador, el P. Dr. Pedro Chiesa expuso *Que el hombre no una lo que Dios ha separado. Reflexiones a propósito del pseudo matrimonio igualitario*, esmerándose en distinguir en este asunto la terminología, para no confundir homosexualismo, sodomía y estilo gay, categorías no equiparables, y para salvar la posibilidad de las terapias de corrección de la enfermedad o vicio en que suele consistir la homosexualidad. Destacó el fervor con que en Norteamérica los grupos Provida pelean en favor del verdadero matrimonio y obtienen resultados. Tras la intervención del presidente del plenario y las respuestas se generó el diálogo.

Más bioética

Como “Jueves de Vísperas del Congreso”, el día anterior había disertado el mismo P. Chiesa (su título ya dice mucho: *¡No matarás! Algunas reflexiones sobre los proyectos de ley que aprueban la fecundación in vitro*) exponiendo que la exigencia del orden natural que impide separar el fin unitivo del procreativo entre los sexos no alude sólo a un *deber ser moral* sino a una auténtica realidad de ser, pues en las fecundaciones artificiales queda tan mediatizada la causación eficiente de los padres (causa eficiente = “lo que primariamente produce el movimiento”) que es cuestionable que se trate de verdaderos y completos y totales padres (aparte la intervención de Dios en la infusión del alma), cuando la unión de los gametos es hecha en un laboratorio por un médico. Tanto que para el día del Padre, y no sin bastante razón, una revista graficó con la foto de muchos chicos nacidos artificialmente rodeando al médico Dr. Pascualini, dedicado al asunto, de lo que resultaba un oscurecimiento de aquella propia paternidad en sus clientes que acudieron a él para su tarea tan costosa (económicamente \$ 30.000, pero que además implica la exponencial mortandad de personas humanas embriones). La

recta moral no rechaza las terapias o intervenciones que *ayuden* al acto sexual, *pero rechaza las que lo sustituyen*. El orador, buen maestro, ilustró con múltiples ejemplos las diferencias.

¡Jueces que aplican la ley!

En el marco del Congreso la institución organizadora instituyó el premio Jérôme Lejeune y lo adjudicó en esta primera ocasión a los jueces de Cámara de Corrientes María Eugenia Sierra de Deseimoni y Carlos Benítez Meabe, que aplicando el principio “no dañar a otro”, contenido en el artículo 19 de la Constitución, rechazaron una demanda que pretendía obligar a una obra social a costear las fecundaciones artificiales que provocan muerte sin fin de personas inocentes (El fallo fue comentado en ED, 243-77 por SILVIA MARRAMA bajo el título *Dos campanas que retienen: alterum non laedere*). Es de destacar que el fallo *sostiene que hay legislación argentina en el tema*, precisamente no dañar, no matar.

En la misma materia (Bioética) hubo ponencias de Yessica Vanina Vilchez Yacante, de la UCCuyo-San Juan sobre la problemática antropológica de los casos de hermanos siameses titulada *Somos dos*; de Guadalupe Becerra (UCC) sobre *Eutanasia y limitación de los esfuerzos terapéuticos. Suicidio asistido. Encarnizamiento terapéutico*; de Verónica Vilchez: *Comienzo de la existencia de la persona física*, y del abogado Carlos Alberto Dansey sobre el *Homomonio* (Otros trabajos del porqué puede ser mal interpretado) meritorio multiponente correntino fueron en Filosofía del Derecho sobre la justicia y la protección de la vivienda familiar, *La impudosa práctica del Derecho - Protección de la vivienda familiar* y sobre el derecho de defensa: *Restricción al derecho de defensa impuesto por una tendencia ideológica*. Y de Anabel Escudero, de la UCC, San Luis, sobre *Comienzo de la persona, embriones, congelamiento o eliminación*.

Tesis doctorales y libros

En la misma materia y en la comisión respectiva, presidida por De Martini, la profesora de la Universidad Autónoma de Entre Ríos Silvia Marrama, doctora en Bioética por la UCA, sintetizó precisamente su tesis dirigida por el Dr. Eduardo Quintana intitulada *La fecundación artificial extracorpórea en el derecho argentino*, en la que sostiene que estas técnicas se encuentra implícitamente prohibidas en el ordenamiento jurídico argentino, pero es necesaria y prudente su prohibición normativa expresa. Presentó por su parte ponencia sosteniendo que es ineficaz e insuficien-

gentina tiene muy mala experiencia histórica con la “bola de nieve” de estos pasivos, que son eventuales aunque de cumplimiento casi seguro en el tiempo.

Pero hoy aparece además otro tipo de deuda contingente que tampoco es computada y que son los pasivos por deuda no registrada que acabamos de ver, esencialmente en lo que hace a los conceptos de indexaciones de deuda y pagos por ULPBI, porque la capitalización de intereses sí es cuantificable.

El Ministerio de Economía omite proyectar los importes de la deuda en pesos indexada e igualmente no muestra las previsiones de pago por los cupones ligados al PBI porque considera estas obligaciones como deuda contingente (específicamente a las ULPBI), lo que da la falsa idea de que estamos frente a compromisos de pago eventuales y no en firme; pero esta calificación es engañosa porque la realidad es que estamos frente a obligaciones concretas aunque su monto no pueda determinarse hoy en forma exacta.

Son importes que, en algún momento, tienen inexorablemente que “blanquearse” y pagarse a medida que transcurre el tiempo y cuyas magnitudes aproximadas pueden ser estimadas, tal como se expone en el presente trabajo.

La omisión de tal información es grave en sí misma y lo es además porque los pagos por estos conceptos (especialmente las ULPBI) se están realizando hoy –ejercicios 2010 y 2011– con los denominados Fondos de Desendeudamiento Público integrados con reservas internacionales del Banco Central (BCRA).

Se trata, en todos los casos, de montos de deuda muy relevantes pero que no aparecen registrados, no se muestran en las estadísticas y no se contemplan dentro del perfil de vencimientos de la deuda pública.

La trampa del megacanje 2005

Una característica común a los tres rubros de la deuda no registrada que hemos visto –y que resulta muy importante destacar– es que no son producto de una “herencia recibida” sino una “creación” de la administración Kirchner.

El megacanje Kirchner-Lavagna de 2005 fue presentado como un “éxito” de negociación que permitió al país reducir sustancialmente el monto de su deuda pública; pero esto no es correcto.

Con base en la Propuesta de Dubai del 2003, el gobierno argentino ofreció para el canje bonos elegibles por valor de 81.800 MD, de los que los acreedores aceptaron 62.300, esto es, el 76%.

Contra este rescate de bonos (62.300) el gobierno emitió nuevos títulos por valor de 35.300: 15.000 MD en bonos par, 12.000 MD en bonos con descuento y 8.300 en bonos cuasi-Par.

Es decir que la quita en valor absoluto que obtuvo el gobierno fue de 27.000 MD (62.300 - 35.300): un 43.3% (no el 65.6% que adujo el Ministerio de Economía).

Estos importes tuvieron luego algunos ajustes menores de cifras pero ello no cambia las relaciones de base.


En síntesis: el gobierno ofreció canjear 82.000 MD, aceptaron 62.000 y emitió nueva deuda por 35.000, obteniendo así una quita aparente de 27.000 MD.

Decimos que esta disminución es aparente porque el gobierno, con el megacanje 2005, omitió informar que a la vez que colocaba los nuevos bonos por 35.300 MD estaba comprometiendo además esos otros tres rubros de deuda que no eran mostrados pero pesaban también como obligaciones ciertas: 11.000 MD de intereses a capitalizar en el decenio 2005-2014 (7.000 ya capitalizados y 4.000 restantes), 41.000 MD de deuda en pesos ajustada por inflación (19.000 millones ya incorporados por indexación al *stock* de deuda y 22.000 proyectados

como ajustes futuros pendientes) y 38.000 MD por Unidades ligadas al PBI (como dijimos, 6.000 millones ya pagados y 32.000 faltantes a pagar). En total: unos 90.000 MD más de deuda a esa fecha (junio de 2005), que fueron directamente soslayados en la información oficial.

De modo que las cifras completas, tomadas a valores constantes, daban en realidad que contra el ahorro de 27.000 MD exhibido con el megacanje 2005 la administración Kirchner estaba aceptando pagar a futuro –además de los 35.300 de nuevos bonos (más sus servicios de intereses)– todo un paquete adicional por este consolidado de deuda no registrada, que entonces representaba estimativamente esos 90.000 MD citados (63.000 MD por encima de la quita obtenida) y que hoy, habiendo incorporado gran parte de las actualizaciones pactadas, implica todavía pagos estimados por unos 58.000 MD, derivados siempre de dicha reestructuración de deuda del 2005.

Aunque las cifras, por lógica, no puedan determinarse en forma exacta, sí pueden serlo estimativamente, con el objeto de tener una idea tentativa del monto de las operaciones financieras realizadas por la actual administración en materia de deuda y de la consiguiente magnitud de su impacto en la Hacienda pública.

Con el agravante que de esta manera, cuando el gobierno Fernández de Kirchner oculta mostrar y/o informar la deuda no Registrada, a la vez que soslaya la verdadera gravedad del cuadro de situación del endeudamiento público, está escondiendo “su propia deuda”. 31.7.2011. 

Lic. HÉCTOR L. GIULIANO

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - ECONOMÍA - ESTADO - PODER EJECUTIVO - DERECHO POLÍTICO - IMPUESTOS

te prohibir legalmente sólo el congelamiento de embriones producidos mediante estas técnicas, sin prohibir al mismo tiempo esas técnicas mismas, en las que se congela a la gente a 196 grados (los embriones son “gente”); se descongela a personitas de 8 células (¿o no son personas ya las que entonces se componen de escasas 8 celulitas?); se las masaca en un 25% (porque se les sacan dos células para ver si son viables y si aguantarán vivir a pesar de esa agresión) y a un número infinitamente mayor que los que nacen se los manda a morir.

Otra tesis, que se presentó en la comisión de Política, fue la del P. Chiesa defendida en la Universidad Nacional de Córdoba con gran éxito: *El derecho a la protección constitucional de las opciones matrimoniales definitivas* (está ya el libro publicado con ese nombre). Se trata, como insinuaron sus presentantes Tale (tutor de la tesis) y Hernández, de una especie de enciclopedia de consulta obligada en el tema de la legislación argentina sobre el matrimonio y el divorcio que no es divorcio sino repudio, con grave detrimento del inocente y de los hijos inocentes y la sociedad, lo que hace necesario pensar en que el Estado reconozca y proteja al verdadero matrimonio indisoluble de quien quiera contraerlo de ese modo (ésta es la tesis propiamente dicha).

Como una ponencia en el ámbito de la Filosofía del Derecho, Héctor H. Hernández expuso *Les cuento un nuevo libro: garantismo abolicionista y solidarismo penal*, volumen de próxima aparición, en que expone las raíces del abolicionismo que está en la base de la actual impunidad e inseguridad que tanto aquejan a los argentinos, encontrando en lo que llama “garantismo abolicionista” la principal causa de aquéllas.

En el plenario de Política, RICARDO BACH DE CHAZAL sintetizó y defendió su nuevo libro *Confesionalidad del Estado y libertad religiosa en la legislación argentina* (Universidad Católica de La Plata, 2011), que sostiene que el art. 2º, conforme a los criterios normales de la interpretación jurídica (contexto, fuentes, debates previos, legislaciones anteriores, coetáneas y posteriores y sus interpretaciones, los pactos preexistentes, las reformas constitucionales, historia y sociología), sumado a las razones teológico-filosóficas que luego aportaría Roldán, *implica un sostenimiento moral del catolicismo como principio constitucional argentino* que no puede ser violado so pena de inconstitucionalidad por conductas o normas. Y, en todo caso, como quedó claro en el debate, *estas razones imponen a fortiori que sea un absurdo jurídico el hecho* —que se destacó en el debate y en otras intervenciones— *de que la única religión perseguida en la historia y presente argentinos sea la Católica*.

Y en el plenario, al que se aludirá más adelante, se hizo presentación del libro de AA.VV., *Fines de la pena. Abolicionismo. Impunidad*, de Camilo Tale, Héctor Hernández (director), Gerardo Bonastre, Ricardo Dip, Siro De Martini (Cathedra, 2010).

Economía

En este plenario disertó el viernes 2 a las 19.30 horas el Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Mario Meneghini, de Córdoba, autor de *La política, obli-*

gación moral del cristiano, para referirse a *Doctrina Social de la Iglesia y orden económico*, puntualizando la subordinación de la economía a la política y a la moral, y la entidad propia de dicha Doctrina, equidistante de socialismos y liberalismos, de “mercadismos” y “estatismos”.

En las consuetas objeciones y respuestas se debatió sobre los fines de la economía e implícitamente sobre su entidad epistémica. Por un lado, se dijo que los principios de la economía son “satisfacción de las necesidades”—“reciprocidad en los cambios” (la tesis del “primer Meinvielle” en *Concepción católica de la economía*) sin que merezca entidad de principio económico-fuerte (y moral, siendo la economía esencialmente moral) la ley de la oferta y la demanda; por el otro, se defendió a esta última en aquel lugar (el “segundo Meinvielle”, de *Conceptos fundamentales de la economía*).

Expuso enseguida el licenciado Héctor Giuliano sobre *Claves económico-financieras de la doctrina social católica*. Identificó y desarrolló las ideas-eje diferenciales de la DSI fundadas en la tríada 1) *justo precio*, que implica un mecanismo de formación de precios del *mercado*, 2) *Salario digno*, que conlleva el conjunto de relaciones con el *trabajo* y 3) condena de la *usura*, a través de la cual se replantea la cuestión del interés y la naturaleza del *dinero*. Se analizaron también los problemas *actuales* de *economía y finanzas* a la luz de los principios del *bien común*, la *justicia social* y la idea de *economía al servicio del hombre*. Preguntado en su carácter de máximo especialista argentino en el tema de la deuda externa argentina, respondió que la Argentina (contra lo que se informa oficialmente) sigue aumentando su deuda al pagar 9.000 millones de dólares al año por intereses y recapitalizando por anatocismo 1.500 millones, con lo cual vivimos en manos de la usura, para lo cual viene a cuento recordar que precisamente el mecanismo usurario (que más que atacar la propiedad, ataca la vida, como decía San Alfonso María de Ligorio) busca la dependencia perpetua del deudor. El equilibrio del que se informa oficialmente desde el gobierno es ficticio, pues se logra a expensas de la apropiación de los fondos de los jubilados y de las reservas, entre otros.

Lamentablemente, no pudo viajar Ricardo von Büren, profesor de FD en Tucumán, UNSTA y Universidad Nacional, que iba a disertar sobre los fines de la Doctrina Social de la Iglesia, anticipando su tesis como Magister en la materia, cuya síntesis nos hizo llegar: “Si el fin mueve al agente, determinar cuál es el propósito del Autor de la DSI (el Magisterio), al formularla es asunto decisivo. No hay un sólo fin de la DSI, sino una pluralidad reducible a tres: fin objetivo (*qui*): ‘la instauración en Cristo del orden temporal’ (o Realeza Social de Cristo); fin formal (*quo*): la ‘edificación de la Civilización del Amor’ (o Cristiandad) y subjetivo (*cui*): la ‘promoción integral de la persona humana’ (o Humanismo Cristiano)”.

Filosofía del derecho

Tras el funcionamiento de las comisiones en las que se presentaban las ponencias, tuvo lugar en la mañana del sábado 3 de septiembre el plenario respectivo presidido por Hugo Yanzon, titular de filosofía del Derecho en la UCCu-

yo San Juan, en el que hablaron sobre *Filosofía del derecho y literatura: el talón de Aquiles del relativismo jurídico*, el abogado Félix Adolfo Lamas (hijo), profesor en la UCA Buenos Aires y en el FORES, quien demostró que en el contexto de crisis en el que se encuentra la Filosofía del Derecho, la literatura clásica puede ser una salvaguarda de los principios y fundamentos de validez del derecho para la discusión y la enseñanza universitaria. Con ese fin, usando ejemplos de Hesíodo, Sófocles y Shakespeare, sugirió una forma de abordaje de las obras literarias, que hace retroceder toda indiferencia, oposición, apatía o el habitual relativismo que se ensaya ante la fuerza evidente de la realidad de la justicia.

Luego el abogado Marcos Díaz Metz, del Centro de Estudios Universitarios del Rosario, expuso sobre *Filosofía del derecho y derecho procesal civil: Verdad y proceso*. Fue una síntesis de la ponencia, expuesta más extensamente en comisión, donde hizo mención y un breve desarrollo de las dos corrientes procesales que rigen en la actualidad, llamadas activismo y garantismo procesal, destacando el relativismo ético y gnoseológico que predomina en este último, cuya figura principal parece ser el profesor rosarino Alvarado Velloso, y sentando finalmente algunos presupuestos metodológicos para abordar el tema de la verdad en el proceso civil, presupuesto de suma relevancia para justificar el fin del mismo, esto es la justicia. Refutó la afirmación de que los jueces deben fallar sólo en basados en una verdad “formal” y no real, refutando dicha diada.

Cabe consignar que en la comisión de filosofía del derecho, Mariana Mira Moreno y Sofía Robles Nava, de la UCCuyo San Juan, expusieron sobre *Una concepción filosófica explícita en el nuevo código procesal civil de la provincia de San Juan*, que insinuaría un claro sentido solidarista, entablándose entonces un fructífero diálogo al respecto con la ponencia del abogado del CEUR.

Continuando con el plenario, Héctor H. Hernández (autor del libro *Derecho subjetivo. Derechos humanos. Doctrina solidarista*, editado por Abeledo-Perrot), expuso sobre *¿Los derechos humanos son para todos? —Algunos esclarecimientos*. Tras mostrar la tesis de que se llaman “derechos humanos” sólo a los que registran como deudor al Estado y criticarla, y distinguir luego la palabra, la cosa, las doctrinas, los movimientos (y en el debate agregó: los conocidos intereses crematísticos) en materia de derechos humanos, distinguió la posición individualista propia de la Revolución Francesa, y una solidarista y encarnada, y terminó glossando lo que llamó “La declaración argentina de los derechos humanos”, contenida en el *Martín Fierro* (“debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos”, conceptos que analizó con alusiones permanentes a la realidad).

El profesor Yanzón, que presidió una delegación de su Universidad que debió viajar 26 horas en micro desde San Juan, bien llamada “San Juan de la Frontera”, tuvo una exposición en esta sección del congreso sobre *Familia natural y ley jurídica*, en que aludió al pseudo matrimonio de personas del mismo sexo y a los fundamentos de derecho natural primario negados en él. Porque la primera y fundamental comunidad humana, institución jurídica y política de derecho natural, es la familia fundada en el matrimonio como estable consorcio de vida en común entre un hombre y una mujer, abierto a la generación y perfección de la vida humana, que no puede ser equiparado a la unión entre personas del mismo sexo. La llamada ley 26.618 incumple el deber de proteger el matrimonio legítimo, por lo que no es ley y el ejercicio constitucional del derecho a la objeción de conciencia. María Delia Trofelli y María Vanesa Illa, de la Universidad de la Cuenca del Plata expusieron sobre: *Algunas cuestiones en torno al juez como objetor de conciencia*, ponencia que tuvo el mérito de suscitar un interesantísimo debate. Hugo Marcelo Bianchi, UNNE, Chaco, habló sobre Derechos humanos con una ponencia titulada: *Los Derechos Humanos como Derechos Fundamentales*. Kevin Iván Vanioff, de la UNNE, expuso sobre *Iuspositivismo o iusnaturalismo*, según las ideas del profesor Benjamín y se leyó una ponencia de Rosalía Zozzoli, del Poder Judicial del Chaco, sobre *Dimensión moral de la pena en el derecho de menores*.

Filosofía del derecho y derecho penal

En el plenario del día sábado 3 por la tarde expuso el Juez de la Corte de San Juan y profesor de Derecho Penal Parte General UCC San Juan, Dr. Juan Carlos Caballero Vidal sobre *Fundamento y principios del Derecho Penal*. Luego hizo presentación del libro ya citado *Fines de la pe-*



En el plenario de filosofía del derecho penal expone el Dr. Juan Carlos Caballero Vidal

na. *Abolicionismo. Impunidad*, defendiendo que él no conocía, ni en el país ni fuera de él, un libro de tal valía en el tratamiento de esa temática.

Seguidamente el profesor Camilo Tale, coautor de dicho libro y profesor de la Universidad Católica de Cuyo y de la Universidad Nacional de Córdoba, expuso sobre *Fines de la pena y doctrinas penales actuales*, sintetizando su conocida exposición de los distintos males que irroga el delito y los consiguientes legítimos y plurales fines de la pena jurídica. Como estaba previsto, inició las objeciones el rosarino Díaz Metz, respondiendo larga, brillante y analíticamente el disertante.

En la comisión de filosofía del derecho se registró otro aporte sobre filosofía del derecho penal, a cargo de Sebastián Sánchez Di Gennaro, de la UCCuyo San Luis y de la Cátedra Abierta Carlos Alberto Sacheri, sobre *En busca de la pena perdida: La pena en Santo Tomás de Aquino*.

Política


En el plenario respectivo, presidido por quien fue a la vez Presidente del Congreso, Dr. Hernández (FASTA Mar del Plata) y que tuvo lugar el 3 de septiembre, como ya dijimos, Bach de Chazal defendió con la mejor doctrina y su minuciosa exégesis la confesionalidad del Estado argentino como principio del derecho público constitucional argentino dirimente de la legitimidad de toda norma infraconstitucional y pacticia, y expuso luego Carlos Gabriel Arnossi (de las cátedras de Filosofía del Derecho y de Derechos Humanos de la UCA Buenos Aires) sobre *Laicidad y Cristiandad en Pío XII*. Su tesis –probada con la lectura de numerosos pronunciamientos del Magisterio de dicho Papa– fue que, a la luz del famoso discurso de Eugenio Pacelli a los *marcheggiani* –tan citado como no leído– cabe concluir que la llamada “legítima, sana laicidad del Estado”, que no es otra cosa que la condición del mismo como sociedad perfecta, no implica el rechazo de la Cristiandad, esto es de su información por el Cristianismo, ideal imperioso defendido por la encíclica *Quas Primas*, el Concilio Vaticano II en múltiples pasajes (“ordenar según Dios los asuntos temporales”), y el canon 2.105 del Catecismo de la Iglesia Católica. Nada más actual.

Seguidamente disertó Luis Roldán (Derecho Constitucional UCA Buenos Aires y Universidad de La Matanza) sobre *Religión, Iglesia y Estado*. Con la ayuda de variadas ejemplificaciones históricas, demostró la tesis de que todo Estado tiene una ortodoxia pública, y si rechaza una la tendrá otra, cosa que sucedió en Roma, que no se opuso a la libertad religiosa de los cristianos sino a su pretensión de ser la única religión verdadera y no rendir culto al *Ara Pacis* y a la religión romana; en Estados Unidos, donde hay una especie de religión democrática; o en Francia, donde se considera públicamente (Sarkozy) que el laicismo es una religión. De ahí que, supuesta la verdad del Cristianismo, el ideal como tesis, es la Cristiandad. Otra cosa es la solución a arribar en cada caso concreto, aludida como “hipótesis”, pero destacando que la tesis tiene presencia permanente en la hipótesis. Si la Cristiandad perfecta está muy lejos –surgió del debate–, en esta situación de “hipótesis” el ideal de la tesis manda defender aquí y ahora, por razones teológicas, el art. 2º de la CN con el sentido integral que defiende Bach de Chazal por razones estrictamente jurídico-constitucionales positivas. El orador refutó largamente los errores de JACQUES MARITAIN en este punto, centrándolos en dos aspectos: uno el error histórico de hacer de la Cristiandad, que se caracterizó por una lucha permanente entre el poder político y religioso, el reino del *clericalismo*, abonando que “cristiandad” no implica aquello. El otro, la concepción de su filosofía de la política, que deteriora la noción auténtica y plenaria del bien común y la dignidad propia del Estado.

En la comisión de Política disertó Carlos Arnossi sobre *Crímenes de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, ¿son la misma cosa?*; y presentaron ponencias María Silvana Clérici y María Lucrecia García (INT-UCC San Luis) sobre *Entre el orgullo y el estigma (Sobre los cristianos y la política)*; Sebastián Sánchez Di Gennaro sobre *El comunismo y refutación de algunas de sus tesis según Charles Mc Fadden*; y Mario Meneghini sobre *Dilema: Derecho de resistencia o acción política*.

Tras la misa celebrada por el P. Pedro Chiesa cerró el Congreso el profesor Siro De Martini, quien expresó con sabiduría que no es conveniente dejarnos cautivar por el

mal y que debemos estar agradecidos a Dios por habernos puesto en esta época tan difícil, dándonos así la oportunidad de poder luchar por Él y por su causa. Se entonó como himno final la Marcha de Malvinas.

De este modo se ha dado auspiciosa continuidad a esta expresión de una verdadera escuela argentina de filosofía del derecho, según el orden natural y cristiano, de las que esta línea no ejerce de ninguna manera el monopolio, pues hay otras pujantes expresiones del iusnaturalismo tomista en la Argentina. Es hora de recordar que estos congresos empezaron bajo la iniciativa y el empuje de la Dra. Marta Hanna con las Primeras Jornadas Puntanas de Derecho Natural y Bioética, San Luis, 1999, transformadas en nacionales en las jornadas de 2001 en la misma ciudad bajo la organización de Camilo Tale. Fueron continuadas, con el agregado de primeras jornadas nacionales de filosofía del derecho en San Luis en 2003, desarrolladas en la UCA Paraná en 2005, en San Luis en 2007, San Juan 2009, hasta llegar al Congreso que reseñamos. Integrados a esta red institucional y como nacidos de ella, han de mencionarse los cinco Congresos argentinos de jóvenes, organizados por la UFASTA, Mar del Plata, en 2002, 2004, 2006, 2008 y 2010. Hasta ahora 14 realizaciones anuales ininterrumpidas y muy fecundas, de las que estas páginas siempre se han hecho eco. 

DFD

Sociedad Tomista Argentina

XXXVI Semana Tomista - Congreso Internacional, Buenos Aires

Intérpretes del pensamiento de Santo Tomás

Del 5 al 9 de septiembre de 2011, en la sede de la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, se desarrolló la XXXVI Semana Tomista.

Los expositores fueron: S. E. R. Mons. Pedro D. Martínez (Santo Tomás de Aquino *divinitus revelabilia* y Juan de Santo Tomás), Héctor H. Hernández (*Cristo, ¿manda o no manda? - El segundo Maritain político y el neomaritainismo*), Leo J. Elders (*Cayetano, Comentarista de la Suma de Teología de Santo Tomás*), Sandra Brandi de Portorrico (*Richard Hooker: ¿un tomista anglicano?*), Ignacio E. M. Anderreggen (*El Concilio Vaticano II y el Tomismo*), Gustavo E. Ponferrada (*Derisi, Tomismo y Modernidad*), Santiago Argüello (*Chesterton: comprensión de algunos modos contemporáneos de ser tomista*), Haydée M. Wimmers (*Santo Tomás y el potencial expresivo de nuestro lenguaje*), María E. Schell (*¿Criticó Santo Tomás a San Agustín? Ch. Boyer y E. Gilson*), Oscar Beltrán (*Charles De Koninck y la epistemología de Santo Tomás de Aquino*), Juan J. Sanguinetti (*Santo Tomás y el pensamiento moderno según Cornelio Fabro*), Hugo Verdera (*El tomismo esencial y criollo del Padre Castellani*), Ángela García de Bertolacci (*Persona y subjetividad en la Antropología de Antonio Millán-Puelles*), Jean-Paul Martínez Zepeda (*Persona humana y bien común: Juan Pablo II y Tomás de Aquino*), Alberto R. Althaus (*La teoría como fin de la ciudad en Antonio Millán-Puelles*), Nereida Brumat Decker (*Juan Pablo II receptor de Santo Tomás*), Ma. de los Ángeles González (*Dios y el misterio del mal. Santo Tomás y Cornelio Fabro*), Eugenio Yáñez Rojas (*Santo Tomás de Aquino como modelo del filósofo cristiano según Maritain*), Guillermo A. Juárez (*La doctrina tomasiana sobre el deseo natural de ver a Dios según Domingo M. Basso*), María C. Donadio Maggi de Gandolfi (*La Nueva Escuela del Derecho Natural*), María L. Lukac de Stier (*La Antropología Tomista de Guillermo Blanco*), Horacio Sánchez de Loria Parodi (*El pensamiento político de Fray Mamerito Esquiú*), Zelmira Seligmann (*La psicología de Rudolf Allers y el Tomismo*), Ana A. Espósito (*Avelino M. Quintas: su análisis del bien común*), Ma. del Carmen Fernández (*De la oscuridad e inagotabilidad de las cosas en Josef Pieper*), Ceferino P. Muñoz (*Los Comentarios de Cayetano: ¿continuidad o divergencia con la doctrina de Santo Tomás?*), Fernando A. Bermúdez (*El concepto tomista del derecho en la interpretación de Juan Alfredo Casaubon*), Marcos R. González (*Grandes Comentaristas de S. Tomás de Aquino. Caminos hacia la Luz*), Carlos I. Massini Correas (*Sobre el concepto de derecho. De Tomás de Aquino a Guido Soaje Ramos*), José L. Widow Lira (*La desconsideración de la metafísica según algunos teólogos morales contemporáneos*), Wilmar J. Medina

Lozano-Liliana B. Irizar (*Santo Tomás, Lawrence Dewan y el vínculo indisociable entre “forma y ser”*), Laura Daus-Hermes Puyau (*Santo Tomás y el cogito cartesiano*), Rafael Cúnsulo (*Dinámica del libre albedrío en el comentario de Fabro*), Silvio P. Pestalardo (*La equidad en Santo Tomás de Aquino según Abelardo Rossi*), Marisa Mosto-Alberto Berro (*Emilio Komar y su lectura de Santo Tomás*), Pablo C. Sicouly (*Ciencia teológica e “intellectus fidei” en la lectura de Gottlieb Söhngen, maestro de J. Ratzinger*), Germán Masserdotti (*Carlos Alberto Sacheri y el orden social-político*), José I. Ferro Terrén (*Reginald Garrigou-Lagrange y la Ascética y Mística en Santo Tomás*).


También se recibieron contribuciones de Álvaro Ch. Brantes Hidalgo (*Una Tesis Tomista en la obra “La Vida es Sueño” de Calderón de la Barca*), Fernando Moreno Valencia (*Santo Tomás de Aquino y nuestro tiempo*), Guillermo Romero (*La Cristiandad en Santo Tomás y en Julio Menvielle*), Faustino Ruiz Cerezo (*Santo Tomás de Aquino versus A. Gálvez Morillas: existencia de un problema*), Amadeo J. Tonello (*Ley natural e inclinaciones naturales en Jacques Maritain*).

La semana finalizó con la celebración de la santa misa y las disertaciones se podrán consultar en el sitio web de la Sociedad Tomista: www.sta.org.ar.

I Jornada “Pensadores, Poetas y Escritores de Nuestra Tierra Criolla”: Homenaje al Padre Leonardo Castellani a treinta años de su partida (1981-2011)

En el Pabellón de las Bellas Artes de la Pontificia Universidad Católica Argentina (Av. Alicia Moreau de Justo 1300, Buenos Aires), con el auspicio de la Sociedad Tomista Argentina, el Centro de Estudios Folklóricos ‘Dr. Augusto Raúl Cortazar’ (CEFARC, UCA) y el Programa de Investigación Geográfico Político Patagónico (UCA), tuvo lugar durante los días jueves 13 y viernes 14 de octubre la I Jornada ‘Pensadores, Poetas y Escritores de Nuestra Tierra Criolla’: *Homenaje al Padre Leonardo Castellani a treinta años de su partida (1981-2011)*.

La apertura estuvo a cargo de la Directora del CEFARC, Dra. Olga Fernández Latour de Botas. Posteriormente, hablaron Sebastián Randle (*¿Quién era Leonardo Castellani? Aproximación a un personaje difícil*), Jorge Norberto Ferro (*Castellani y la novela policial*), Iván Marcos Pelicarić (*Martín Fierro y Leonardo Castellani*), Mons. Gustavo Eloy Ponferrada (*Mis recuerdos del Padre Castellani*). El primer día culminó con un cierre musical a cargo de Christian Díaz y de Alejandra Cruz: intérpretes del Canto Surero Tradicional.

El viernes 14 de octubre expusieron Juan Luis Gallardo (*Castellani periodista*), Franco Ricoveri (*Castellani: su itinerario filosófico*), el R. P. Alfredo Saénz S. J. (*Castellani y su visión sobre el fin de los tiempos*) y Hugo Verdera (*Castellani, lectura imprescindible hoy*). Se anuncia que las conferencias estarán disponibles por Internet. 

Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires” Facultad de Derecho Doctorado en Ciencias Jurídicas

XIV Jornadas Abiertas de Profundización y Discusión sobre el tema: Nihilismo contemporáneo, Derecho y Dialéctica. La razón humana frente al abismo


Durante los días 29, 30 y 31 de agosto tuvieron lugar en el Auditorio Mons. Octavio N. Derisi las ya clásicas jornadas del Seminario de Filosofía del Derecho del Doctorado, dirigidas por los profesores Félix Adolfo Lamas y Mauro Ronco. Las exposiciones se desarrollaron en el siguiente orden:

Lunes 29 de agosto: 18.15 Apertura, a cargo del profesor Daniel Herrera, Vicedecano de la Facultad; 18.30 Prof. Félix Adolfo Lamas (UCA, Argentina): *La razón humana frente al abismo (El nihilismo - Marco metafísico y temático)*; 19.15 Debate; 19.45 Prof. Mauro Ronco (Padua, Italia): *La aniquilación de la persona en la ideología de los “derechos humanos”*; 20.30 Debate.

Martes 30 de agosto: 18.15 Prof. Juan Antonio Widow (Valparaíso, Chile): *Metafísica y nihilismo*; 19.00 Debate; 19.30 Prof. Ricardo Dip (San Pablo, Brasil): *El nihilismo jurídico posmoderno*; 20.15 Debate.


Miércoles 31 de agosto: 18.15 Prof. Raúl Madrid (Santiago, Chile): *El nihilismo de la huella: una formulación contemporánea de la primacía de la diferencia*; 19.00 De-

bate; 19.30 Prof. Marcello Fracanzani (Údine, Italia): *El nuevo nihilismo jurídico: la perspectiva de injusticia que se advierte en la Unión Europea*; 20.15 Debate. Cierre de las jornadas a cargo del Decano de la Facultad, Prof. Gabriel Limodio.


Cabe destacar que las Jornadas se realizan en coordinación con la labor de investigación del Instituto de Estudios Filosóficos “Santo Tomás de Aquino”. Sitio web: www.viadialectica.com. 

Universidad Católica de Cuyo. Jornada Interse des de Filosofía del Derecho sobre Temas actuales del pensamiento jurídico

Se realizaron en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo, Sede San Luis, las citadas Jornadas el viernes 12 y sábado 13 de agosto, con la participación de profesores de las Sedes San Juan y San Luis de dicha Universidad. El programa de exposiciones desarrollado el viernes fue: “La familia, institución natural, jurídica y política”, por el Dr. Hugo Yanzón (Prof. Titular de Filosofía del Derecho y Prof. Titular de Obligaciones, Univ. Catól. de Cuyo, San Juan); “Razonamiento y argumentación judicial. Iusnaturalismo y positivismo jurídico” por la Dra. Claudia Bondanza (Prof. Asociada de Filosofía del Derecho y Prof. de Obligaciones, Univ. Catól. de Cuyo, San Juan); “Ilícitud intrínseca del aborto”, por el Dr. Marcelo Fernández (Prof. Adjunto de Filosofía del Derecho, Univ. Catól. de Cuyo, San Juan)

Las disertaciones del sábado fueron: “¿Es justa la renta del propietario de tierras? (Consideraciones en torno a la doctrina de Henry George)”, por el Dr. Horacio Quevedo (Prof. Titular de Derecho Político, Univ. Católica de Cuyo, San Luis); “El ‘principio de autonomía’ acerca de los bienes y derechos personalísimos, falso principio del derecho civil y falso principio de la bioética”, por el Dr. Camilo Tale (Prof. Titular de Filosofía del Derecho, Univ. Catól. de Cuyo San Luis y Prof. de Derecho Civil, Univ. Nacional de Córdoba). 

Cátedra abierta Carlos Alberto Sacheri en la Universidad Católica de Cuyo - Sede San Luis


Las actividades de este segundo año finalizan con la reunión que tendrá lugar el 27-10-11 de 19 a 21.30 horas (podría adelantarse al 26 a la mañana) dentro del Seminario sobre *Los principios de la política*. Se desarrolló el tema *El derecho natural a la participación política*, según este esquema, repartándose previamente bibliografía y la asignación de partes de la exposición: Una proposición básica (“el derecho natural a la participación”) y sus fundamentos según la concepción filosófica solidarista y según la concepción de la doctrina de la soberanía popular: tres etapas: Rousseau, Sieyes y la doctrina del partido político; derivaciones de las anteriores: Derecho constitucional solidarista y Derecho constitucional racionalista; Representación: representación *en* el poder y *ante* el poder; voto *directo* y voto *indirecto*: razones y consecuencias; la realidad de la participación y representación política argentina. Proyectos de otra participación y representación. Es director de la cátedra y de este curso Héctor H. Hernández, siendo Secretario académico Javier González Pondal, y las reuniones tienen lugar en el edificio de la Facultad de Derecho Pío XII de la UCC Sede San Luis, Felipe Velásquez 471, informes 02652 436383. 

Fundación Centro Cultural Universitario, Buenos Aires


El martes 27 de septiembre tuvo lugar la bendición de atrás de la nueva sede (Paraguay 1840 piso 3° “A” teléfono 4815-7430) de la Fundación Centro Cultural Universitario, cuya personería jurídica fue otorgada en 1980. Desde entonces, ha desarrollado múltiples actividades académicas, especialmente en el área de Filosofía del Derecho. La celebración religiosa estuvo a cargo de los Presbíteros Miguel Jorge Siufi y Cristián Ramírez. El Consejo de Administración está integrado por los Dres. Eduardo Martín Quintana, Horacio Roberto Granero y Daniel Alejandro Herrera, y las actividades son coordinadas por los Dres. Débora Ranieri de Cechini y Claudio Grosso. Se encontraban presentes los fundadores Lic. Enrique Del

Acebo Ibáñez, Lic. Gustavo Oliva Gigena, Dr. Santiago Maraggi y Dr. Francisco Vocos, además que también lo fueron los dos integrantes del Consejo mencionados en primer término. Asimismo algunos de los primeros cursantes de décadas atrás, como los actuales Decano y Vicedecano de la Facultad de Derecho de la UCA, Dres. Gabriel Limodio y Daniel Herrera, el Juez de la Nación Dr. Daniel Alioto, los Profesores Norberto Pecci, Virgilio Loiacono, Beatriz Veron y numerosas personalidades del ámbito académico, investigadores, magistrados, docentes, representantes de varias Academias nacionales e internacionales, de universidades y de asociaciones jurídicas profesionales.

El Ateneo de Formación Iusfilosófica, que dirige en ella el Prof. Dr. Eduardo Martín Quintana, ha llevado a cabo durante los meses de agosto y septiembre el curso Prudencia y hábitos intelectuales en Aristóteles. El orden de las reuniones fue el siguiente: martes 16 de agosto, Aproximación a la antropología aristotélica. El problema del conocimiento sensible-intelectual. La percepción. Sensibilidad y emociones (bibliografía: *Del alma*, libros II y III), a cargo del Dr. Eduardo Quintana. Martes 23 de agosto, Los hábitos intelectuales. Clasificación. Relación con los morales y entre sí (bibliografía: *Ética a Nicómaco*, libro VI), a cargo del Dr. Eduardo Quintana. Martes 30 de agosto: La amistad (*Ética a Nicómaco*, libro VIII), a cargo de la Prof. Débora Ranieri de Cechini. Martes 6 de septiembre, La prudencia: ¿por qué es la madre de todas las virtudes? (bibliografía: *Las virtudes fundamentales*, J. Pieper), a cargo del Prof. José M. Sacheri, junto a los profesores Juan Manuel Clérico y Luciano Laise. Martes 13 de septiembre, conclusión prudencia y felicidad (bibliografía: *Ética a Nicómaco*, libros VII y X), a cargo del Dr. Daniel Herrera.

Durante octubre y noviembre tuvo lugar el curso: “*Sobre la naturaleza de la sociedad política*”, a cargo del Prof. Claudio Grosso. El martes 8-11 disertó el Prof. Orlando Gallo acerca de la Filosofía del Derecho Constitucional. Informes: dcechini@hotmail.com. 

Instituto de Filosofía del Derecho - UFASTA, Mar del Plata

Tuvo lugar el 11 de agosto en el aula Santo Tomás de Aquino, la continuación del Seminario permanente Hacia los bicentenarios. *¿Qué constitución? ¿Qué Argentina? (Proyecto nacional, Derecho Público y orden natural cristiano)*, organizado con la cátedra de Derecho Constitucional del Dr. Fabián Fernández Garelló, y abordándose por segunda vez el tema religión y política. Se presentó y discutió el libro de Ricardo Bach de Chazal *Confesionalidad del Estado y libertad religiosa en la Legislación argentina* (UC La Plata, 2011), con la participación del autor y del Dr. Luis Roldán. 

Instituto de Filosofía Práctica, Buenos Aires

Damos a conocer parte de la intensa actividad registrada en el período.

19-05: Tertulia y presentación de libro del Dr. Mario Sacchi, *El mesianismo ideológico*.

14-06: Tertulia y conferencia: “La Constitución como organización del poder y el constitucionalismo como ideología”, a cargo del Dr. Orlando Gallo.


18-07: 75 años de la Revolución Española (hablaron los Dres. Antonio Caponnetto, Bernardino Montejano y Juan Luis Gallardo, quien leyó la poesía “Al alzamiento de julio”)

26-07: Tertulia con la exposición del Dr. Luis María Bandieri sobre “La crisis del constitucionalismo”.

Ciclo de conferencias: 9 de agosto - La imposible aventura del constructivismo (Dr. Mario Caponnetto); 16 de agosto - Los medios de comunicación y la construcción social de la realidad (Dr. Ernesto Alonso); 23 de agosto - La construcción de la imagen política (Dr. Luis María Bandieri)

13-09: Dr. Antonio Caponnetto - “El padre Castellani y la poesía” (homenaje al padre Castellani en el trigésimo aniversario de su muerte)

27-09: Tertulia en que hablaron el Dr. Gabriel Maino y el padre Ernesto Herrmann sobre “La jornada mundial de la juventud”, con proyección de video.

27-10: Conferencia del Dr. Augusto Padilla sobre “Algunas interpretaciones de Maquiavelo”. 


Centro de Formación Permanente “San Roberto Bellarmino”, Buenos Aires

Curso: *El orden temporal en el pensamiento católico*

Dictado por el R.P. Dr. Enrique J. Laje, S.I.

Temario: 1) ¿Qué es el hombre?; 2) ¿Qué es la sociedad?; 3) Los principios del ordenamiento social; 4) Matrimonio y familia; 5) El Estado.

Desde el 6 de agosto de 2011 los sábados de 9 a 11 hs.

Informes: 4801-2754, de lunes a jueves de 8 a 12 hs y de 17 a 21 hs. 

Noticias de San Miguel de Tucumán


Jornadas de Filosofía del Derecho

Las realidades históricas, las decisiones políticas, los avances científicos-tecnológicos, la aparición de nuevos paradigmas, han ido permeando la vida del Derecho hasta un punto crítico. Esto movilizó a los catedráticos tucumanos Dr. Pascual Viejobueno y Dra. Graciela Assaf junto a sus estudiantes; en el marco del proyecto de investigación “La concreción del Bien Común en el marco del Bicentenario”, a promover un espacio de reflexión, discusión y debate sobre “La crisis del derecho”, el cual se llevó a cabo los días 27 y 28 de septiembre, en el Colegio de Abogados de San Miguel de Tucumán.

El día martes 27 se reflexionó acerca de “La crisis del Derecho Internacional Público” en un panel que contó con la presencia de Alejandro Auat (UNSE) quien disertó sobre la “Soberanía en Vitoria. Claves transmodernas para un principio cuestionado”; Lic. César Sosa Padilla (UNT) con el tema “El derecho de gentes, la paz perpetua y el orden mundial”, y la Mag. Patricia Kreibohm (UNT-UNSTA) con “El terrorismo y su impacto en las relaciones internacionales”. Luego de un receso donde se prolongaron preguntas y lúcidas discusiones informales, continuó la jornada con el tema “La crisis del Derecho Penal” donde expusieron con profundidad intelectual y rigor conceptual: el Dr. Camilo Tale (UNC-UCC) “El abolicionismo penal en la doctrina argentina actual”, y el Dr. Oscar Emilio Sarulle (UNSTA) “Reflexiones acerca de la crisis de la legitimidad del sistema penal”.


El miércoles por la mañana continuaron las comunicaciones de destacados profesionales y estudiantes que desde diversas perspectivas abordaron el tema de las jornadas en un marco de respeto y predisposición al intercambio argumentativo. Por la tarde, hubo dos mesas paneles; en una se trató “Los dilemas de la bioética”, donde el Dr. Camilo Tale desarrolló “El principio de autonomía y el suicidio asistido”, junto con el Dr. Renato Rabbi-Baldi (UBA-UCASAL) quien abordó “Los dilemas de la Bioética desde la perspectiva de la Filosofía Jurídica”. En un segundo momento, se trató “La emergencia del Derecho Ambiental” donde el Dr. Raúl Díaz Ricci (UNT-UNSTA) reflexionó sobre “Solidaridad y medioambiente”, la Dra. Adriana Bestani (UNT) expuso acerca de “Precaución, filosofía y progreso”, y la Dra. Estela Massa (UNT) postuló “Sistema y complejidad en la cuestión ambiental”.

El éxito esperado desbordó al equipo organizador, donde el esfuerzo mancomunado de los catedráticos y alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán vio sus frutos. Ellos esperan con renovadas esperanzas crear nuevamente para el año 2012 un espacio para pensar, dialogar, y discutir al mejor estilo de la matriz de las universidades medievales.

El día miércoles 28 se le entregó el premio Jerome Lejeune al Dr. Renato Rabbi-Baldi en defensa de la vida por un valiente fallo de la Cámara Federal de Salta donde hizo valer los derechos humanos (derechos subjetivos naturales que todo hombre tiene por ser hombre y los embriones son hombres) de los embriones congelados (ver otra actividad tucumana en el Boletín de Bioderecho). 

Centro de Estudios de Derecho Natural “José Pedro Galvão de Sousa”, San Pablo, Brasil

El 24 de septiembre se celebró en el Centro de Estudios de Derecho Natural “José Pedro Galvão de Sousa”, en la Rua Avaré de São Paulo, una sesión sobre el tema “Nuevos modelos familiares y logofobia”, a cargo del magistrado y profesor Ricardo Dip.

Se presentó también el libro: *Fines de la pena. Abolicionismo. Impunidad* (Buenos Aires: Cátedra Jurídica, 2010) dirigido por Héctor Hernández, del que el profesor Dip es coautor, con un análisis de la alocución *Accogliete, illustri* del Papa Pío XII. 



OTRAS LATITUDES

Archives de philosophie du droit, tomo 52: *L'arbitrage*, Dalloz, 2009, tomo 53: *Le droit pénal. Dossier. La bioéthique en débat*, Dalloz, 2010.

Si no estuviéramos al tanto de la crisis europea, sobre la que nos informan los diarios –y no del euro, sino de la entraña misma de la Europa arraigada en la fe cristiana–, la lectura de estos números, salvo excepciones que destacaremos, la pone en evidencia y, dada su fecha la preanuncia, por el mosaico que integran los números y el volumen de aportes de profesores angloamericanos o de temas del derecho anglo norteamericanos abordados por europeos. Sin descuidar los temas estrictamente europeos en el marco de la Unión, que ha atravesado el techo de la soberanía de las naciones, para dar cabida hegemónica a esas cataratas de derechos subjetivos inasibles que intentan formar un nuevo derecho para un mundo globalizado. No es raro presenciar la catástrofe actual con esos supuestos de estos tratamientos: la incredulidad como forma de convivencia, una vez “deconstruidas” las legitimidades de la Ilustración, y su fruto más amargo: la *epogé* y cataratas de declaraciones de potestades abstractas, vacías de contenido real, lo que se advierte en cuanto a las ideas y que lleva a estallidos casi cotidianos, ya sea de los “disconformes”, de los despedidos, de los naufragos recogidos en el Mediterráneo y en el Atlántico, de la hambruna de Etiopía, de las masacres de Siria y Libia, de la ausencia estadounidense en el conflicto libio, que a la postre sólo interesa a la pobre Italia carente de energía propia y hoy aún más necesitada del gas y el petróleo de Kadhafi cuando se cuestiona la energía atómica, la que por lo demás rechazó de manera plesbicitaria no hace mucho. Como si el mundo occidental no pudiera comprender lo que sucede con ex aliados que ahora resultan dictadores y de hoy menesterosos, hasta ayer epulones de segunda.

Forzoso es reconocer que cuando nos encontramos con una investigadora de fuste, como es Anne Lefebvre-Teillard (profesora emérita de la Universidad de París II), resulta altamente ilustrativo recorrer de su mano los ancestros del arbitraje, más aún cuando el manejo de los textos canónicos y civiles de principios del segundo milenio y sus sugerencias para la interpretación del actual art. 1482 del Código de Procedimientos civiles se circunscribe a tres cuestiones que atraviesan toda la historia del arbitraje: la distinción entre *arbitrator* y *amicabilis compositor*, el *exequatur* y la *apelación de las sentencias arbitrales*.

Estos trabajos, junto con el que se encuentra en el número siguiente (t. 53) debido a la pluma de PIERRE TERCIER (profesor emérito de la Universidad de Friburgo, Suiza) sobre *El arbitraje y las empresas*, constituyen el material ofrecido a los lectores sobre la institución.

Volviendo al primero de los números comentados, es dable destacar que el erudito análisis de la prof. Lefebvre-Teillard da pie, en su final, a lo que se ha dado en llamar *el arbitraje institucional*. De esta manera el trabajo que comentamos sirve también de estudio introductorio al número. Algo parecido sucederá con el primero de los trabajos del número siguiente, al que nos referiremos luego. MARIE-ANNE COHENDET (profesora de la Universidad de París I, Pantheon-Sorbonne) discurre sobre el *Arbitraje del Presidente de la República* en las diversas expresiones que éste ha tenido desde las caídas de las monarquías; DENOIX DE SAINT MARC (miembro del Consejo Constitucional y del Instituto de Francia) expone el interesante artículo sobre el *Arbitraje interministerial*. Lo mismo sucede con el trabajo de GEORGES DURRY (presidente honorario de la Universidad de París II) sobre el *Arbitraje en el ámbito deportivo*. En otro contexto lo hacen ALEC STONE SWEET (profesor de la Universidad de Yale) y FLORIAN GRISEL (doctorando en la Universidad de París) que exponen sobre *El arbitraje internacional: del contrato diáctico al sistema normativo* y HÉLÈNE RUIZ FABRI (profesora en París I) lo hace sobre *La regulación de diferendos por la OMC (Organización Mundial del Comercio)*. GEORGE A. BERGMANN (profesor de la escuela de leyes de Columbia) expone con precisión sobre *El papel respectivo de los tribunales y los árbitros en la determinación de la competencia arbitral* y DAVID CHEKROUN (profesor asistente de derecho de la Escuela Superior de Ciencias Políticas) y LAURENCE KIFFER (abogada parisina del estudio Teynier, Pic & asociados) realizan una buena síntesis sobre *El árbitro, el abogado y el juez*, sobre todo sus desempeños en el ámbito internacional, sobre lo que se expone JEAN-PIERRE ANCEL

(presidente honorario de la Cámara 1ª de la Corte de Casación) en *El arbitraje internacional en Francia (Principios y sistema)*. Más particularizado, puesto que se refiere al caso “Rainbow Warrior”, fallado en Ginebra el 30-9-87, el trabajo que reseñamos permite reflexionar sobre los hechos y el derecho aplicado al caso planteado por Greenpeace. Así *L'arc-en-ciel et le droit (algunas observaciones hechas a más de veinticinco años de un arbitraje)*, cuando los comentarios del fallecido Bruno Oppetit han sido superados por el derecho, como por la política y la ciencia. Esta tarea –de gran estilo– está a cargo del prestigioso catedrático FRANÇOIS TERRÉ (miembro del Instituto de Francia) que por lo demás ha sido miembro del mentado Tribunal Arbitral. Lo sigue el trabajo de MICHEL FRIOCOURT *Arbitraje y propiedad intelectual* y el de JULIEN CANTEGREIL *El desarrollo conceptual de la práctica arbitral* que completan esta sección con el trabajo que ya se indicó en el número del año siguiente.

En la segunda parte, dedicada a los ensayos –sin duda expresión de una *exposé* en el *seminaire*– encontramos trabajos de gran interés para nosotros como el de MARTHA NUSSBAUM (profesora en la Universidad de Chicago) *El primer fundador*, dedicada al pensamiento de Roger Williams, constitucionalista norteamericano que tuvo gran influencia en el pensamiento de James Madison, quien en su momento fue una de las fuentes constitucionales argentinas, que descubrió Sarmiento en su primer viaje a los Estados Unidos de Norteamérica. Williams, inglés de nacimiento, recibió la enseñanza de Edgard Coke y John Milton.

También resulta importante para nosotros el importante trabajo de ANNE BAILLOT (investigadora de la Universidad Humboldt de Berlín) y BRUNHILDE WEHINGER (profesora de la Universidad de Potsdam) sobre la figura y la obra de Federico II de Prusia, cuya tarea es sumamente importante para comprender el proceso de codificación de América latina; este trabajo titulado *Federico II rey-filósofo y legislador* se basa en los dos escritos dejados por el monarca; el primero cuando era príncipe heredero es *El anti-maquavelo* de 1740 y el segundo ya siendo rey: *Disertación sobre las razones de establecer o abrogar las leyes* de 1749, con especial análisis de cuatro temas: la primogenitura –y la bastardía–, el aborto, la tortura y el duelo. Inspirado en la obra de Montesquieu por el historiógrafo Rollin –con quien mantuvo una nutrida correspondencia– y el calvinista Thoiras –quien debió dejar Francia luego de la abolición del edicto de Nantes–. Federico II –radicalmente iluminista– fue quien solicitó a Samuel von Cocceji la tarea de codificar la jurisdicción prusiana que desembocó en el *Corpus Iuris Fridericiani* de 1749-51. Son también de gran interés las reflexiones de NICOLAS CASTOLDI: *Variaciones bergsonianas sobre la idea de derecho*, en las cuales se estudia la noción “oscura” del derecho que puede desprenderse de *Les deux sources de la morale et de la religion*, que si bien no aspira a iluminar el mundo jurídico, da pie a la obra de René-Jean Dupuy: *La clôture du système international* que se abre hacia dicho ámbito.

Luego leemos un trabajo más bien sociológico de JULIE ALLARD (miembro del Centro Perelman de Filosofía del Derecho de la Universidad Libre de Bruselas) titulado *El juez en Francia, un estatus en plena evolución*, cuyas finitas eruditas y amplias no muestran más que lo indicado en el título, con el destacado –nuestro– de que tal es la situación de los sistemas de derecho continental, como el nuestro. Sigue un trabajo de THOM BROOKS (profesor en la Universidad de Newcastle) sobre la responsabilidad de los Estados, titulado *D. Miller y “distributing responsibilities”*. Luego, con el agnosticismo axiológico y la neutralidad de estilo que es común en la vida universitaria de la Europa actual, hay otro trabajo de ANDRÁS JAKAB (investigador contratado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid) titulado *Principios* que se refiere al uso sofisticado de aquellos en la estructura lógica.

El número se cierra con el trabajo de CHARLES H. NORCHI (profesor asociado en la Universidad de Maine) titulado *Pensar bajo el Estado: retorno filosófico sobre la “nation building”* que resulta de interés como reflexión de la situación del jurista en medio de la ruptura del Estado bajo las presiones internas y externas, y como presentación de la tarea de la *New Haven School of Jurisprudence* en la reconstrucción de un Estado sobre la base de la comunidad, la ley, los valores, el poder, los mitos y los códigos que salvaguarden a la persona humana. Algo así, me parece,

como venir a descubrir la pólvora decimonónica en el siglo XXI. Finalmente, el volumen se cierra con valiosos comentarios bibliográficos y una tabla de los autores que han publicado sus trabajos entre 1994 y 2008.

El tomo 53 de los APD –*El derecho penal*– dedica su primera parte al abordaje del tema y se inicia con un estudio de gran importancia para la génesis de esta disciplina, escrito por PHILIPPE AUDEGEAN (profesor en la Universidad Sorbona nueva - París III). Y digo de gran importancia, pues entre nosotros se ha venido hablando de Beccaria como un “clásico”. Y sin duda lo es, pero como bien lo pone de relieve el autor, del fuego italiano de Beccaria sólo quedan las llamas. Porque la obra original *De los delitos y las penas*, redactada en italiano, fue sometida a la ortodoxa revisión iluminista de D'ALAMBERT, quien puso su redacción final en manos del ABBÉ MORELLET. Bajo su pluma se atempera un tanto ese calor y se encuadra la obra dentro de la ortodoxia del racionalismo. De allí que el resultado final en su primera edición –que fue francesa–, logra “unir la fuerza del razonamiento al calor del sentimiento”. No obstante esta historia, *caché*, ha sido Voltaire quien desde 1766 abre un amplio debate sobre esta obra, luego traducida al italiano. Su *Commentaire sur le livre des délits et des peines*. Estas conclusiones y desconocidos cambios de bando político de Beccaria como forma de adaptación al poder austríaco sobre el norte de Italia hacen de este trabajo un excelente disparador para repensar, hoy, el sentido de “los delitos y las penas”. Temas que atraviesan toda la pedagogía educativa, desde el ámbito familiar hasta la disciplina escolar y social. Tema trastocado por la transversalidad garanto-abolicionista que desde Piaget a Ferrajolli constituyen un desafío para la sociedad actual, incluso para el régimen disciplinario de las fuerzas armadas de las naciones.

El conocido historiador JEAN-LOUIS HALPERIN (profesor en la ENS), con la minuciosidad y la inteligencia a las que nos tiene acostumbrados en sus libros e investigaciones, continúa –en lo cronológico– la línea antes señalada en el trabajo de Audegean; es el autor de *La originalidad de la doctrina penalista de Francia luego de la codificación napoleónica*, donde analiza el contenido de los estudios, las obras de los penalistas y de los congresos –penitenciarios y criminalísticos– que han universalizado las tesis originariamente del libro de Beccaria, leídos desde sus verdaderas raíces: Hobbes y Bentham.

En cambio, el derecho penal norteamericano ha sido menos formal y autónomo, enraizándose más bien en una multidisciplinariedad basal, ha surgido y se ha desarrollado desde la sociología, la criminología, la economía, la filosofía y la teoría crítica. Así el trabajo de BERNARD E. HARCOURT (de la Universidad de Chicago) titulado *Penalidad neoliberal. Excepcionalismo, autonomía y pluridisciplinariedad en el derecho penal* da cuenta de esta concepción, recorriendo el pensamiento de Adam Smith, de Quesnay y de numerosos autores que han ido marcando la diferencia entre el derecho penal de Beccaria y las diversas corrientes de formación del pensamiento anglo norteamericano. En este sentido, entendemos que los primeros tres trabajos incluidos en este volumen son una buena brújula para quien quiera recorrer el tumultuoso mar del sistema –o antisistema– penal de la modernidad y postmodernidad: de D'ALAMBERT a FOUCAULT.

No podía faltar un largo *excursus* sobre la violencia y los paradigmas evidenciados o insinuados en estos tiempos. A ello se dedica el trabajo de PAUL W. KAHN, *Criminales, enemigos e imaginario de la violencia*, y el último aporte de esta sección: el trabajo de JEAN-MARC ROY (maestro de conferencias de la Universidad del Havre) *La violencia y el poder*. A partir de allí, largos *bavardages* se dan cita en el tomo, aunque revestidos de gola y chistera. Así encontramos el trabajo de BRUNO COTTE (juez de la Corte Internacional) y de JULIEN SEROUSSI (investigador asociado del ISCP) *La manifestación de la verdad en derecho penal internacional*; la exposición de MIREILLE DELMAS-MARTY (profesora del Colegio de Francia y miembro del Instituto) *Oportunidades y riesgos de una justicia penal internacional*, cuyas ideas principales hemos podido conocer por sus visitas al país; el trabajo de DAVID CHILSTEIN (profesor en la Universidad de Artois) *Competencia universal y justicia penal internacional. Observaciones sobre las competencias (jurisdicciones) de una articulación compleja*. También en esta línea encontramos el trabajo de GENEVIÈVE GIUDICELLI-DELAGE (profesora en París I) titulado *Las aguas turbias del derecho penal de la Unión Eu-*

(Continúa en la página siguiente abajo)

BIBLIOGRAFÍA

Libros cuyas reseñaciones pasaron por razones de espacio a último momento para el próximo número:

- LOZIER ALMAZÁN, BERNARDO, *Proyectos monárquicos en el Río de la Plata. Los reyes que no fueron*, Buenos Aires, Sammartino ediciones, Colección “Conciencia histórica”, 2011, 203 págs.
- DÍAZ ARAUJO, ENRIQUE, *Propiedad indígena (glosas críticas)*, Universidad Católica de La Plata, Colección “Al quite”, 2009, 112 págs.
- BREIDE OBEID, RAFAEL L., *Teología Política según Gueydan de Roussel*, Buenos Aires, Gladius, 2010, 308 págs.
- SÁNCHEZ DE LORIA PARODI, HORACIO M., *El pensamiento jurídico-político de Tristán Achával Rodríguez*, Buenos Aires, Quorum, 2008.
- DE ESTRADA, FERNANDO y OLIVERO, OSCAR y otros, *La tenencia de la tierra en la Argentina*, Universidad Católica de La Plata-Carbap, 2008, 202 págs.

- TALE, CAMILO, *La equidad o epiqueya (concepto, criterios y aplicaciones)*, Córdoba, Ediciones Trejo y Sanabria, 2011, 29 págs.

Este trabajo del destacado profesor CAMILO TALE es la versión ampliada de un artículo publicado en el *Diccionario histórico judicial de México*, editado por la Suprema Corte de Justicia de dicho país. Ahora, publicado de modo separado, se vincula con otro dentro de esta misma colección, *La cuestión de las leyes injustas*, también dedicado a la justicia de las normas, y al logro o no del resultado justo que debe ser su término, problemas que han sido –y siguen siendo– centrales en el pensamiento jurídico clásico.

En menos de treinta páginas –que para guardar la proporción reseñaremos en sólo unas pocas líneas– el Prof. TALE se introduce en la cuestión de la equidad (*epiqueya*), distinta de la equidad como *aequitas* que integra la famosa caracterización del derecho como “arte de lo bueno y equitativo”, equivalente a la aristotélica “lo legal y lo igual”.

En el opúsculo, TALE comienza desarrollando las distintas acepciones del término equidad en la moral y el derecho: la equidad como sinónimo de justicia, como igualdad ante la ley, solución justa librada a la discreción del juez, decisión judicial siguiendo el sentido natural de justicia, apartamiento de la ley positiva para evitar cometer una injusticia, virtud moral del juez correctora de la ley, y sinónimo de benignidad e indulgencia.

Luego, en el segundo apartado del trabajo, el autor da algunos ejemplos de la *epiqueya*, de gran utilidad para el lector. En la tercera parte, TALE cita a ARISTÓTELES, fuente principal e ineludible para el estudio de este tema, en sus obras *Ética Nicomachea*, y *Gran Ética*. Seguidamente, el iusfilósofo cordobés se introduce en el tratamiento de la cuestión según SANTO TOMÁS DE AQUINO (apartado cuatro), recurriendo a fragmentos de la *Summa Theologiae*.

En el quinto y sexto punto, se pone fin a la exposición del tema en el decurso histórico, mencionándose a pensadores de la Edad Moderna y citando a FRANCISCO SUÁREZ y también a IMMANUEL KANT, este último negador de la aplicación de la equidad.

El séptimo apartado del trabajo está dedicado a contestar dos interrogantes: ¿debe el juez juzgar según la equidad? y ¿es moralmente lícito que el obligado por la ley la deje de lado por *epiqueya*? Allí TALE realiza algunas precisiones, y concluye que

“hay que recomendar un uso amplio de la *epiqueya*, siempre que se cumpla el requisito para que sea precedente, o sea siempre que la aplicación del precepto resulte injusto en el caso” (pág. 20).

Posteriormente, en la octava sección del opúsculo, el jurista de La Docta trata la índole de la equidad, haciendo valiosas apreciaciones, por ejemplo, que “la solución que prescinde de determinado precepto legal para fundarse en otro principio o regla general, debe aplicarse no sólo al caso singular que se resuelve, sino a todo otro caso singular en el cual concurren las mismas circunstancias que han sido relevantes para dejar de lado aquel precepto en el caso que se resuelve” (pág. 21), y también que “aunque en la interpretación por *epiqueya* se deja de lado un precepto legal positivo, no es un apartamiento del derecho” (pág. 22). En el mismo apartado, el autor señala con acierto que existe una imposibilidad de aplicar la equidad respecto de la ley jurídica natural, explicando que la *epiqueya* sólo actúa en relación a la ley positiva.

En el noveno apartado, TALE sigue a SUÁREZ, en lo referente a la necesidad de un resultado injusto que sería consecuencia de la aplicación de la ley positiva para que sea precedente la equidad.

Finalmente, el autor expone algunas categorías jurídicas que usan los jueces para aplicar la *epiqueya*: el abuso del derecho, la doctrina de la insignificancia o bagatela, el indulto, la declaración de inconstitucionalidad, y la interpretación restrictiva de una norma.

Y concluye el trabajo con la siguiente enseñanza: “Hay que afirmar con LUIS RECASÉNS SICHES que la equidad (en el sentido de *epiqueya*) es la manera correcta de interpretar todas las leyes y no es un procedimiento “extraordinario” para suavizar la aplicación de ciertas leyes” (pág. 29). Respecto de esta conclusión, debemos señalar que parece expresar una interpretación demasiado amplia del concepto de equidad (similar a lo que han hecho algunos compatriotas como ABELARDO ROSSI, CARLOS MASSINI CORREAS y SILVIO PESTALARDO). Según esta concepción amplia –que parece exceder a la de ARISTÓTELES–, la equidad no se ubica exclusivamente en lo que Félix Lamas ha llamado la aporía normalidad y excepción jurídicas, sino más bien en la cotidianeidad de la vida jurídica, más concretamente de la praxis judicial.



CARLOS G. ARNOSSI
UCA, Buenos Aires

VOZ: FILOSOFÍA DEL DERECHO

- TALE CAMILO, *La cuestión de las leyes injustas*, Córdoba, Ediciones Trejo y Sanabria, serie de Filosofía del Derecho, 2011, 50 págs.

El capítulo I se titula “Concepto de ley injusta y clases de leyes injustas”; el II, “Cómo deben obrar el súbdito y el juez ante la ley injusta”; el III, “El comportamiento real de los tribunales”.

En el primer capítulo se da la definición de ley injusta, diciendo que es injusta toda ley que mande o permita que se le quite a alguien lo que le pertenece sin razón que lo justifique, o que no se le dé aquello que le es debido. Esta capítulo continúa con la clasificación de las leyes injustas siguiendo lo dicho por SANTO TOMÁS DE AQUINO y dividiéndolas en las que lo son porque pretenden imponer que el súbdito cometa un acto malo o que se permitan actos malos, y las que son injustas porque

causan un perjuicio injustificado al destinatario que las cumpla. Luego se hace mención a las doctrinas que niegan la existencia de dichas leyes, entre los que se pueden destacar a HOBES y a ROUSSEAU. Por último, se plantea el interrogante sobre si la ley injusta es ley, concluyendo que se trata de una cuestión terminológica y que si se considera la finalidad de instituir la justicia en las relaciones humanas y el objetivo de promover el bien común como elementos esenciales de la ley, un mandato injusto del legislador no puede ser considerado como ley. Pero si en lugar de atender al referido sentido esencial, tenemos en cuenta los otros elementos que constituyen el concepto, el mandato injusto puede denominarse ley aunque se trataría de leyes en cierta acepción del término.

El segundo capítulo comienza con el interrogante sobre si hay obligación moral de obedecer las leyes injustas. Aquí se citan doctrinas como la de SANTO TOMÁS que niegan tal deber, diciendo que las leyes injustas que establecen algo injusto para el súbdito no son moralmente obligatorias, salvo que la inobservancia del precepto trajera aparejado escándalo o desorden y que las que obligan a hacer algo malo también carecen de obligatoriedad, pero además, hay obligación moral de no obedecerlas.

En cuanto al obrar del tribunal si el texto de la ley contiene algo contra el derecho natural, la convierte en injusta, y no tiene fuerza para obligar, pues el derecho positivo rige sólo cuando es indiferente para el derecho natural el que una cosa sea así o de otro modo. Luego hay doctrinas sobre la obediencia incondicional de las leyes positivas como, por ejemplo, la de Hobbes que considera que no solamente es injustificable cualquier desobediencia de la ley civil, sino que además el único criterio de lo justo y de lo injusto en la sociedad es la misma ley civil. Por último, se mencionan las doctrinas intermedias que admiten la desobediencia de la ley sólo en los casos de injusticia grave, evidente e irreparable. Como conclusión de este capítulo, el autor dice que las leyes que son ciertamente injustas no generan ninguna obligación moral de cumplirlas, ya se trate de una injusticia grave, ya sea leve, porque la obediencia es debida a quien manda una cosa dentro de los límites de su competencia y cuando el legislador prescribe lo inicuo, entonces su pretensión cae fuera de la competencia que el posee. En lo que toca a la conducta del juez en particular, este tiene, en razón de su cargo, el deber de administrar justicia, y por ende cuando la observancia de un precepto de la ley civil importe causar o convalidar una injusticia, no debe aplicarlo, ya que cuando el juzgador se aparta de la ley injusta no se aparta del derecho, porque obedece a principios o normas jurídicas fundamentales siempre vigentes.

El tercer y último capítulo comenta que los jueces en todos los tiempos y en todas las sociedades a menudo se han abstenido de aplicar leyes injustas y que en la práctica, los tribunales suelen apartarse de las leyes sin que declaren explícitamente que lo hacen.

Razón por la cual cuando los tribunales soslayan la aplicación de reglas legales injustas, lo hacen mediante una tarea de “interpretación” según la cual concluyen que la norma es “inaplicable al caso”; también mediante la aplicación de algún principio general del derecho que hacen prevalecer sobre la regla que reputan injusta, o con la declaración de inconstitucionalidad.



BRUNO NATIELLO
UFASTA Mar del Plata

VOZ: FILOSOFÍA DEL DERECHO

ropea. Algo más vinculados a la realidad son el trabajo de PIERRE DELVOLVÉ (miembro del Instituto) titulado *Derecho penal y derecho administrativo*, el aporte de JACQUES-HENRI ROBERT (profesor emérito de la Universidad de París II) titulado *Los reincidentes*, el artículo de PHILIPPE CONTE (de la misma universidad) titulado *La despenalización del derecho de los negocios* y el aporte de JEAN-MARIE DELARUE (controlador general de los lugares de detención) titulado *Sentido y extensión del control de los lugares de privación de libertad*. Seguidamente JEAN DANET (de la Universidad de Nantes) se hace cargo de bosquejar el tema de la concurrencia de los procedimientos penales.

No más comprometida es la reflexión de JON ELSTER (profesor del Colegio de Francia) sobre *Secreto y publicidad en el procedimiento con jury* y la exposición de JULIEN CANTEGREIL (profesor de Escuela Normal Superior) sobre el problema de la competencia en el juicio “Padilla vs.

Yoo” que titula *Dicey revisado. Sobre la responsabilidad de los jurisconsultos en la suspensión del derecho penal*.

Con estos trabajos termina la primera parte del volumen, luego de lo cual se abre el tema *La bioética en debate*, a lo que no me referiré, por cuanto la problemática francesa –que es la nuestra– no puede, a mi entender, ser tratada *modus quaestionis* y no podría quizá ser de otra manera en la agnóstica universidad europea, cuando los árabes están en las puertas de Constantinopla. No obstante las ciento y pico de páginas que se dedican en este número a pasar revista al *status quaestionis* pueden servir de eficaz informativo a quienes prefieren considerar las cosas desde la óptica de estadísticas y congresos, antes de plantar la lanza de la defensa de los despojos que quedan en pie del orden natural de las cosas sociales.

La tercera parte, consagrada a los estudios, presenta un muy serio trabajo de MARTIN ROGOFF (profesor de la

Universidad de Maine) titulado *La teoría del derecho y la historia del derecho en los Estados Unidos. ¿Una conciliación?*. No sin una pizca de ingenio, puede leerse a continuación el trabajo titulado *Las relaciones entre el derecho y la moral en la obra de Ronald Dworkin* de WANDA MASTOR (profesora de Derecho Público en la Universidad de Limoges); el de SANDRINE PINA (de la Universidad de Saboya) sobre la teoría general del derecho administrativo, de Adolf Merkl, y el de ALAIN SÉRIAUX (profesor en Perpignan) que aborda la semántica del acto de juzgar.

El número se cierra con la reseña de varias obras aparecidas en los últimos años, tanto en francés como en inglés.



CARLOS RAÚL SANZ
Profesor emérito UCA

VOZ: FILOSOFÍA DEL DERECHO

(Viene de página 24)

“derecho a la vida” de la madre. Los debates sobre las estadísticas ocupan el centro de la escena, sin perjuicio de la decisiva importancia que tiene reconocer el derecho a la vida del niño desde la concepción como elemento clave para resolver el tema.

b) *Técnicas de fecundación artificial*: tanto en Senado como en Diputados avanzan los proyectos de ley de regulación de las técnicas de fecundación artificial, aunque con unas variantes significativas con relación al debate de los últimos veinte años. *El eje argumental*. Cambian el eje de la argumentación. En lugar de concentrarse el debate en el problema de la regulación de las técnicas en sí y todos los tópicos involucrados (beneficiarios, número de óvulos a fecundar, exigencia de infertilidad o esterilidad comprobadas, crioconservación de embriones, exigir el requisito de matrimonio entre varón y mujer, prohibición de la dación de gametos, entre otras situaciones), el foco está puesto en torno a la inclusión de estas técnicas en el Programa Médico Obligatorio. De esta manera, no sólo se pierde el eje de la defensa de la vida por nacer, avasallada por las técnicas que manipulan su identidad y provocan importantes pérdidas de vidas humanas, sino que se genera un clima de debate muy sensible, donde pareciera que cualquier afirmación que cuestione las técnicas es ofensiva hacia las personas que padecen infertilidad. De esta manera, se pretende silenciar a las voces críticas y a su vez generar un clima comunicacional favorable a unos proyectos manifiestamente contrarios al derecho constitucional.

En el Senado, ya hay dictamen de la Comisión de Salud, en consideración en la comisión de Trabajo. El proyecto se limita a incorporar al Programa Médico Obligatorio, “como prestaciones obligatorias y garantizadas, las técnicas de reproducción médicamente asistida” (art. 1º). En el art. 2º se expresa que se incluyen dentro de la cober-

tura “todas las consultas, estudios, diagnósticos, tratamientos terapéuticos, medicamentosos o no, y demás prácticas de fertilización humana médicamente asistida, desde las de baja hasta las de alta complejidad, según lo establezca la autoridad de aplicación, de conformidad con el estado y avance de la ciencia y la técnica”. El art. 3º establece la autoridad de aplicación (Ministerio de Salud de la Nación) y el art. 4º crea un Consejo Consultivo Médico en Fertilización Asistida, con funciones de asesoramiento, dictamen y evaluación. El art. 5º señala como deber de la autoridad de aplicación: “Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho igualitario de todos los beneficiarios del sistema público a las prácticas normadas por la presente, proporcionando centros de referencia distribuidos en todo el territorio nacional con miras a facilitar el acceso a las mismas de la población sin otra cobertura” y también realizar campañas de información sobre las causas de infertilidad y los tratamientos existentes.

Por su parte, en *Diputados*, un proyecto de ley cuenta con dictamen de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Legislación General.

Desprotección de la vida humana. Sin perjuicio de consideraciones específicas para cada proyecto, podemos señalar que en general los proyectos no protegen a la vida humana concebida. Además, señalamos que a la luz de las experiencias internacionales, esta aplicación de las técnicas conduce la pérdida de un alto número de embriones y a otros atentados contra la vida y la identidad de los embriones concebidos.

Técnicas altamente costosas. Por otra parte, no es nada habitual que el sistema de salud deba cubrir estas prestaciones, que son enormemente costosas. No se han realizado estudios para ponderar los costos incrementales que esta medida tendrá sobre las personas involucradas, ya sea en salud pública como en obras sociales o medicina prepa-

ga. Se trata del uso de fondos públicos y aun privados para técnicas que involucren la destrucción de embriones humanos. *La cuestión en Estados Unidos*. En los Estados Unidos, aun bajo el gobierno del actual Presidente, el derecho a la vida es respetado como límite y siempre se decide no utilizar fondos públicos para financiar programas de salud que involucren pérdida de vidas humanas. Así sucedió en julio de 2009 al aprobarse los lineamientos para la investigación en células estaminales embrionarias por parte de los National Institutes of Health y también en 2010 al aprobarse la reforma integral de salud.

Carencia de previsiones penales. Los proyectos no contienen normas penales, de modo que no sancionan las conductas más graves como la generación de híbridos, la creación de embriones para investigación, el tráfico de embriones, la selección de embriones según características genéticas o la mera eliminación de embriones.

Identidad de los niños. Además, la aprobación de las técnicas heterólogas conduce a una grave afectación de la identidad de los niños, que ven disociadas la paternidad volitiva de la genética. Además, se cosifica a la persona humana, que se convierte en un mero objeto sometido a parámetros técnicos y contratos que disponen sobre elementos fundamentales de su identidad.

Cabe recordar que estas técnicas no se rigen por la lógica médica sino por una lógica biotecnológica, de tal manera que el acceso a estas técnicas dependerá únicamente del “deseo reproductivo”.

Esperamos que estos proyectos no sean finalmente aprobados por el Congreso Nacional, pues significarían un grave atentado contra la dignidad y derechos fundamentales de la persona humana en sus primeras etapas de vida.

NICOLÁS LAFERRIÈRE
UCA Buenos Aires

VOCES: FILOSOFÍA DEL DERECHO - BIOÉTICA

EDICTOS			
REMATES			
EMILIANO FASSINO			
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 6, sito en Avda. de los Inmigrantes 1950, 4º piso, Capital Federal, a cargo del Dr. Juan Manuel Converset , Secretaría Única a cargo de la Dra. Silvia Cantarini , comunica por dos días en autos “CUEVAS, EDUARDO ALBERTO c. ETCHEGARAY, MARÍA EUGENIA s/ ejecución hipotecaria” Expte. 56.565/91, que el martillero Emiliano Fassino subastará el día 1 de diciembre de 2011 a las 10:15 hs. en Jean Jaurés 545, C.A.B.A., el inmueble ubicado en la calle Paraguay 830 entre las calles de Guatemala y San Salvador de la localidad de Pilar, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires, Nom. Cat.: Circ. VII; Sec. F; Mz. 53; Parc. 9, Partida FR6634 de superficie total 365 m2. Este inmueble, según constatación, se trata de una construcción de dos plantas constituida por tres dormitorios, una cocina comedor y un baño con parque hacia su fondo, todo en regular estado de conservación y ocupado (fs. 468). Subastándose tal como se halla en exhibición se podrá visitar los días 24 y 25 de noviembre próximos de 11:00 a 13:00 horas. Base: \$ 65.000, Señá 30%, Comisión 3% más IVA, Sellado de ley 1% y 0,25% de arancel según Acordada 10/99 de la C.S.J.N. Al contado y al mejor postor, debiéndose depositar el saldo de precio dentro del quinto día de aprobada la subasta sin necesidad de otra notificación ni intimación bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 580 del CPCC. Quien o quienes resulten compradores deberán constituir domicilio dentro del radio del juzgado, bajo apercibimiento de que las providencias que se dicten en lo sucesivo le sean notificadas en los términos del art. 133 del Código Procesal. Conforme lo establecido por el Fallo Plenario de la Cámara Nacional Civil del 18/02/99 en los autos “Servicios Eficientes S.A. c. Yabra, Roberto Isaac s/ Ejecución Hipotecaria”, no corresponden de que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas y contribuciones, devengadas antes de la toma de posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcanza para solventarlas. No cabe una solución análoga respecto de las expensas comunes para el caso de que el inmueble se halle sujeto al régimen de la ley 13.512. Deudas: ARBA: \$ 320,70 al 04/3/11 (fs. 430), Municip. de Pilar: \$ 1.684,00 al 26/11/10 (fs. 423), Sudamericana de Aguas: No posee servicios por estar fuera del radio al 15/11/10 (fs. 418). Buenos Aires, 15 de noviembre de 2011. Silvia Cantarini , sec.			
I. 21-11-11. V. 22-11-11	3686		
SUCESIONES			
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 103 a cargo del Dr. Martín A. Christello , Secretaría a mi cargo, sito en la Av. de los Inmigrantes 1950 piso 1º. Cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de Doña CRISTINA ELVIRA VILLEGAS VELASQUEZ a los efectos de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días en el diario El Derecho. Buenos Aires, noviembre 3 de 2011. Fe. Eduardo Alberto Villante , sec.			
I. 18-11-11. V. 22-11-11	31074		
El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 80, a cargo del Dr. Daniel Guillermo Alioto , Secretaría única, a cargo del Dr. Santiago Pedro Iribarne , con sede en Av. de los Inmigrantes 1950, piso 6º Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de PERKINS INES JOSEFINA, quien falleció el 08 de noviembre de 2010. El presente deberá publicarse por tres días en el diario El Derecho. Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011. Santiago Pedro Iribarne , sec.			
I. 21-11-11. V. 23-11-11	3685		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 57, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, 4º piso de esta Ciudad, Secretaría única a cargo de la Dra. Mercedes M. S. Villarroel , cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de ANDREA CLAUDIA PALATNIK. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011. Mercedes M. S. Villarroel , sec.			
I. 21-11-11. V. 23-11-11	31091		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 20 cita y emplaza por el término de treinta días a los acreedores y herederos de doña COSTAS, BLANCA ROSA PILAR. Publicar por tres días. Buenos Aires, 4 de noviembre de 2011. Juan Carlos Pasini , sec.			
I. 18-11-11. V. 22-11-11	31079		
El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Número 14, Secretaría única de Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de JOSE PASCUAL LIONETTI. El presente deberá publicarse por tres días en el Boletín Oficial y en el diario El Derecho de Capital Federal. Buenos Aires, 14 de octubre de 2011. Cecilia V. Caire , sec.			
I. 18-11-11. V. 22-11-11	31076		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 11, Secretaría Única, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de SEVERINA GONZALEZ LOPEZ y MANUEL FERREIRO VIERIOS. Publíquese por tres días en el diario El Derecho. Buenos Aires, junio 30 de 2011. Javier A. Santiso , sec.			
I. 18-11-11. V. 22-11-11	31072		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 105, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de JULIO ARGENTINO OLMEDO. El presente edicto deberá publicarse por tres días en El Derecho. Buenos Aires, 8 de noviembre de 2011. Santiago Strassera , sec.			
I. 21-11-11. V. 23-11-11	31081		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 65, a cargo de la Dra. María Gabriela Fernández Zurita , Secretaría Única a mi cargo, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de MARCOS CUSIN y de ANTONIETA CUSIN. El presente deberá publicarse por tres días en El Derecho. Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011. Andrea Bordo , sec.			
I. 18-11-11. V. 22-11-11	31075		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 47, Secretaría Única, sito en Av. de los Inmigrantes 1950 4º piso de esta Ciudad, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de FREYRE MARTA HEBE. Publíquese por tres (3) días. Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011. Silvia R. Rey Daray , sec.			
I. 21-11-11. V. 23-11-11	31085		
El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 35, Secretaría Única, cita y emplaza por el término de treinta (30) días a herederos y acreedores de BORIS MELIJOVICH. Publíquese por tres (3) días en el diario El Derecho. Buenos Aires, 19 de octubre de 2011. Gustavo G. Pérez Novelli , sec.			
I. 21-11-11. V. 23-11-11	31082		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 59, Secretaría Única de Capital Federal, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de KESELMAN JUDKA. El presente edicto deberá publicarse por tres días en El Derecho. Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011. Santiago A. Fernández , sec. int.			
I. 21-11-11. V. 23-11-11	31086		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 105, Secretaría Única cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de don OSCAR EDUARDO GIORDANO. Publíquese por el plazo de tres días. A publicar en el diario El Derecho. Buenos Aires, 9 de noviembre de 2011. Santiago Strassera , sec.			
I. 21-11-11. V. 23-11-11	31088		
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Nº 100 Secretaría única a cargo del Dr. Oswaldo Guillermo Carpintero , de esta ciudad, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de SAVAS JORDAN. Publíquese por tres días en El Derecho. Buenos Aires, 14 noviembre de 2011. Oswaldo G. Carpintero , sec.			
I. 18-11-11. V. 22-11-11	31073		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 58, Secretaría única de la Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de VIZZARGÜENAGA MARÍA ISABEL a fin que se presenten a hacer valer sus derechos. El presente deberá publicarse por tres días en el Boletín Oficial y el diario El Derecho. Buenos Aires, 21 de octubre de 2011. María Alejandra Morales , sec.			
I. 21-11-11. V. 23-11-11	31092		
Edictos Boletín Oficial y El Derecho. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 58, a cargo de la Dra. María Isabel Di Filippo , Secretaría única, a cargo de la Dra. María Alejandra Morales , sito en la calle Avda. De Los Inmigrantes 1950, piso 5º, de esta ciudad, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ELIDA LILIA MORENO. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 24 de octubre de 2011. María Alejandra Morales , sec.			
I. 18-11-11. V. 22-11-11	31078		
El Juzgado de Primera Instancia Civil Nº 58, secretaría única, sito en la calle Av. de los Inmigrantes 1950, 5º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta (30) días a herederos y acreedores de LOS CAUSANTES MIGLIORINI, MIRIAM LUJAN; MAGURNO, LUJAN ANTONIA y MIGLIORINI, ADOLFO RICARDO a fin de hacer valer sus derechos. El presente edicto, deberá publicarse por tres (3) días en el diario El Derecho. Buenos Aires, 7 de noviembre de 2011. María Alejandra Morales , sec.			
I. 21-11-11. V. 23-11-11	31090		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 79, Secretaría Única, cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de ANGEL GONZALEZ, a los efectos de hacer valer sus derechos. El presente edicto deberá publicarse por tres días en el diario El Derecho. Buenos Aires, 11 de noviembre de 2011. Paula E. Fernández , sec.			
I. 21-11-11. V. 23-11-11	31083		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 49, sito en Uruguay 714, Piso 7, Ciudad de Buenos Aires, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de ELENA FRANCISCA OVIEDO, a los efectos de que hagan valer sus derechos. Publíquese por tres días en El Derecho. Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011. Elba M. Day , sec. int.			
I. 18-11-11. V. 22-11-11	31071		
El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 71 cita y emplaza por el plazo de treinta días a herederos y acreedores de JOSÉ MARÍA BARON a presentarse en autos a fin de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 19 de octubre de 2011. Inés M. Leyba Pardo Argerich , sec. int.			
I. 22-11-11. V. 24-11-11	31093		
El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 49, Secretaría, única cita y emplaza por 30 días a herederos y acreedores de IRIARTE ELENA AMALIA, a fin de hacer valer sus derechos en los términos del art. 699 del CPCC. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 8 de julio de 2011. Elba M. Day , sec. int.			
I. 22-11-11. V. 24-11-11	31095		
El Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil N 105, cita y emplaza a herederos y acreedores de don JUAN SERRE por el plazo de treinta días a fin de que hagan valer sus derechos. El presente edicto deberá publicarse por tres días en el diario El Derecho. Buenos Aires, noviembre 10 de 2011. Santiago Strassera , sec.			
I. 22-11-11. V. 24-11-11	31096		



EL DERECHO

Diario de Doctrina y Jurisprudencia

Primer Director: Jorge S. Fornieles (1961 - 1978)

Propietario UNIVERSITAS S.R.L. Cuit 30-50015162-1
Tucumán 1436/38 (1050) Capital Federal

REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y VENTAS:
TEL. / FAX: (011) 4371-2004 (líneas rotativas)
E-MAIL: elderecho@el-derecho.com.ar

BOLETÍN DE BIODERECHO IX



XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil

1) El pseudomatrimonio de personas de igual sexo es inconstitucional

Una conclusión anunciada: la inconstitucionalidad de la ley de matrimonio homosexual y sus repercusiones

1. El Debate

Las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil desarrolladas en San Miguel de Tucumán entre los días 29 de septiembre y 1º de octubre con más de 1000 inscriptos, en las que se debatieron 371 ponencias en 14 comisiones, pusieron en el centro del debate de la Comisión de Derecho de Familia, la reciente modificación al Código Civil que admite el denominado “matrimonio igualitario”, o más comúnmente llamado “matrimonio” homosexual. Se trata del certamen científico más importante del derecho privado, que se reúne cada dos años en distintos puntos del país. Desde su inicio en 1963, se ha caracterizado por ser base de profundos análisis del derecho vigente, así como cuna de las futuras reformas legislativas. En esta edición resultaba ineludible el tratamiento de una reforma tan significativa como la introducida por la discutida ley 26.618, aprobada luego de malabares legislativos y políticos para forzar la obtención de una acotada mayoría.

2. Valoración de la constitucionalidad de la admisión del pseudo “matrimonio” homosexual

Uno de los puntos centrales del debate fue la pertinencia constitucional de la mencionada ley. A partir del tratamiento de la ponencia de la Dra. Catalina Arias de Ronchietto se planteó la disyuntiva sobre la constitucionalidad o no de la norma. Por amplia mayoría se concluyó que la misma resultaba inconstitucional, recomendándose igualmente su derogación.

La Comisión tuvo en cuenta que la no inclusión en el derecho interno de variantes del matrimonio para personas homosexuales no importa un acto discriminatorio. La Corte de Estrasburgo en sentencia reciente expresó que en virtud del derecho fundamental de toda persona a casarse (art. 12, Convención Europea de Derechos Humanos, equivalente al art. 17 de la Convención Americana de Derechos Humanos), los estados miembros no se encuentran obligados a prever en sus legislaciones una equiparación de las uniones homosexuales con el matrimonio heterosexual. De este modo dejó sentado que no resulta violatorio para los derechos fundamentales la conservación del matrimonio entre hombre y mujer, único, y base fundamental de la familia.

Ante el reclamo de que se regularan algunas situaciones de tipo asistencial derivadas de la convivencia, ajenas al matrimonio, la Comisión se expidió favorablemente recomendando su previsión legal. Se trata de casos de personas solas que conviven, sin trato familiar ni conyugal, por largo tiempo por cuestiones económicas o aún amicales. Nuestra ley no contempla ninguna solución que los ampare. Extrañamente, el Congreso de la Nación se avocó decididamente a la inserción del matrimonio homosexual como una solución “reclamada” por la sociedad –cosa que quedó desmentida en las sucesivas audiencias realizadas en las provincias–, y no atendió a estas situaciones.

Sobre estas pautas cobró fuerza la propuesta derogatoria, en tanto se analizaron las distorsiones que la admisión de la figura del matrimonio homosexual reputa para el ordenamiento jurídico, poniendo en riesgo derechos fundamentales como el de la identidad. Así se trabajó detenidamente el problema de la filiación y del derecho a la identi-

dad del niño, seriamente comprometido con la nueva legislación.

3. Repercusiones sobre el régimen filiatorio y sobre la identidad del niño

Un tema de tratamiento inexorable fue el de las derivaciones que la admisión como matrimonio de las uniones homosexuales tuvo en el régimen filiatorio. Hasta la sanción de la ley 26.618 nuestra legislación descansaba sobre el hecho biológico de la procreación como dato fundamental. A partir de este se erigían los lazos parentales, cuestionándose la normativa sobre la adopción plena, en tanto se desentendía de la realidad biológica de la identidad del niño. Alguna doctrina (Graciela Medina, participante activa en el Congreso) ha llamado la atención sobre esta situación, calificando de “caos” el régimen impuesto por la nueva ley y como violatorio de los derechos del niño. La nueva ley, destinada a solucionar las aspiraciones individuales de un sector de la sociedad, redimensiona el vínculo jurídico de la filiación adecuándolo a esta conveniencia. En pos de la inserción de un niño en el seno de estas parejas, se relega la realidad biológica asumiendo que la filiación no deriva esencialmente de la naturaleza, sino de la voluntad procreacional, de los lazos afectivos que puedan establecerse.

En torno a este punto, la Comisión fue contundente al afirmar por unanimidad que “los niños tienen derecho a que, en la medida de lo posible, se respete la unidad de todos los estratos de su identidad (genética, biológica, familiar, social y jurídica)”, a lo que se agregó por sólida mayoría que deben prohibirse contratos que manipulen o supriman el derecho a la identidad.

Un niño no tiene dos madres. Se rechazó la posibilidad de que la “voluntad procreativa” sea considerada como fundamento de la filiación, desplazando al vínculo biológico. En esta línea se rechazó la postulación de que se dicte una norma según la cual en la unión de dos mujeres, el hijo habido por fecundación asistida sea considerado como matrimonial si el tratamiento se realizó con el consentimiento de la otra. Por ello se resolvió que “a la luz del derecho a la identidad del niño y de las normas civiles vigentes, en caso de que una mujer casada con otra mujer diera a luz un hijo, la filiación debe considerarse extramatrimonial”. Revalorizando la esencialidad del vínculo biológico y de la realidad natural que caracteriza a la filiación se concluyó que “en materia de filiación natural, el Código Civil consagra el sistema binario (madre-padre), por lo que en el caso del matrimonio entre dos mujeres o de dos mujeres convivientes, el hijo gestado por una de ellas no puede tener dos madres. La gestante es la única madre del nacido”.

Adopción. En cuanto al régimen de adopción se completaron los lineamientos antes descriptos bregando por que se deroguen las normas que permiten la adopción de integración del hijo del otro integrante del trato homosexual, estableciéndose el impedimento de adoptar en tales circunstancias.

En definitiva, se trató de un amplio y respetuoso debate que puso de relieve las falencias de una legislación improvisada e impuesta por una agenda ajena a nuestro país. Como lo señala Bruno Bimbi en su libro *Matrimonio igualitario*: “ahí nos dimos cuenta de que había que meterse con el matrimonio porque era, justamente, lo que provocaría un profundo cambio cultural que era el eje del trabajo de La Fulana en aquel momento. Era el matrimonio lo que iba a desestabilizar los presupuestos culturales que se usan para legitimar la discriminación contra nuestras familias –recuerda María...”.

ÁNGEL L. MOIA
Paraná, Entre Ríos

2) La autonomía del paciente es relativa

Otros temas de las XXIII Jornadas. En la Comisión Nº 9 se debatió acerca de los alcances de la ley 26.529 de derechos del paciente. En especial, las discusiones versaron sobre el principio de autonomía, entendiéndose por mayoría que éste “resulta un principio rector que permite decidir el proyecto autorreferencial de vida”, con dos disidencias que establecen que “El principio de autonomía no debe ser entendido como la disponibilidad absoluta de los derechos o bienes personalísimos” (Dr. CAMILO TALE) y “La autonomía del paciente no es absoluta sino que está sujeta a límites constitucionales y legales y bienes de rango superior, orden público, moral y buenas costumbres y el daño a terceros” (Dra. SILVIA MARRAMA).

Especial importancia revisten las siguientes conclusiones de la Comisión de derechos del paciente: “El art. 2º, inc. f) de la ley 26.529 referido al derecho a no ser informado debe ser interpretado teniendo en consideración que no sean puestos en riesgo los derechos de terceros”. “La directiva médica anticipada no debe ser confundida con una práctica eutanasia y debe ser considerada como un acto jurídico personalísimo, unilateral”.

De lege ferenda: “Se recomienda que en los casos de pacientes de máxima vulnerabilidad se les garantice los cuidados paliativos brindados por un equipo interdisciplinario.”

El Dr. TALE recomienda en la reglamentación que se dicte, con respecto al deber de confidencialidad del art. 4º de la ley la excepción para el caso de enfermedad grave transmisible a tercero determinado. La Dra. MARRAMA recomienda la sanción de una ley nacional de objeción de conciencia”.

SILVIA MARRAMA
Paraná

3) Propuestas legislativas en el Congreso de la Nación

Atentados contra la dignidad y derechos fundamentales de la persona humana

Una intensa actividad en torno a las cuestiones bioéticas se registra en el Congreso Nacional en la segunda mitad de 2011. Veamos:

a) *Aborto:* En la Cámara de Diputados, existen ocho proyectos de ley que propugnan la despenalización o legalización del aborto, a saber: Exptes. 57-D-10 de la diputada Diana Conti; 515-D-10 de la diputada Juliana Di Tullio; 659-D-10 del diputado Martín Sabatella y otros; 998-D-10 de la diputada Juliana Di Tullio y otros; 2435-D-10 del diputado Miguel A. Barrios y otros; 7054-D-10 de la diputada Gladys González; 7953-D-10 del diputado Gustavo Cusinato y 4206-D-2011 de diputado Juan Carlos Vega y otro.

Los proyectos tienen giro a las Comisiones de Legislación Penal, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Acción Social y Salud Pública. Hasta el momento, el tema ha generado dos reuniones especiales de la Comisión de Legislación Penal en la que se presentaron una representante de Human Rights Watch (30-11-10) y una representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (13-7-11), con posturas favorables al aborto. Luego de una fallida convocatoria para el 27 de septiembre, el Presidente de la Comisión de Legislación Penal, diputado Vega, convocó a su Comisión para tratar el tema el 1-11-11.

Argumentaciones. Las perspectivas son complejas y se verifica un giro en las líneas argumentales. El énfasis se ha puesto en los problemas de mortalidad materna y de esta manera, se pretende presentar al aborto como parte del